

ANÁLISIS DEL AÑO 2 0 0 6

POLÍTICA - ECONOMÍA - SOCIEDAD - TEMAS



Departamento de Sociología
Universidad de Chile

ENERO 2007

ANÁLISIS DEL AÑO 2006
SOCIEDAD - POLÍTICA - ECONOMÍA

Departamento de Sociología
Facultad de Ciencias Sociales
Decano: Marcelo Arnold

UNIVERSIDAD DE CHILE

DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN

Rodrigo Baño

CONSEJO EDITORIAL

Rodrigo Baño

Hugo Fazio

Carlos Ruiz E.

© Universidad de Chile, 2007
Departamento de Sociología
Registro de Propiedad Intelectual N° 144.534
ISSN 0718-1469

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045
3^{er} piso - Ñuñoa
Santiago - Chile

Teléfono/fax: 9787777
Teléfonos: 9787781 – 9787782

Impreso en Caligrafía Azul Ltda.
Fono Fax: 555 31 34
sita en Santa Elvira 101
Santiago - Chile

ÍNDICE

POLÍTICA

RODRIGO BAÑO

La justicia tarda, pero no llega

pág. 9

SOCIEDAD

CARLOS RUÍZ E.

¿Qué hay detrás del malestar con la educación?

pág. 33

ECONOMÍA

HUGO FAZIO Y MAGALY PARADA

2006: Un año de desaceleración económica

pág. 73

TEMAS

ALBERTO MAYOL

De Pinochet a Bachelet:

los ejes culturales de la dominación de 1973 a 2006

pág. 105

RODRIGO FIGUEROA

**Las relaciones laborales en el Chile actual:
tres estudios de caso**

pág. 133

Presentación

Desde el año 1998 porfiadamente venimos insistiendo en realizar estos Análisis del Año, que ingenuamente creemos que pueden servir para más de algo. Naturalmente no estamos para esperar el juicio de la historia ni el juicio final, así que volvemos a la carga sin ningún complejo.

Como no creemos en la modernización y ni siquiera en la originalidad, nos apoyamos en todo el peso de la rutina para insistir en entregar las mismas tres secciones de análisis: Política, Economía y Sociedad. Y también, tradicionalmente (¿y qué?!) incluimos la sección temas, donde se desarrolla algo que haya tenido relevancia en el período abarcado. Como tampoco flexibilizamos el empleo, serán los mismos de siempre los que hagan los trabajos centrales.

Con éste completamos el noveno volumen de análisis, correspondiente al mismo ordinal de años. De manera que ya se tiene una buena serie de análisis que se encuentran en las mejores bibliotecas del país y que se recomiendan muy calurosamente, no porque sean muy buenos, sino porque son, que ya es algo.

Y no lo cansamos más con la presentación, pues sabemos que en estos tiempos se lee poco y preferimos que alcance a leer el índice antes de encender el televisor.

La justicia tarda, pero no llega

RODRIGO BAÑO

PINOCHET, CLASES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE NADA

La cuadratura del círculo fue un juego maravilloso durante siglos, hasta que se impuso la aburrida cordura de declarar que no tenía solución. Lo mismo ocurrió con la santísima trinidad, pues sólo después de algunos pocos siglos los conformistas de siempre decidieron que era un misterio y ya no hubo más herejías en disputa. Ahora ya es difícil encontrar esos buenos problemas y hay que conformarse con pequeños desafíos para los concursos de creativos. Por ejemplo, ¿cómo convence usted a una pareja, que se ha jurado absoluta fidelidad, que se ponga condón para evitar el sida? Otro ejemplo, si usted no tiene medios de comunicación, ¿cómo comunica que los medios de comunicación no comunican nada o simplemente mienten? Difícil, ¿no?

Pero ya nos meteremos a ese tema de los comunicadores, por ahora y rápidamente, es necesario empezar la novela con un gancho dramático para que el lector siga leyendo. Se aconseja siempre empezar la novela al menos con un muerto... y le tenemos el muerto: Augusto Pinochet Ugarte, conocido también por otros nombres en trámites bancarios. Efectivamente, por fin el buen dios decidió llamarlo a su lado o llamarlo para alguna parte, que en esto del destino trascendental no nos vamos a comprometer, porque no tenemos conexión satelital ni de cable.

El caso es que se murió y el asunto no pasó desapercibido, sino que produjo gran escándalo, aprovechando los periodistas, políticos, comentaristas, personajes, la señora del tercer piso, el chofer de taxi, la profesora del niño y mi tío que anda en moto, para hacer uso del manoseado bagaje de los sitios comunes y hablar del tribunal de la historia, de objetivamente, de hay que mirar hacia delante, de aunque reconozco que, de esto marca el fin, y de muchos yo creo que y a mí me parece. Es decir, que por un momento dejaron tranquilos a los cambios de clima y a las enfermedades, porque encontraron un tema de conversación de mayor lucimiento.

Está bien, dirá la joven entrevistadora, pero dígame: ¿Usted cree que con la muerte de Pinochet se termina la división entre los chilenos que se arrastra desde hace tantos años? Entonces, poniendo cara de inteligente para tratar de impresionarla, preguntaré a mi vez: ¿De qué división me habla?

Entrémosle al asunto. Claramente con la muerte de Pinochet no pasa nada, por la sencilla razón de que hace ya bastante tiempo que dejó de tener vida útil políticamente hablando. Hace ya varios años que Pinochet estaba fuera del circuito político, salvo como elemento simbólico, y el símbolo, vivo o muerto, se transa en el mismo precio en el mercado político. No hay, pues, un hecho político con esta muerte. Pero lo que sí hay es un estallido de visibilidad, porque lo que genera este hecho es la necesidad de mostrarse.

En efecto, la derecha política, y especialmente la UDI, se ve forzada a renegar de lo que había renegado. Como se sabe, desde hace un tiempo, especialmente a partir de las elecciones de 1999, la UDI, encabezada por el casi-casi Lavín, se había venido haciendo la desentendida de su originariamente estrecha vinculación con Pinochet. Primero fue el reconocimiento de que algo pasó con los derechos humanos bajo el Gobierno de Pinochet, aunque se siguiera sosteniendo que éste ni siquiera se había enterado. Pero cuando empezaron a aparecer antecedentes de que el general había metido las manos en la caja, ya era difícil encontrar a los antiguos incondicionales. Desde ahí en adelante, todos empezaron a trabajar eso que llaman el perfil bajo y ni siquiera los anuncios de que se le internaba en el hospital militar con peligro de muerte conmovieron a sus antiguos amigos como para llevarle naranjas y galletitas de agua. Sin embargo, cuando se anunció su muerte sus antiguos amigos políticos sintieron que no podían dejar de escuchar la canción de Serrat con su fatal sentencia: “el caso es que un día nos tocó ir de entierro”. Y para allá partieron, mientras que otros partieron para otro lado, y la mayoría se quedó con su circunstancia, o su televisor, que para el caso da lo mismo.

Naturalmente esto no tiene nada de raro, corresponde a lo que siempre se ha dicho: el golpe militar y el régimen que de ahí resultó provocaron una profunda división entre los chilenos. Todos hacen referencia a esto, y los bienintencionados, que son todos cuando hablan en público, suelen agregar que esperan que esta división termine y que todos los chilenos se unan mirando al futuro y no al pasado. Algunos, con visión histórica (dicen ellos), creen que esto se solucionará en las generaciones futuras, que no habrán vivido el trauma que significó ese período. Esto no tiene nada de raro, porque se repite mucho, pero resulta raro si se piensa un poco.

En primer lugar, porque las sociedades no son un conjunto de individuos, cada uno de los cuales elabora su proyecto de vida en el vientre materno y lo realiza con esfuerzo y sacrificio mientras respira. Por el contrario, cada individuo es hecho socialmente. Si no, entonces no se entendería que los que nacen en el siglo XXI se emborrachen so pretexto de un 18 de septiembre de comienzos del siglo XIX o

que otros se pongan pedigüños cuando vean la figura de una mujer, de yeso o de otro material más noble, vestida de celeste y blanco, que con una criatura en los brazos mira para arriba. De manera que eso del cambio en las generaciones se da o no se da, pero no es obligatorio. Para los que le gustan las cosas más gráficas, piensen que en el mismo entierro un nieto escupe al ataúd del que considera responsable de la muerte de su abuelo, mientras otro nieto reivindica el golpe militar del respectivo abuelo. Yo pensaría que un nieto y un abuelo son generaciones distintas.

Pero, si bien es innegable que hay diferentes perspectivas, diferentes ideologías y diferentes definiciones de lo que significó el golpe militar de 1973, eso no es lo más importante. En el reciente entierro se repitió hasta el cansancio, en todos los medios de comunicación, que había distintos juicios respecto a aquel hecho. Incluso aquellos que pretendían dar una imagen de objetividad informativa dividían la pantalla del paciente televisor para mostrar en un lado los adherentes y en el otro lado los opositores al régimen militar. Más aún, muchos, queriendo demostrar su ecuanimidad respecto a la evaluación de aquel período, señalaban que había que esperar el juicio de la historia. Naturalmente no se trata de profundos conocedores del pensamiento de Hegel, sino de oportunistas que esquivan el bulto y se hacen los lesos respecto a que los historiadores pueden mentir sobre el pasado con el mismo descaro que los periodistas pueden mentir sobre el presente; por ignorancia o por maldad, poco importa. Y si alguien dice la verdad al respecto, tampoco puede saberse.

En todo caso no es bueno seguir enredándose con el asunto, porque la única salida es quedarse callado. Lo que sí parece más interesante es que repetir incansablemente que se trata de un asunto de opiniones o de ideologías, tiende a olvidar el hecho de que la división no es solamente ideológica, sino social. Si no se entiende esto, a la comprensión de la política en el Chile de hoy se le enredan las patas.

Por cierto, pido disculpas. Me declaro una vez más definitivamente obsoleto, pero no puedo dejar de mencionarlo: la división que marca el golpe militar de 1973, más que ideológica, es social. El proceso que culmina con el gobierno de la Unidad Popular es un proceso que da cuenta de una división de la sociedad chilena polarizada entre sectores populares (con toda la ambigüedad que esto implica) y sectores que detentan el poder económico y social (con sus respectivas ambigüedades). El golpe militar del 11 de septiembre significó el triunfo de estos últimos y la recomposición del orden.

Tirarlo así, en un solo párrafo, tiene la brutalidad de un bando militar y necesitaría más explicaciones que una virgen embarazada, pero este no es el lugar ni el autor para desarrollar un análisis en varios tomos que pueda aclarar todas las objeciones que se puedan hacer al respecto. Simplemente tómelo usted a modo de hipótesis, que sirva para entender ciertos hechos bien conocidos que usted podrá recordar aunque sea con la memoria de terceros. Sólo a modo de ejemplo señalo: el golpe

militar desató toda su fuerza represiva contra los sectores populares y sus organizaciones sociales y políticas, en cambio los gremios patronales gozaron de todas las ventajas; las protestas contra el gobierno de Pinochet en los años 80 se desarrollaron en las poblaciones populares, mientras en el barrio alto se tomaba el té con toda normalidad; y ahora, en tiempos de elecciones, la Concertación y la izquierda extraparlamentaria obtienen su mejor votación en los sectores populares, mientras que los partidos de derecha arrasan en el barrio alto.

La tendencia es clara en términos generales, y no me venga usted con que el tío suyo o la señora Juanita. Ni se haga el listo señalando que si así fuera no se entendería que la UDI lograra votos populares o que Lavín hubiera llegado casi-casi. Aunque tengo mis dudas, lo considero suficientemente inteligente e informado como para entender por qué pasa eso desde el tiempo de los troglodos. El hecho que interesa que entienda es que, después de diecisiete años de terminado el régimen militar, y sin que haya ideologías, doctrinas ni programas políticos, los sectores populares siguen mayoritariamente rechazando a los partidos de derecha, mientras que la llamada clase alta muestra una adhesión casi unánime a ellos. Todo indica que estas afinidades tienden a debilitarse, pero todavía son residuos que permanecen con fuerza.

Si ahora volvemos al asunto del difunto, podemos comprobar que, en el momento de los símbolos, los gestos y las demostraciones, vuelve a expresarse esa división social. No sólo muchos políticos de derecha corrieron a reconocer filas al lado de su general, también hay un componente de clase alta que es demasiado visible como para ser escondido por los medios de comunicación: señoras muy decentes, caballeros de tomo y lomo, jóvenes curtidos por el velerismo. También hay clase medieros y algún torreja dándole el toque folclórico, pero el tono está dado por el buen tono.

Pero no sólo se trata del juego, tan fácil en Chile, de andar reconociendo la clase por la facha. El empresariado tuvo un comportamiento ejemplar, en que no sólo reconoció públicamente los méritos del difunto, sino que apresuró la elección de sus máximos dirigentes en la Confederación de la Producción y el Comercio, para que, encabezados por su nuevo presidente, pudieran concurrir al funeral del occiso a dar gracias por los deseos concedidos cuando tuvieron susto. No se sabe que haya ocurrido algo similar entre lo que queda de organización sindical u otras organizaciones populares. No se sabe que haya habido romerías ni velatones en las poblaciones pobres.

Por el contrario, los que espontáneamente salieron el día del muerto a la Plaza Italia y la Alameda a improvisar un carnaval (con ese espíritu festivo del chileno, heredado del kultrún y la trutruca, que hace palidecer de envidia a los tristes brasileños) tenían claramente o, mejor dicho, obscuramente, otro pelaje. Mucha sudadera, mucha cerveza en lata, mucho tatuaje, mucha pachanga, mucho estribillo cochino, mucha guata. También clase medieros (que de eso hay en todas partes), algún artista, y algún intelectual... como siempre despistado.

Es cierto que con la muerte de Pinochet no pasa nada nuevo, pero sirve de excelente lente de aumento para ver las diferencias sociales tan nítidamente como se vieron al momento del golpe de 1973. Más diluidas, es cierto, pues ya no tienen organizaciones ni ideologías que les den consistencia, pero suficientemente claras como para responder a la señorita entrevistadora, que insiste en preguntar si con la muerte de Pinochet se van a terminar las divisiones entre los chilenos, con esa otra pregunta: ¿De qué divisiones estamos hablando?

Más allá de la división social hay también otras expresiones que son importantes. Las fuerzas armadas y, con mayor dificultad, el ejército, recuperan fuerza institucional haciendo delicadas distinciones respecto de lo bueno y lo malo y cortando toda expresión que limite la recuperación de su carácter nacional. La iglesia lo manda bien recomendado por si le toca juicio allá arriba, aunque, con poquita fe, prefiere dejar el asunto en manos de la historia. Ambas instituciones tratan de recobrar su carácter nacional, por encima de cualquier división antigua o nueva. El Gobierno se las arregla mejor mientras más callado se queda. Los medios de comunicación son una vergüenza de desinformación y mañosa manipulación, pero nadie se entera.

Complicado esto de los medios de comunicación, cuyas mañas también se hicieron presente con fuerza gracias al muerto. No es tan raro, pues es sabido que en Chile existe prácticamente un monopolio en la propiedad y orientación de los medios de comunicación. Hay dos cadenas que controlan toda la prensa y que incluso se han ido aceleradamente apoderando de lo que quedaba de prensa regional, con dos estrategias: La Tercera, mejorando su distribución a fin de llegar a todas partes temprano y desplazar a los diarios locales; El Mercurio, comprando los diarios regionales, entre ellos recientemente El Sur de Concepción. En la televisión abierta, todas las estaciones tienen identificaciones de derecha, que van desde el paroxismo pinochetista de Mega hasta la ponderación del canal de la Universidad Católica. Solo TVN trata de mantener una cierta ecuanimidad a través del expediente de no informar prácticamente nada.

Resultaba hasta divertido, para los privilegiados que podían ver los titulares de prensa extranjera e informativos de canales internacionales, ver como en otras partes se hablaba directamente de la muerte del “dictador” o “tirano” (término más apropiado para los que saben algo de teoría política), mientras aquí en Chile se hablaba de “general”, “ex gobernante”, “ex mandatario”, etc. Pero donde ya no resulta tan divertido es cuando se puede constatar como abiertamente distorsionan los hechos. Eso se puede saber sólo si uno puede ver lo que ocurre y luego ver cómo se informa de ello. Por eso es que puedo informarle al inocente lector que fui a esa concentración espontánea que hicieron opositores al muerto y a la cual ya me referí recientemente. En ella vi decenas de miles de personas que llenaron la Alameda entre Plaza Italia y la Moneda. Era una manifestación totalmente tranquila que fue sorpresivamente atacada por Guanacos y Zorrillos, lo que provocó un muy peligroso

caos y desató después la airada reacción de los más audaces, derivando hacia enfrentamientos, barricadas, y los consabidos etcéteras de los que están siempre listos para el baile. Los medios de comunicación, salvo alguna radio, informaron exactamente lo contrario y callaron la gran manifestación de repudio al muerto, reduciéndola a manifestaciones violentas de encapuchados. Después de verlo repetido tantas veces en la prensa y en los diarios, estoy empezando a dudar de mi capacidad de ver con estos ojos que venían con la cara.

Si esto hubiera ocurrido sólo una vez sería anecdótico. El problema es que esto es lo normal y es un factor político serio. Los medios de comunicación social han adquirido un poder extraordinario y son de una homogeneidad aplastante, imponiendo una sola versión de los hechos y una sola interpretación. Además, no hay prácticamente ningún espacio para que puedan surgir otros, ya que, al depender de la venta de publicidad de las empresas, estas condicionan su presencia a la línea editorial que les parece correcta. Doble control, por la propiedad de los medios y por dar o negar avisos. De manera que me apresuro a asegurarles a los medios que esta publicación no la lee nadie, no vaya a ser cosa que se molesten. Y hablemos de otra cosa.

NO POR MUCHO COMITEAR AMANECE MÁS GOBIERNO

Quizás la cultura Quom nunca se hubiera desarrollado tan espléndidamente si no fuera porque descubrieron muy pronto que el uso de las palabras siempre se termina transformando en abuso, razón por la cual decidieron dedicar la boca a otros menesteres de mayor placer y menor enredo, entre los cuales estaba el sonreír cuando nadie está mirando. Pero aquí, por una maldición que debe venir desde muy antiguo, no sólo inventamos palabras a cada rato, sino que hacemos combinaciones que no entiende ni Cristo con toda su bondad.

Son los misterios del “Gobierno Ciudadano”, como se auto bautizó el que se encarnó en la robusta dama. Es bien difícil saber lo que esto significa, aunque pululen los dispuestos a cantinflear por horas sobre el asunto, y el malabarismo de las palabras, si no da para todo, al menos da para entretenerse. Pero como aquí no se trata de pelearse con nadie, admitiremos que en este comienzo presidencial hay algunas sutiles diferencias con los que le precedieron. Si eso da para tener nombre propio se lo dejamos al juicio de la historia.

Ya en la campaña presidencial de ella se advirtió un ligero toque “ciudadano”, aunque éste no fuera sino una exageración de una tendencia que venía desde antes. Hasta la primera vuelta electoral, la candidata se presentó muy distanciada de su base partidaria de apoyo y hasta despegada de Ricardo El Grande. Mal le fue con esa estrategia y, por primera vez en la historia, un candidato presidencial de la

Concertación recibió mucho menos votación que la que recibieron los candidatos a diputados de su coalición. En la segunda vuelta tuvo que recular (cejar, retroceder, según el diccionario de la R.A.E.) y subirse al carro de Ricardo y de los partidos políticos de la Concertación; ganó fácil. Sin embargo, una vez sentada en el sillón vuelve a esto de lo “ciudadano”.

El misterio de lo “ciudadano” seguirá siendo insondable, pero uno le puede achacar un distanciamiento de los partidos sin que esté muy claro con qué se le reemplaza. Salvo, por cierto, que quién hace las veces de Presidente pareciera cada vez más ejerciendo una monarquía. Esto se aprecia claramente en el primer acto que realiza todo recién llegado, esto es, nombrar su ministerio. Ese es un acto privativo de Su Majestad, que desde la soledad de las alturas despliega su dedo para indicar a la (el) persona(o) señalada(o). Quien es designada(o) se declara sorprendido(a) y agradece con lágrimas(os) en los(as) ojos(as).

Pero la divina providencia se encarga de hacer calzar las cosas. Así es como la conformación del ministerio resulta exactamente adecuada al “cuoteo” correspondiente a la fuerza electoral de cada partido. A ello se suma ahora el principio de paridad hombre mujeres y un cierto equilibrio etario. Algo similar ocurre en la designación de subsecretarios e intendentes. Es que sigue habiendo partidos a pesar de los pesares.

En esto los partidos no se pueden soslayar, porque se enojan si no tienen cargos o puestos de poder. Sin embargo, está cada vez más claro que los ministros son de Su Majestad y no de su respectivo partido. Esto se ve muy facilitado por el hecho de que los partidos no tienen ideas, ni doctrinas, ni programas, de manera que difícilmente un ministro, en un ataque de locura, podría tener la intención de considerar la línea de su partido en el desempeño de su tarea. Lo mismo ocurre en la repartición de todos los cargos que se pueden repartir.

El carácter monárquico del Ejecutivo se aprecia con mayor claridad en la definición de la Corte correspondiente. Esta Corte es estrictamente personal y lleva actualmente la denominación de “El Entorno” o “El Segundo Piso” y suele tener bastante más importancia que el mismo ministerio en la toma de decisiones y, naturalmente, no tiene nada que ver con los partidos.

Ahora bien, estas tendencias son ya de larga lata y difícilmente se podrían atribuir al carácter “ciudadano” que pretende la actual Presidencia. Se acentúan más al iniciarse este período, pero dentro de lo mismo. En cambio, en lo que sí se podría encontrar una característica más marcada es en el aumento del comisionismo como forma de implementar políticas o enfrentar problemas.

Aunque esa cosa de las ideas y los programas son ridiculeces de los abuelos, los gobiernos al iniciar su período tienen que hacerse cargo de los ofertones electorales en que se apoyaron para conseguir los votos que le permitieron llegar a la máxima expresión del servicio público. Al menos para que la oposición no les ande pasando

la cuenta a cada rato para mejorar su posición en la próxima carrera. De manera que la rozagante mandataria se tuvo que lanzar con las primeras medidas y los proyectos.

En esto de responder a los ofertones se hace lo que se puede, especialmente cuando estamos de suerte y tenemos plata. Pero cambios de mayor envergadura requieren otra estrategia... y aquí nos encontramos con las comisiones. Tal vez el símbolo del Gobierno Ciudadano.

Para la taquillera Reforma Previsional se creó rápidamente un Consejo Asesor, presidido por el ex director de presupuestos. Este comité tendrá la paciencia de escuchar a los interesados y elaborará el correspondiente informe. Para la reforma al sistema electoral se creó también la correspondiente comisión, para que analice técnicamente el asunto. Cuando a alguien se le ocurrió que podría crearse un Ministerio de Seguridad Pública, a otro alguien se le ocurrió crear rápidamente la respectiva comisión. Y cuando los pingüinos armaron la gran protesta se creó, como corresponde, la gran comisión.

En cada caso se trata de lograr soluciones a través de la sabiduría de los técnicos, vengan de donde vengan, y la negociación de intereses de los involucrados, de manera que la política sale sobrando, a pesar de que se trata de proyectos que necesariamente tendrá que discutir y aprobar el Congreso. Cuando se trata de problemas nacionales, como es el caso de la educación, se hace sitio para el pluralismo, con lo cual las propuestas son del tipo ni chicha ni limoná, lo que evita la fea decisión política. Todo muy bien: ¿a quién le importa la coherencia de los proyectos, o la orientación que ellos tienen, o su justificación en términos de visiones de mundo o su adecuación a alguna idea de futuro? Conversando se entiende la gente, decía el Habermas, que eso de las decisiones son cuentos del Schmitt.

Pero no hay para qué preocuparse, porque las comisiones tampoco funcionan muy bien: La reforma previsional está en veremos, pues, aunque tanto los buenos como los malos están de acuerdo en aumentar las pensiones y darle jubilación hasta el gato (para no perder los votos del gato), el tema del Estado y de las AFP se seguirá conversando mañana. Las propuestas de la Comisión Boeninger sobre reforma electoral no le gustaron ni a la señora Juanita. El Consejo Asesor de Educación cojea por la pata estudiantil y entre la libertad de educación y el Estado subsidiario, la educación pública quedará para pasado mañana, si es que hay tiempo. De modo que esta comisión parece más condenada a la lírica que a la solucionática, aunque ya salió el anhelado informe y mientras haya plata algo se podrá hacer.

En suma, que el Gobierno Ciudadano funciona bastante poco si de comisiones se trata. Y si no se trata de comisiones, sino de estar abierto a la ciudadanía para recibir sus demandas, las cosas se complican más. Es cierto, hay plata. Pero al gobierno le sucede lo que le ocurre al que gana el Loto, que todos se acercan salivando para participar en el banquete. Y como no alcanza para tantos, la sonriente va endureciendo el gesto y termina por retar a los pedigüños.

Difícil esto del Gobierno Ciudadano: el creativo que lo inventó todavía debe estar desternillándose de la risa (nótese la delicadeza del lenguaje). Pero el problema más serio no es que exista o no exista Gobierno Ciudadano, el problema es que exista Gobierno. Hay dudas, pero prefiero callar y esperar el juicio de la historia.

Bachelet ha tenido sus problemas para acomodarse en el sillón y lo pasa mucho mejor viajando. Mientras, aquí tuvo una dura prueba de fuerza con los niños y perdió lastimosamente. Tanto, que tuvo que desquitarse con su Gabinete, sacando a Zilic del Ministerio de Educación, a Zaldívar de Interior y a Antonijevic de Economía, reemplazándolos por Belisario Velasco, Yasna Provoste y Alejandro Ferreiro, respectivamente

No sólo fue el extenso, y para muchos sorprendente, movimiento de estudiantes secundarios lo que forzó este cambio a cuatro meses de asumir, sino que ya estaba claro que las cosas no estaban funcionando bien en el Gobierno y que, en la medida que aparecía un conflicto de verdad, se volvía al más tradicional de los métodos para enfrentarlo, combinando capacidad represiva, tácticas divisorias, ofertas para la cosa chica y escabullir el bulto con comisiones ecuménicas que no pueden llegar a nada, pero que sirven para hacer tiempo, porque, al fin y al cabo, estos pingüinos sólo están de paso.

El problema de la revolución de los pingüinos volvió a recordar esas expresiones de violencia psicológica del machismo que hablaban de “falta de ancho” en la que llegó a la Presidencia. Aunque, en realidad, algunos dicen que al Gobierno no sólo le faltó el ancho, sino que también el largo y, sobretodo, la profundidad. El manejo de la crisis desatada por los niños se podría considerar excelente... si se tratara de aquellas antiguas películas de los tres chiflados. Pero sobre esto seguiremos más adelante y a los interesados se les ruega también remitirse al análisis que se hace en el apartado Sociedad de este mismo texto.

Las relaciones con los partidos tampoco resultan fáciles para el Gobierno Ciudadano. Con la Democracia Cristiana ha tenido bastantes problemas, tanto porque algunos de sus parlamentarios suelen tener movimientos quebrados hacia la derecha que le restan a la Concertación las mayorías que teóricamente tiene, como porque la directiva de ese partido, encabezado por la despechada Alvear, no vacila en criticar tupido y parejo al Gobierno, especialmente en lo que llaman temas valóricos. De nada ha servido la generosidad en la repartición de cargos a la D.C., ni el escrupuloso cuidado que ha tenido Bachelet de evitar pisar donde haya callos cristianos.

Con el PPD tampoco ha andado muy bien la Presidente. Y esto no sólo porque este partido se haya transformado en algo muy parecido a una bolsa de gatos (dicho con todo respeto por los gatos), sino porque tuvo la mala ocurrencia de meterse dentro de la bolsa. Es comprensible que entre gente robusta se entiendan, pero resultó un poquito raro que el Gurú de la intelectualidad de los ochenta la llamara a su casa para explicarle lo que debía hacer con esto de la probidad.

Tampoco le ha ido bien al Gobierno con sus propuestas de nombramientos que ha enviado al Senado, pues ahí ya le rechazaron una propuesta a Ministro de la Corte Suprema y también el nombre que propuso para Contralor. Sin que esto le haya servido para otra cosa que para recular.

En lo internacional le ha ido muy bien en los viajes. En todas partes la reciben bien, y con sonrisa y seriedad deja bien puesto el nombre Chile. Pero con las relaciones internacionales los resultados son más variables.

Las cosas se han ido complicando en el mapa político latinoamericano y esto deja a Chile ante un panorama que puede resultar difícil de manejar sin mayores definiciones. El “eje del mal” ha venido engordando: Chávez obtiene un rotundo respaldo para continuar cantando, 63 %; Rafael Correa en Ecuador se apunta con un 56%; Daniel Ortega con su 40% también llega a Presidente; Evo Morales ya se había matriculado con su 54% antes. Cerca, pero no revuelto, Lula es reelegido con el 61% y Kirchner se prepara para obtener lo suyo. En otra está México lindo y dividido, Colombia en lo suyo y Perú con la vuelta de un APRA que viene de vuelta pero nadie sabe desde dónde. Naturalmente aquí sólo queda esperar el juicio de la historia

Con los vecinos hay buenas vibras. Pasado el fantasma de Humala, se tuvo un respiro por el norte y eso alivió bastante las tensiones. Con Bolivia y su Evo también las cosas se han tranquilizado y las buenas intenciones llueven como en el sur, pero otra cosa es con charango. Es decir, que a pesar de lo bien que parece todo, está claro que cuando se llegue a la hora de definir posibles soluciones para que Chávez se pueda bañar en playas bolivianas la cosa no será fácil. Con Argentina las relaciones están cada vez más claras: ellos pisan la manguera del gas cuando les parece y nosotros protestamos atentamente.

Donde sí se hizo el ridículo fue con la decisión respecto del voto chileno para el miembro latinoamericano no permanente del Consejo de Seguridad. Durante mucho tiempo se mantuvo el suspenso respecto del desenlace de la teleserie, lo que hizo las delicias de los opinólogos profesionales y aficionados. Sin que nadie pueda imaginar por qué, la Dama mantuvo riguroso secreto respecto de los pretendientes Venezuela y Guatemala y sólo en el último minuto dijo: ninguno de los dos. Después se empezó a tratar de arreglar el entuerto y vino muy bien eso de que era una política de Estado evitar las divisiones regionales y buscar los consensos, pero si así era no se entiende la gran pelea que se dio para poner al de la obstrucción nasal como mandamás de la OEA. Ni se entiende tanta demora en decidir la indecisión, pues una política de Estado se justifica y prepara con tiempo. En fin, que no salió mal a pesar de los errores.

Pero es un Gobierno que está empezando y que tiene que recibir toda la agresión del machismo leninismo, empeñado en medirle el ancho a cada paso marcial que da hacia su respectiva estatua. Porque, a pesar de tanta crítica, Bachelet sigue contando

con las simpatías de la teleaudiencia. Aunque su popularidad tuvo un pequeño bajón cuando los niños salieron a la calle a sacarle la lengua, pronto se recuperó y se apresta a empezar su segundo año con el mismo entusiasmo y zapatos de taco medio.

POBRE PERO HONRADO, ES DECIR, SIN VOCACIÓN POLÍTICA.

La ética suele plantear exigencias muy difíciles, como eso de ser pobre pero honrado, en circunstancias que sería mucho más fácil pedir al rico que sea honrado, aunque fuera de vez en cuando. Lo mismo ocurre en la política, donde se pide dedicarse al servicio público sin ser-vicio público y se espera que se ayude a los negocios sin hacer negocio. Exigencias difíciles, como las que le plantearon a Adán, poniéndole a una mujer en pelotas y esperando que no se comiera la manzana.

Respecto a las relaciones entre ética y política, se podría decir que no han cambiado mucho las cosas, pero han cambiado un poquito y con eso basta. Porque siempre ha habido cierta relación entre el dinero y la política (se recomienda leer “Los negocios del señor Julio César” y la Vida Social de El Mercurio). Pero ahora, para no cansar al lector, reducimos a dos los cambios: la política carece de orientación utópica y el dinero es la medida de todas las cosas. En tales condiciones es natural que los cargos políticos se utilicen como vehículos en la difícil movilidad social ascendente. A la vez, también es natural que la lucha política no se desarrolle sobre la base de planteamientos ideológicos o programáticos, sino en cuanto descubrir vicios del adversario. Una combinación perfecta tanto para los buenos negocios como para los escándalos.

Obviamente, no se trata de justificar a nadie... mientras no me paguen. Pero el caso es que suscita mucho menor preocupación el uso de la política para entrar en la buena clase que el meter las manos en la caja chica. En efecto, es bastante conocido el hecho de que varios personajes que se han dedicado a la política han desarrollado desde ésta las vinculaciones que los han transformado en exitosos ejecutivos y empresarios en el sector privado. No voy a dar nombres, porque uno nunca sabe cuando va a tener que pedir favores a un amigo, pero que les ha ido bien, les ha ido bien.

Esto tampoco es novedoso. Históricamente la aristocracia y la burguesía han recibido la fresca sangre de políticos, civiles o militares, de éxito. El problema es cuando la política no tiene otro objetivo que éste, porque ahí empieza la sospecha de que eso de los intereses generales y el bien común son puro cuento. Puede que todavía no sea para tanto, pero tampoco se le da mucha publicidad al asunto.

El otro tema es el de meter las manos en la caja chica. Esto sí que se presta para el escándalo, no porque la conciencia de los periodistas (si es que existe algo como eso) no pueda soportar tales actos, sino porque tales denuncias pueden rendir buenos dividendos políticos. Es normal: si una organización política no tiene ideas, proyectos o programas que proponer para convencer y obtener apoyo de los televidentes, es

necesario destruir al competidor en la carrera. Dicho más simplemente: si no se tienen cualidades, basta con denunciar los vicios del oponente.

En esto no tenemos ninguna originalidad, en todas partes del mundo se practica; es el espíritu de la época. Los televidentes ya no votan para que alguien sea elegido, sino que votan para que alguien no sea elegido. Obviamente, con esto sale elegido el menos malo. Es una extensión del “voto castigo”. Por tanto, la lucha entre los políticos profesionales se transforma en una constante búsqueda de los vicios del adversario: que si es borracho o drogadicto, que si ama excesivamente a los niños, que si metió las manos en la entepierna o en los bolsillos, que si tuvo malas juntas, que si le pegó al marido, que si miró feo a un miembro de los pueblos originarios, que si dijo cosas como las que yo digo. Por tanto, el espionaje es el copiloto del político y todos los soplos son bienvenidos.

Naturalmente que con tanto acusete, grabaciones y filmaciones ocultas, todos se ven obligados a ser hipócritas hasta en el retrete, pero ese no es el principal problema. El principal problema es que los televidentes terminan por no distinguir acusetes de acusados y todos los políticos pasan a ser considerados una manga de... Esto puede llegar a traer problemas a las buenas costumbre y al orden público.

Lo que ocurre en el presente año respecto a este tema no es muy distinto a lo que venía ocurriendo en el Gobierno anterior. No es necesario tener buena memoria para recordar el caso MOP-Gate y otros referente a sobresueldos, puesto que a cada rato vuelven a aparecer en el primer plano. Ahora lo que más resalta son los problemas de “pagos brujos”, que darían cuenta del uso de dineros para empleos de emergencia en gastos electorales. Aparte, pero relacionado, está el sabroso caso “Chile Repartes”. Aquí la cosa se complica con facturas falsas y otras delicadezas que estarían justificando mañosamente gastos en las campañas electorales de algunos honorables... poco. Esto permitiría cobrar al Fisco según la ley de financiamiento de campañas. Las cosas se complican más aún y cada vez salen más detalles, se refuta, aumentan las acusaciones, hay descargos, se retrueca. Al cierre de la edición aparecen las denuncias sobre uso del ítem “gastos reservados” para financiar actividades políticas de la Concertación, aunque aquí los delatores vienen desde adentro, vaya usted a saber con qué aviesas intenciones. Como un adelanto, le puedo decir que los líos en el PPD son planteados por un dúo dinámico que parece bastante interesado en cortar el queque de otra manera y ser cabeza de un nuevo referente político. Naturalmente los que están en la directiva están en otra. Pero todo esto usted lo puede averiguar por su cuenta y también confundirse por su cuenta y, obviamente, sacar las conclusiones que se le antojen según su particular corazoncito político

Como éste es un análisis político y no una prédica sobre el bien y el mal, no espere usted que nos metamos aquí a pontificar sobre libertad de expresión o injurias a la dignidad, expulsadores y expulsados, quiénes son los buenos y quiénes los malos,

si esto se justifica o es una barbaridad, quiénes mienten y quienes dicen verdad, cómo andamos por casa, cuántos pares son tres moscas y el test de la blancura.

Tampoco es este el lugar para exponer las complejidades del uso de recursos públicos con fines políticos o de aprovechamiento personal, sólo corresponde hacer consideraciones genéricas como las que se han hecho respecto a movilidad social y al puruñazo en la caja chica. Esto es, que parte de la llamada actividad política se constituye en una forma para ascender socialmente y pasar a formar parte de la mejor clase, juntando plata y cargos en la empresa privada y siendo admitido en los círculos del poder y el prestigio. Mientras que el puruñazo a la caja chica es el manotazo desesperado que se da para obtener recursos en la dura competencia entre políticos. Sobre esto último es digno de mención el hecho de que se trata de poca plata, lo cual no le quita peso a las denuncias de faltas a la ética o comisión de delitos, pero sí importancia real desde el punto de vista de la gestión del Estado. Los comentarios que se escuchan en algunos medios de comunicación, acerca de que los deportistas se han quedado sin recursos porque se repartieron la plata algunos políticos, carece de toda base. Para que se tenga una idea, se calcula que el fraude podría llegar a una suma que puede ser mucho en términos de cervezas, pero que no alcanza ni para pintar el estadio nacional. Lo mismo podría decirse en cuanto facturas falsas, empleos brujos o plata de fondos reservados. De manera que no debería ser afectado el orgullo nacional de tener excelente reconocimiento internacional en términos de transparencia y poca corrupción.

Naturalmente que el tema de la confusión entre lo público y lo privado, en cuanto a deslizarse de un terreno a otro para ascender socialmente, no constituye ningún tema digno de escándalo y sólo los muy copuchentos y resentidos se enteran de esto. En cambio, el puruñazo, aunque se trata de plata poca, se enlaza con la gran cobertura mediática que se ha dado a estas “irregularidades”, al punto que se ha transformado a fines de año en el principal hecho político, y que se considera que compromete seriamente las posibilidades de que la Concertación pueda seguir amenazando con la eternidad en el poder. Por cierto que este tipo de denuncias tienen también gran acogida en el televidente común, que encuentra un nuevo elemento para renovar su profunda aversión a los políticos. Pero es muy probable que este rechazo a los políticos se extienda no sólo a los acusados sino que a todos ellos, aumentando el apoliticismo y el rechazo a la política que es una característica de esta Segunda República.

A partir de aquí se ha ido desarrollando otro drama, que se corresponde con el manejo que se pueda hacer del tema en términos de alineamientos políticos y sus posibles consecuencias a mediano plazo. Pero esto ha tomado otro giro, el giro de los acomodados, que ya desarrollaremos más adelante y que tiene que ver con las declaraciones que salen desde algunos personajes que forman parte de la Concertación

en cuanto a utilización de fondos públicos para favorecer políticamente a este mismo conglomerado. Denuncias raras éstas a las que ya hemos hecho referencia.

Finalmente, habría que señalar que las denuncias sobre aprovechamiento político de fondos públicos han dado lugar a una nueva embestida en términos de burocratización de la política. Es decir, en la medida que se denuncia que hay “operadores políticos” en la administración del Estado, resurgen las tentativas de reducir los funcionarios de confianza del Gobierno y reemplazarlos por funcionarios administrativos seleccionados por competencias técnicas. Ya sobre esto se ha trabajado bastante, lo cual no es raro en el despolitizado mundo actual.

La existencia de funcionarios que son de la exclusiva confianza del Gobierno, se justifica en cuanto se supone que quién está al mando de la Nación es alguien que ha sido elegido de acuerdo a una determinada ideología o programa correspondiente a las orientaciones políticas que lo apoyan. En consecuencia, se trata de tener en los altos cargos de la administración pública, empezando por los Ministros, personas que compartan esa línea política y que, por tanto, puedan orientar a la administración pública en ese sentido. La tecnificación de esos cargos está dando cuenta de que ya no hay orientaciones políticas disímiles, sino que se acepta que los objetivos están dados y sólo se requiere implementar los medios para alcanzarlos. En consecuencia, ya hasta se podría proponer que los ministros sean seleccionados por concurso de antecedentes, pues da lo mismo su orientación política. De manera que si usted, como tantos millones de chilenos, aspira a llegar a la Presidencia de la República es aconsejable que vaya preparando su currículum con doctorado en Presidencia, mención República, de la acreditada Universidad de Píoñesná.

HAY QUE RESPETAR LA VOLUNTAD DEL SEÑOR (EMPRESARIO)

Cuando llegó este siglo XXI no faltó el que se emborrachó feliz de que finalmente no se iba a cantar más “siglo veinte cambalache”, con eso de “todo es igual, nada es mejor”, y el “hoy resulta que es lo mismo” o “igual que en la vidriera de los cambalaches se ha mezclado la vida”, y otras tangueras alusiones a que Bourdieu estaba equivocado con ese asunto de las distinciones. Y tenía razón, las cosas se hicieron más claras y nítidas, se produjo la explosión de las diversidades, se distingue ganadores y perdedores, se aborrece del empate hasta en el fútbol, se está en la sociedad o en la política, se es empresario o... no somos nada, negro, no somos nada.

No es fácil ser empresario. Usted puede tener espíritu emprendedor, desarrollar su proactividad al máximo, obtener las acreditaciones y certificaciones del caso, y aprovechar la sinergia para empoderarse hasta de su abuela y ni siquiera con eso le alcanza. Se necesita estar en gracia de dios, que es el que sabe en este asunto de multiplicar los panes o la plata más que el mismísimo Karlitos.

Hay que dar gracias a dios que haya empresarios, porque si no uno pensaría que los políticos viven en un mundo raro, sólo para ellos. Nada de eso, es de rutina que todo candidato a la Presidencia de la República o de la Reprivada acuda a dar examen ante los empresarios sobre sus planes o ideas, en el caso que las tenga, naturalmente. Antes se hacen ciertos sondeos para saber qué es lo que sería de su agrado y qué les huele a estatismo, socialismo, populismo o simplemente estúpido. Se espera después nerviosamente los comentarios que los señores empresarios consideren del caso emitir.

Pero no sólo es un ritual de las candidaturas, también hay constantes reuniones de las autoridades con los empresarios (entiéndase por empresarios a los grandes y no a los emprendedores que hacen sopaipillas o trabajan de dele-dele estacionando autos). Una de las más solemnes es la reunión de ENADE, donde acude Presidente de la República y Ministros a dar cuenta de lo bien que lo están haciendo. En la que se hizo este año el Ministro de Hacienda llegó con el regalito de que estaba estudiando formas de flexibilización laboral, lo cual arrancó entusiastas aplausos del respetable.

No hay duda de que en esta Segunda República los empresarios son un sector que pesa bastante en las decisiones políticas, mientras que el resto de los sectores sociales no pareciera tener mayor incidencia en el autonomizado mundo político. Tal vez por eso tuvo tanto impacto la movilización estudiantil desatada a mediados de año; porque obligó al mundo político a dar vuelta la cabeza y mirar lo que estaba pasando.

En efecto, como se ha venido repitiendo en estos análisis políticos desde hace años, los cambios estructurales e ideológicos han ido generando una sociedad atomizada con enorme dificultad para generalizar intereses y organizar demandas o proyectos. La política es para los políticos y cada uno se las trata de arreglar lo mejor posible para resistirlo. Se actúa sólo individualmente como hombre masa desinteresado del destino social o, cuando hay acción colectiva, se desarrollan movilizaciones de carácter corporativo para defender intereses del mismo carácter. El sentido de comunidad sólo encuentra salida en el variado mundo tribal en que algunos encuentran cierto sentido de pertenencia deportiva, religiosa, barrial, musical o de otra índole.

Respecto demandas corporativas, éstas siguen salpicando el medio ambiente de manera rutinaria y seguramente en el apartado social de este Análisis del Año se hará referencia a ello. En general estas demandas corporativas (de gremios de la salud, profesores, empleados públicos, deudores habitacionales, mapuches, pescadores artesanales y etcéteras igualmente respetables), logran una cierta presencia precisamente en la medida que la sociedad aparece bastante desarticulada y los políticos no salen de su círculo. En algunos casos incluso movilizaciones modestas logran ciertos resultados gracias a esta presencia y a que la pedida no es muy cara, sin embargo es notorio que no suelen significar impactos políticos de importancia, puesto que esto

sólo es privilegio de otros actores, como es el caso de los empresarios, recientemente señalado, o de la siempre Santa Madre del Santo Padre.

El peso de la iglesia sigue siendo muy importante, especialmente en los llamados temas valóricos, incluido el condón, que parece que hace mucho daño a la sensibilidad (espiritual, se entiende). Obviamente las provocaciones, hechas por algún socialista despistado, respecto aborto terapéutico o eutanasia volvieron a levantar el escándalo en la voz de los representantes en la tierra de dios todopoderoso. Esos mismos representantes se pusieron muy nerviosos con las posibilidades de que se modificara uno de los terrenos más delicados para la iglesia, como es el caso de la educación. Como se sabe, en este terreno la iglesia no transa, pues desde los tiempos de la conquista tiene claro que si no controla la formación de las almas puede metérsele ahí la competencia y nos vamos todos al diablo. Y, como se sabe, el Estado es el mejor amigo del diablo. En consecuencia, y en nombre de la libertad de la educación, la responsabilidad de los padres, la defensa de la familia y el destino trascendental del ser humano, la educación privada es un negocio sagrado. Difícil va a ser, si a alguien se le ocurre, mejorar y dar más peso a la diabólica educación pública. Dios me libre de ello.

En tal panorama, la movilización de los estudiantes secundarios que comienza el mes de mayo resulta sorprendente. Iniciada por el rechazo que genera una torpe iniciativa de las autoridades de limitar el uso del pase escolar a un número restringido de viajes, pronto iría aumentando sus fuerzas alimentándose con los profundos problemas que afectan a la educación.

Acostumbradas las autoridades a un fácil manejo del conflicto social (salvo el que planteen los empresarios, naturalmente), la fortaleza del movimiento estudiantil va a encontrar en pelotas no sólo al Gobierno, sino que a la política en general. El movimiento crece y crece, articulando demandas bastante consistentes y que apuntan a un problema sentido nacionalmente: la pésima calidad de la educación, especialmente la educación pública.

No existe en esta movilización estudiantil una orientación de carácter político partidario, sino que ésta es reacia a inscribirse dentro de las corrientes que en ese ámbito se desarrollan, aunque no cabe duda, y no podría ser de otra manera, que los dirigentes tienen su corazoncito con formación política. Pero el carácter social y desinteresado del movimiento es uno de los factores que explican la adhesión que tiene en la generalidad de los televidentes. Además, que es visto con simpatía y recibe el indispensable respaldo de los medios de comunicación. Estos últimos, firmemente controlados por la derecha, verán en estas movilizaciones un punto de apoyo para desarrollar sus críticas a la Concertación por el mal estado de la educación. (Cuando, a fin de año, los estudiantes intenten resucitar el movimiento ante el fracaso de la comisión ecuménica, los medios de comunicación serán los primeros en enterrarlo, presentándolo desde su inicio como dividido y fracasado.)

El problema es que, en el deslavado mundo de la política, no existen tampoco ideas u orientaciones respecto de la educación, de manera que las propuestas sólo pueden tener un carácter técnico y paliativo a los problemas de la educación o una tronante denuncia de los vicios que se pueden observar al respecto. Cuando no hay ideas, difícilmente puede haber confrontación de ideas.

Cuando el Gobierno se convence que ya no resultan los consejos ni las reprimendas a los niños y que el recurso a los palos se transforma en palos de ciego, decide enfrentar el problema con discurso presidencial lleno de ofertas y con la correspondiente comisión, que se llamó Consejo Asesor para la Educación. Un comité con nada menos que setenta miembros y un carácter ecuménico que da buena cuenta de la perspectiva técnica y no política que se adopta para enfrentar el asunto.

Hay demandas concretas desde los estudiantes que pudieron ser satisfechas sin grandes problemas, como es el caso del uso de pase escolar sin restricciones o las becas de pago de la PSU, pero el problema de una gran reforma educacional planteado es muchísimo más difícil y tiene insoslayablemente que comprender una definición política. Esto por lo menos se aprecia en un aspecto muy sensible a lo poco que queda de perspectiva política, lo cual aparece en una opción central: avanzar con la privatización de la enseñanza o recuperar la importancia de la educación pública. Más allá de acuerdos puntuales, en cuanto a mecanismos técnicos de solución a algunos problemas de la educación, está claro que éste es un aspecto central que no puede eludirse y dentro del cual la definición tiene carácter político y no técnico.

Por otra parte, tampoco puede dejar de considerarse que gran parte de la fuerza que adquiere el movimiento de estudiantes secundarios y del apoyo que recibe en grandes sectores del país radica en la expectativa de que la educación cumpla con el tan ansiado fin de servir de factor clave en la movilidad social. Uno de los lugares comunes más repetidos es que la educación es el gran recurso que permite superar situaciones deterioradas.

Sin pretender echar abajo el avión del idealismo juvenil, que ha servido para tanto bonito discurso, habría que considerar también que más de alguno no está muy preocupado por el humano deseo de conocer, sino por el también humano deseo de que ese aprendizaje le garantice una buena pega.

Pero aquí es donde la verdad individual puede ser una tremenda mentira social. Porque una buena educación puede garantizar a un individuo tener una buena pega y ascender en su posición socioeconómica, pero alguien tiene que quedar abajo. Es posible que si todos tienen buena educación lleguemos a tener pobres muy bien educados, pero no vamos a terminar con las diferencias.

Lo que interesa rescatar de aquí es que políticamente el movimiento de los estudiantes tiene el sentido de una protesta frente a una sociedad profundamente desigual, con una ideología de movilidad social fundada en la educación que carece

de toda credibilidad. En tal sentido, la protesta estudiantil trasciende el ámbito de la protesta corporativa que un determinado sector plantea para obtener satisfacción a sus intereses particulares y adquiere carácter político, referido a los intereses generales de una sociedad. Esto es lo que descoloca a los actores políticos habituales de partidos y dirigentes, pues no tienen planteamientos respecto de este tipo de problemas, que son problemas nacionales.

Que la educación sea mala, pero desigualmente mala, significa que es un mecanismo que reproduce la desigualdad. La demanda corporativa del estudiante estaría dirigida a mejorar su colegio para así ganar en la competencia y poder entrar a la universidad para conseguir el título que le ayude a ganar más plata. Cuando se pide mejorar la educación en general, se está planteando un tema de justicia, aún aceptando el principio de diferenciación del liberalismo. Porque si, en el mundo de la fantasía, la educación fuera igual para todos, eso tampoco se traduciría en una igualdad social, aunque generaría interesantes problemas políticos.

PARTIDOS Y PELOTAS: FÚTBOL Y POLÍTICA COMO EMPRESA

El que esté libre de ambiciones personales, que lance la primera piedra... y una lluvia de peñascos obscureció el cielo. Porque ese es el problema de los políticos, que no sólo son ambiciosos, sino que además mienten. De manera que es mejor no andar provocándolos, que suelen tener más problemas con los amigos que con los enemigos, aunque en estos tiempos de postodo es muy difícil saber quiénes son unos y quiénes los otros. Porque depende, señor, depende.

Los que trabajan la imagen de estar siempre enterados dirán que era previsible que ocurriera lo que se denomina el Síndrome del Cortito. Esto es, que, en ese juego del acordeón que se hace con los períodos presidenciales, cuando viene el período corto se adelantan las vocaciones de servicio público y los partidos y personajes empiezan el carnaval de los acomodados para ganar la próxima carrera. Es lo que ocurrió desde muy temprano.

La verdad es que tampoco este apresuramiento es novedoso y privativo del período corto. Más bien se podría decir que es un vicio feo, pero recurrente. Recuérdese que todavía Ricardo no terminaba de acomodarse la banda presidencial debajo de la papada, cuando ya el casi-casi Lavín iniciaba su campaña para el 2005. Lo que quizás sea más original ahora es que de todas partes empiezan a brotar como callampas los candidatos y los secuaces corren a medio vestir buscando la buena sombra que proteja.

Pero en ese juego de los políticos, empieza también a vislumbrarse que puede haber cambios en los equipos y que quizás ya sea la hora de la tantas veces anunciada disolución de los vínculos matrimoniales sin esperar la fatídica sentencia del hasta

que la muerte los separe. Porque empiezan a haber demasiados conflictos internos, con mucha declaración ética y largas conversaciones: señales inequívocas de que el matrimonio está haciendo agua. Lo cual no indica que necesariamente vayan a separarse. El sabio lector debe conocer de esas parejas que llegan a odiarse tanto que no se separan nunca, porque de lejos es difícil acertar con el hachazo.

Hay problemas en las grandes coaliciones políticas. Siempre los ha habido, pero el hecho de que ahora hayan empezado tan temprano alienta las expectativas de los que siempre esperan novedades. En efecto, las crisis en la proximidad de elecciones se suelen resolver con facilidad porque no hay tiempo para cambiarse de casa. En cambio, con tiempo se puede probar sin mucho riesgo inmediato.

Los problemas de la derecha vienen desde siempre, pero los de ahora vienen de las últimas elecciones presidenciales, cuando compitieron en primera vuelta con candidato propio la UDI y RN, Lavín y Piñera, respectivamente. Esta fue una fractura delicada que no fue fácil recomponer para la segunda vuelta. Un triunfo habría ayudado mucho a la derecha a cerrar heridas y armar una sólida coalición, pero el buen dios no lo quiso y el malo volvió a ganar.

Como se ha dicho en estos análisis tantas veces, en la medida que los partidos carecen de proyectos, ideas y programas, las identidades y tendencias pasan a ser planteadas en términos de personajes. Aunque algunos partidos todavía funcionan, como sistemas de redes o como sociedades de socorros mutuos, las identidades y tendencias se dan en términos de adhesión a determinadas figuras, por lo cual no es de extrañar que la emergencia de los protocandidatos a la Presidencia vaya acompañada de posibles articulaciones de orgánicas políticas.

En el caso de la Derecha, la proclamación que hizo el casi-casi Lavín de la candidatura de Longueira fue precedida por su declaración de que se hacía necesario crear un nuevo referente político, sin que se sepa mucho qué quiere decir con eso, salvo que quiere agrandar la base de apoyo. Eso estaba planteado, así de vago, cuando surgió en la misma UDI el deseo de una mujer empeñada en que los televidentes aprendan a pronunciar su nombre: Van Rysselberghe. Ya había dos en la UDI, mientras que en Renovación Nacional, Piñera, su candidato en las últimas elecciones, mantiene una larga tradición política, que consiste en seguir corriendo después de perder para no enfriarse para la próxima carrera.

De manera que en la derecha ya tenemos tres candidatos y, naturalmente, alrededor de esos tres las respectivas tendencias. El problema es que, con distintas alternativas (candidato independiente, candidato UDI y candidato RN), la derecha ha perdido todas las elecciones presidenciales y hace ya tiempo que se piensa que con las actuales coaliciones las opciones siguen siendo muy difíciles. Es lo que muchas veces se ha dicho: hay que rebarajar el naipe de los partidos, porque en el deporte y en la política eso de que lo más importante es competir y no ganar corresponde sólo al arsenal del cinismo.

Por el momento, la UDI y RN siguen jugando a la Alianza por Chile. Incluso procedieron a renovar sus respectivas directivas sin que hubiera mucho conflicto. Por esos misterios que el cristianismo inventa, las elecciones en RN y “el estilo” UDI, dieron por resultado que los presidentes de ambos partidos fueran dos personas distintas y un solo apellido nomás: Larraín. Por ahora esto ayuda a seguir pensando en mantener la Alianza, y confiar en que las denuncias de corrupción y otros pecados tomen suficiente fuerza como para que el rechazo a la Concertación los lleve al poder. Pero los cálculos electorales se seguirán haciendo y pueden llevar a cualquier herejía.

En cuanto a la Concertación, aquí las cosas están muy revueltas y nadie hace apuestas sobre lo que puede pasar. Esto no deja de ser sorprendente para una coalición que recién comienza un nuevo período de Gobierno, pero el Síndrome del Cortito parece que aquí también tiene su lugar.

Los problemas de la Concertación vienen fundamentalmente de la Democracia Cristiana, dentro de la cual todavía se lamen las heridas de la pelea que dejó fuera a Alvear y permitió que los ateos impusieran su candidata a la Presidencia, en circunstancias que pensaban que ya habían sido muy generosos al apoyar a Lagos en la oportunidad anterior.

En cuanto pudo, Alvear montó en la yegua cólera y se lanzó a la batalla. Arrasó en la Democracia Cristiana con más del 60% de la votación, desplazando al candidato de Adolfo Zaldívar, que tan poco hizo por ayudarla en el pulseo con Bachelet. Conquistó así la dirección del partido y se alzó como la más fuerte candidata para las próximas presidenciales. No corre sola, Eduardo Frei II cree tener sangre más noble y confía en que la próstata no le jugará ahora la mala pasada que lo marginó de participar en la carrera anterior. Pero Alvear no sólo no tiene próstata, sino que tiene por el mango la sartén del partido.

Las ya antiguas reticencias que manifiestan algunos dirigentes y parlamentarios de la DC frente al Gobierno de la Concertación, no le molestan a Alvear, pues forman parte de su estrategia de diferenciación con respecto a este conglomerado. Que en el congreso algunos votos DC se junten con la Alianza por Chile ya pasa a ser rutina: recientemente así sucedió con el proyecto de Censura a Leal y volvió a ocurrir en la elección del presidente del comité que estudia los líos de Chiledeportes. Pero más allá de estos ya rutinarios descolgados, existe una clara y sistemática crítica al Gobierno o a las iniciativas de otros partidos de la Concertación. Esto es especialmente claro en los denominados temas valóricos, lo que se expresó en la fuerte crítica al proyecto de ley sobre eutanasia y al referido a aborto terapéutico. En esos casos se podría decir que la culpa no la tiene el chanco (sin pretender con esto agredir psicológicamente a los señores cerdos), pero en el caso de “la píldora del día después de haber hecho eso” ya no se podría hablar de provocaciones sino de política de Gobierno. Más complicado aún es cuando la DC no sólo trata de expresar sus

diferencias valóricas, sino que se dirige a criticar directamente al Gobierno en su desempeño. Tal fue lo que ocurrió con su rechazo a la resolución de no construir el puente para Chiloé y, más gravemente aún, cuando presionó fuertemente a la Presidente para que no diera su voto a Venezuela para el Consejo de Seguridad de la ONU. En este caso incluso se llegó a chantajear con la ruptura de la Concertación.

Lo que está claro para la DC, y explícitamente formulado, es que no aceptarán otro candidato a la Presidencia de izquierda en la Concertación. Esto pone las cosas muy difíciles, porque prácticamente descarta hasta el mecanismo de primarias para dirimir las varias ofertas que de seguro van a surgir. A la vez, las coincidencias que cada vez aumentan entre las posiciones de la DC y las de miembros de la Alianza por Chile, vuelven a traer el fantasma de la redefinición de las coaliciones.

En el Partido Socialista estas veleidades de la DC no son muy bien recibidas. Especialmente porque, para no desteñir en la carrera perpetua, los socialistas tienen dos candidatos fuertes en la pelea. Uno es Insulza, el cual ha venido a darse una vuelta por acá, y no para operarse de los cornetes de la nariz, sino para recibir entusiastas muestras de apoyo para una futura candidatura presidencial. El otro es Ricardo El Grande, que está ahí y goza de buena salud, a pesar de que la derecha trata de taparlo con barro hasta más arriba de la coronilla.

Las elecciones internas en el PS volvieron a ratificar el predominio del sector que se autodenomina Nueva Izquierda y que se arma alrededor del reelegido Camilo Escalona. Pero resulta interesante, pensando en la lógica de los reacomodos, que su opositora, Isabel Allende, haya separado aguas de la nueva mesa y haya planteado una línea más institucional. Difícil es saber lo que puede significar tal línea, pero lo que sí está claro es que se hacen agrupaciones que pueden ser muy importantes si persisten las tendencias a redefinir el mapa político partidario.

Donde quizás las cosas están más enredadas es en el PPD. Aquí, como en los otros partidos, también hubo elecciones de directiva, pero las divisiones que ahí se plantearon han adquirido mucho mayor relieve. Efectivamente, el PPD era un partido en el cual era difícil ver tendencias, aunque, naturalmente, estaba lleno de personajes sin problemas de autoestima. Pero ahora no surgieron como otras veces espontáneos consensos, sino que se planteó una elección muy competitiva entre Bitar y Flores, ambos con sus respectivas cortes. Más aún, el triunfo de Bitar no suavizó las diferencias, sino que parece haberlas acrecentado y, además, amenaza con tener proyecciones. En efecto, Flores forjó una estrecha alianza con Schaulsohn, quién lo acompañaba como secretario general en su lista, que parece destinada a plantear sus propias alternativas políticas en el ámbito nacional.

La ocasión para marcar diferencias y obtener publicidad gratis se dio con el tema de las facturas brujas de empresas brujas del brujo Girardi. Ahí el Gurú Flores habló fuerte y golpeado acerca de “pandilla que llaman partido”, “camorristas” y otras delicadezas para rechazar lo que él definía como una defensa corporativa que

hacia el PPD del acusado Girardi. Naturalmente con esas declaraciones Flores obtenía buenos créditos en el test de la blancura, puesto que los medios han desatado una fuerte opinión pública en contra de la corrupción política.

Las cosas se han seguido moviendo dentro del PPD al compás de las denuncias de corrupción y los acuerdos y desacuerdos de sus personajes. Como ya se señaló, hasta la mismísima Presidente de la República ha aparecido en el baile de manera bastante poco afortunada y teniendo que dar después explicaciones a la directiva del PPD por sus intimidades con don Fernando. Pero el detalle de este lío no es lo más importante, sino el hecho de que pareciera estarse abriendo aquí una nueva posibilidad de rebarajar el naípe político.

Nos explicamos. Don Fernando, no contento con ganar mucha plata y llegar a ser, como ya adelantábamos, el Gurú oficial de la renovada intelectualidad de izquierda de los ochenta, descubrió que tenía una vocación de servicio público incontenible y que estaba dispuesto a sacrificarse por el país. Empezó modestamente como senador, pero muy pronto sintió el llamado a tareas superiores. Es así como en las pasadas elecciones presidenciales levantó su candidatura, talvez esperando que las peleas entre socialistas y demócratacristianos llegaran al extremo de necesitar una salida de consenso... y ahí estaba don Fernando. Pero las cosas no se dieron así y tuvo que retirar su candidatura, sin que tampoco nadie se enterara.

Ahora parece que vuelve a sentir el llamado cívico y la oportunidad le permite ir construyendo la imagen de antipartido y anticorrupción, que son dos cosas que tienen buena venta en los medios de comunicación. Con esa sagacidad que provocaba el delirio de sus discípulos, se da cuenta que el desprestigio de los partidos avanza a pasos agigantados gracias a la estupidez de los políticos y la mala leche de los medios de comunicación. En consecuencia, y apoyado siempre por su amigo Schaulsohn, que mientras tanto se ha dedicado a denunciar que los partidos de la Concertación se financian con los fondos reservados del Gobierno, anuncia la creación del “Foro Ciudadano Chile Primero”.

Ya se verá después lo que pasa con este nuevo referente, pero no cabe duda que tiene pretensiones de servir de base para empresas de gran envergadura, y se suma a los distintos signos de una alteración del ya rutinario juego entre Concertación y Alianza. Es difícil que el Gurú de la izquierda linda pueda llegar a transformarse en Presidente de la República, pero en el mar de las confusiones puede flotar cualquier cosa.

Ahora bien, si sumamos los líos en la Alianza con los líos de la Concertación, junto con las tendencias internas de los partidos y la creación de nuevas empresas electorales, podemos ver un cuadro bastante revuelto y con probabilidades de cambiar esa estabilidad que viene desde fines de los ochenta. Sin embargo, es de advertir que las fuerzas centrífugas son mucho más fuertes que las centrípetas. Es decir, que en esta política de personajes es fácil advertir que cada uno quiere armar su propio

tinglado, pero no se ven muchas posibilidades de que se puedan lograr acuerdos de apoyo para alguno de los personajes.

En términos más concretos. Se podría decir que cada vez está más cerca la Democracia Cristiana con Renovación Nacional y que, por lo tanto, sería posible que se estableciera algún pacto entre estos partidos. Como ya suele ser habitual, en esto los niños se muestran más adelantados y es así como a nivel de federaciones universitarias ya en algunas partes se ha establecido alianzas entre DC, RN y PPD. Sin embargo, a nivel nacional el problema es que la DC no va a apoyar a Piñera ni RN va a apoyar a Alvear. Por otra parte, la UDI con su Longueira o Van Risenosecuanto necesitan el apoyo de alguna fuerza política como RN; a la vez que los socialistas, con Lagos o Insulza, requieren el apoyo de un partido grande como la Democracia Cristiana. Finalmente, el Gurú de los regalones no llega a ninguna parte si no lo apoyan partidos grandes o simplemente revienta el sistema partidario.

En consecuencia, si bien los problemas internos de las coaliciones y sus partidos se han agudizado al punto de esperar que se baraje de nuevo el mapa político, los personajes que desean servir supremamente al país necesitan de los partidos y las coaliciones. De manera que, mientras no ocurran hechos nuevos, es muy posible que siga primando el amor a la rutina.

Finalmente habría que señalar que los partidos que todavía no logran entrar al comedor de los repartos, como es el caso del PC y sus enojados amigos, tampoco muestran todavía signos de poder constituirse como alternativa. Es posible que, para que no sigan majadereando, se haga un cambio a la ley de elecciones que les permita acceder al parlamento, pero esto no garantiza que puedan crecer. Por el contrario, la posibilidad de lograr crecer mediante alianzas con otros sectores cercanos se ve difícil, pues ni siquiera logran retener a recientes compañeros, como es el caso de los humanistas. Las otras agrupaciones de izquierda que han logrado constituirse son bastante débiles aún y generalmente restringidas a espacios específicos, como es el caso de los universitarios o algunos gremios. En cuanto a la expectativa de lograr acuerdo con una parte del partido socialista, esto sólo sería posible en un momento de crisis del partido, lo que mientras sea Gobierno difícilmente se va a producir.

En síntesis: “ruido, mucho, mucho ruido”, como dice el Sabina. Y cuando el río suena es porque ríe mejor.

¿Qué hay detrás del malestar con la educación?

CARLOS RUIZ E.

LA MAYOR SACUDIDA AL EXITOSO “MODELO CHILENO”

Luego del año 2006 parece no haber idea que despierte mayor consenso en la sociedad chilena que aquella que reza que la educación está en crisis. Quedó rotundamente claro que el sistema educacional necesita una profunda revisión, pues el país no resiste mucho más con una educación tan desigual y segmentada.

La educación chilena es una donde las escuelas abocadas a la enseñanza básica y media no representan la antesala de la sociedad, ni el espacio de preparación para una dinámica social en la que impera el libre juego de talentos y capacidades, menos aún cunas de un futuro mejor, semilleros o incubadoras de tiempos más plenos, sino más bien unos lugares que definen estatus, que distribuyen posiciones en la jerarquía social, que indican quién vale más –y quien menos- como persona, y lugares que, por lo mismo, protegen y reproducen a los grupos que monopolizan el prestigio social, evitando el ingreso de aquellos individuos que no están convidados a integrarlos. En fin, una educación para la desigualdad, para la segmentación, para la diferenciación social, no para el ascenso, la igualdad de oportunidades, para la movilidad social, como reza la promesa liberal.

Como ocurre desde que se inició el reinado de la hoy vapuleada Ley Orgánica Constitucional para la Educación (LOCE), en Chile el derecho a la educación está subordinado a la “libertad de enseñanza”, lo que provoca situaciones como las apuntadas. Puesto que es moda recurrir a referencias externas, a guisa de revestir de autoridad las propuestas para nuestra criolla realidad, valga considerar que en otros países los padres pueden elegir el colegio de sus hijos, pero el colegio no puede elegir a sus alumnos. En Chile, en cambio, en nombre de la “libertad de enseñanza” y la consiguiente ausencia de regulaciones establecida por la LOCE, esto sí se puede dar y un colegio puede cancelar la matrícula de sus alumnos con calificaciones inferiores a cierta meta, y así lograr una mejoría en las mediciones de calidad establecidas

(Simce), cuya incidencia en la competencia por la captación de matrícula y el prestigio de los establecimientos educativos es sabida de sobra.

El conflicto protagonizado por los estudiantes secundarios parece haberlo revuelto todo. Obviamente toca a la educación, pero también sacude las lógicas conocidas de constitución de actores sociales, su fisonomía, sus patrones de acción y de discurso, los rasgos de los liderazgos reconocidos en la sociedad. No menos sacudió también a la esfera política, a los partidos y las formas de representación y su supuesta efectividad, a la machacada pasividad de la ciudadanía, los modos e instrumentos de acción del gobierno y, de modo general, a la política social del Estado como tal. Más aún, la movilización estudiantil y el inédito grado de apoyo que alcanza en la población, replantea el problema de un malestar asociado a la frustración de las expectativas de ascenso social que se vinculan en forma extendida con la educación.

Tamaño sacudida puso en entredicho, nada más y nada menos, que a una ley orgánica constitucional. Una de esas que, como su nombre lo indica, no es una ley común sino uno de los basamentos orgánicos de la Constitución de 1980, y como tal un pilar del modelo económico, político y social heredado. Ninguna reforma hasta ahora esbozada en la arena política democrática, ha amagado con tocar dichos pilares orgánicos. No en balde exige más alto quórum parlamentario que cualquier otra ley para ser alterada. Ni siquiera hicieron tal las reformas que el presidente Lagos presentó pomposamente como una nueva Constitución (se recordará la ceremonia en que cambia la rúbrica de Pinochet por la suya en la “nueva” Carta Magna).

En suma, la movilización de los “pingüino”s” estuvo a punto de desatar un terremoto constitucional superlativo. No suena exagerado esto, si se considera que el modelo de educación vigente está estrechamente ligado al modelo de desarrollo imperante; de ahí que los problemas del primero remitan a los dilemas y limitaciones que impone el segundo. El amplio e inédito consenso social, tras la demanda por la derogación de la LOCE, deviene problema político superlativo para el atribulado gobierno de turno de la Concertación, puesto que toca uno de los pilares del orden constitucional heredado. De tal modo, cuando dicho gobierno anuncia que la LOCE no se deroga, que a lo más se reforma, termina por cerrar filas detrás de la Constitución de 1980, mostrando a las claras que, si ésta no se ha cambiado antes, no es por la falta de consensos ciudadanos suficientes, sino porque se carece de la voluntad para hacerlo, lo que sólo puede responder al hecho de que la Concertación se acomodó de buen gusto al orden de cosas que dicha Carta Magna, de origen autoritario, prescribe.

La intensidad de un conflicto social no está asociada, como se cree muchas veces, a su drasticidad, a la violencia desplegada, sino a la medida en que involucra otras relaciones sociales, otros ámbitos de la existencia de una sociedad. El conflicto que los estudiantes secundarios plantearon en torno a la educación, sigue precisamente

ese curso: lejos de reducirse a una discusión técnica y corporativa de demandas particulares, constreñidas a los intereses de un sector específico de la sociedad, a medida que su lucha gana legitimidad, involucra otras problemáticas hasta devenir manifestación de una serie más amplia de malestares que no encuentran otras vías de expresión.

De modo que, alrededor de este proceso, se trenzan al menos tres fenómenos que es menester considerar en su propio mérito. El primero -y más visible de éstos- es la emergencia del movimiento de los estudiantes secundarios, con sus llamativos y novedosos rasgos, su sorprendente capacidad, su inédita amplitud social y marcado desapego a las identidades políticas más conocidas. En segundo lugar, a menudo soslayado, está el apoyo generalizado que alcanza dicho movimiento, no sólo en los sectores populares, quienes de forma más regular se lo han entregado, sino también en amplios sectores medios, en donde estos últimos, añaden una expresión de malestar, haciendo patente los vacíos de representación que la ensimismada esfera de la política acarrea consigo. En tercer lugar, el problema mismo de la educación y la medida en que, a partir de los patrones culturales vigentes y las expectativas asociadas a ellos, se vincula con el magro panorama que muestran ciertos rasgos de la sociedad chilena, como aquellos asociados a las rigideces que limitan la movilidad y el ascenso social, la primacía de un auténtico régimen meritocrático y, en definitiva, la frustración que se produce -tanto en sectores populares como medios, con su respectiva especificidad- en términos de la relación entre educación y posibilidades de ascenso social. Claro, aparte de lo anotado, también la movilización “pingüina” ha llamado indirectamente la atención sobre otras cuestiones, como los grados reales de representación de la política formal, el carácter y alcance efectivo de las políticas sociales del Estado, el malestar de importantes sectores medios, en particular con los mecanismos a través de los cuales la elite impide el ascenso social de estos sectores.

LA ATRACTIVA NOVEDAD DEL MOVIMIENTO DE LOS “PINGÜINOS”

La llamada generación “pingüina” acabó de un plumazo con una serie de mitos que parecían inamovibles. Desplomó la repetida idea de que la juventud formada en estos años, de supuesto imperio de una cultura posmoderna, resultaba intrínsecamente desinteresada en la “cosa pública”, eminentemente enajenada detrás del carrete, el consumo y la satisfacción individual, inalterablemente presa de la pasividad del “no estoy ni ahí”. Empero, no sólo se tomó las calles y liceos, sino que terminó por secuestrar la mismísima agenda política del país. Más consistente que el “momento Tunick” que hace un par de años se empleó para ilustrar el mentado cambio cultural de la sociedad, el momento “pingüino” -que sustituye el desnudo por el uniforme escolar- descoloca las repetidas interpretaciones sobre una extendida satisfacción social con el consumo. En lugar de ello, irrumpen de un modo sorprendente

para el discurso en boga, unos escolares organizados, provistos de metas y estrategias claras, que parten pidiendo un carnet gratis y terminan exigiendo, con argumentos, escribir las leyes que reformen la educación pública chilena.

También se suponía que, dados los modos culturales de apropiación, la tecnología había devenido en un mero medio de enajenación, especialmente en estas franjas etáreas, a menudo apuntadas como el ejemplo más claro de semejante fenómeno. Pero esa misma tecnología que muchas veces no parece sino un fin en sí misma, para estos jóvenes resultó simplemente una forma de relacionarse con el colectivo, marcando notoriamente la organización del movimiento con celulares, mensajes de texto, blogs y páginas web. Aún así, ingenuamente, la materia de tales comunicaciones se sobreentendía constreñida a asuntos banales. Es irónico, por ejemplo, que durante el año 2005 una de las mayores preocupaciones del entonces Ministro de Educación, radicaba en la reticencia de los jóvenes a inscribirse en los registros electorales, lo que se explicaba por la mala “educación cívica” que recibían. De allí que, siguiendo una pauta habitual, el gobierno convocara a “expertos” a integrar una “comisión” para que lo asesorara en estas materias. Tal imaginativa comisión confirmó, que los estudiantes chilenos tenían una pésima educación cívica. Y como original solución, propuso una batería de medidas para enseñarles nuestro sistema institucional y motivarlos a mirar más allá de lo que suponía eran sus pequeños intereses (por supuesto que, de ningún modo, se considera que es la política lo que hay que cambiar). Pero, antes de que se pudieran implementar tales recomendaciones, agudadora pues, estalló la paciencia adolescente.

Es por ello que, por sobre otros rasgos, llamará poderosamente la atención de la sociedad, la medida en que la generación “pingüina” aparece conectada al interés colectivo. Al contrario de lo que sugieren los reiterados enfoques dedicados a exaltar la capacidad estructurante del consumo y la expansión irrefrenable del individualismo, estos jóvenes ponen de manifiesto que los procesos de conformación de identidad, no se reducen a la resolución de cuestiones referidas al destino personal, sino comprenden el hecho de asumir un punto de vista sobre el entorno, sobre el medio, la sociedad en que se vive. Se desploma así, toda una propalada argumentación –valga recordarla aunque sea para apreciar lo extemporánea que resulta ahora- acerca del sometimiento inevitable de estos jóvenes –especialmente ellos, se decía- a la ansiedad consumista, a la asociación del prestigio y la autoestima con dicho consumo, a la medida en que esa alienación constituía un efectivo mecanismo de domesticación, un cepo, un eficaz dispositivo de dominación, gracias a su intrínseca conexión con el placer, la satisfacción y la expectativa de realización del deseo. Toda una formulación acerca de la medida en que, en la actual “cultura posmoderna”, la identidad del Yo se construye a través de los objetos, una suerte de “decorado del Yo” asociado a ellos, que da cuenta de un estatus, confundiendo en definitiva, con los atributos del Yo: el consumo como deseo-placer y como construcción de sí mismo. El consumo,

como fuente fundamental de realización humana, capaz de moldear una forma pasiva de relación entre el mundo y la vida, cuyo desideratum resulta ser un individuo espectador y no un actor de los acontecimientos, arrastrándolo inexorablemente al encierro en el mundo privado, de un modo completamente incapaz de advertir cómo se manifiestan en la vida cotidiana los modos vigentes del poder. En definitiva, un proceso de privatización que restringe drásticamente el campo de la experiencia social; situación ésta en que lo que se extiende es más bien un deseo ansioso de “normalidad” en la que, incluso quienes anhelan una ampliación democrática subordinan el cambio a la mantención de esa normalidad, por precaria e ilusoria que sea; en que la gente prefiere no saber nada de nada, pues toda información incrementa la imprevisibilidad y, por ende, la incertidumbre; una suerte de “impermeabilización” mediante la cual la gente pone a seco su vida interior, protegiéndola del mundo externo. Huelga mayor comentario después de los hechos del 2006, a menos que pueda creerse posible la repentina y radical transformación, de una condición de personas ausentes a líderes sociales en posesión de un discurso articulado.

Se ha dicho también que son “hijos de la democracia”. Nacidos entre 1989 y 1990, no conocieron la dictadura ni heredaron el temor a las movilizaciones sociales. Acaso por ello, han crecido con mayor determinación a exigir sus derechos: a contestar, a discutir, a tener opinión propia, a cuestionar y protestar. Han crecido escuchando que tienen derecho a una educación de calidad, pero no la tienen. La combinación de ambos factores, el interés colectivo y la determinación a exigir sus derechos, hacen que del malestar y la frustración, se pase a la movilización y que ésta alcance connotaciones cada vez más profundas. Del malestar inicial respecto a la calidad de la educación, el movimiento secundario consiguió extender la protesta hasta un malestar con el tipo de oportunidades que esta sociedad les ofrece. Aluden en definitiva –y con eso acaban de concertar un apoyo generalizado- al modelo de sociedad vigente. Terminan así de dejar claro que no era que a los jóvenes no les interesara la política; no les interesaban en realidad los políticos, esto es, la política vigente.

Pero todo esto no puede conseguirlo un movimiento sustentado en la pura voluntad y decisión. Las ganas no bastan, como comprobaron otros movimientos estudiantiles precedentes, universitarios y secundarios. El del 2006 no es un movimiento “espontáneo”. Tampoco, como se intentó presentar inútilmente en su momento, es un producto de “agentes externos”. Su depurada dinámica de organización y acción, sostenida en un ágil esquema de asambleas y vocerías, presiones y negociaciones, sumados a la celebrada combinación de una agenda “corta” y otra “larga”, provienen –como ellos mismos remarcan en conversaciones- de un largo análisis sobre las movilizaciones precedentes, particularmente del llamado “mochilazo” del 2001. De dicho proceso provienen también las determinaciones conducentes a alcanzar una

mayor amplitud social y política en su interior (los sectarismos al respecto fueron considerados como uno de los principales factores que debilitaron la experiencia anterior), así como relativas a la configuración de mecanismos que permitieran un control por parte de las bases respecto de sus dirigentes, voceros y representantes en su máximo órgano, la Asamblea Coordinadora de Secundarios (facultades revocatorias, mecanismos de supervisión, los llamados Ministros de Fe encargados de fiscalizar que los representantes voten según sus bases, etc.).

Por ejemplo, gran parte del año 2005, lo consumieron en la elaboración de un documento que entregaron en noviembre con su visión de los temas que les preocupaban, lo que revela una reflexión sistemática con activa participación. Ello indica, pues, que el fenómeno no es nuevo; lo nuevo no es más que el hecho que saltó a la palestra, que se lograron abrir un espacio en un debate público que les resultaba mezquino. Es que, si se considera seriamente, no puede surgir de la noche a la mañana un grupo social con una extraordinaria capacidad de organización, capaz de sostener una prolongada demanda política de envergadura nacional; incluso superando momentos en que tanto los medios de comunicación como el propio gobierno intentaron dividirlos, o bien deslegitimar sus objetivos a través de la criminalización de su accionar. Pero nadie como los jóvenes para soportar y enfrentar el estigma de la delincuencia y la sospecha sobre sus conductas y acciones.

Para sorpresa del mundo político —al punto que enmudeció— irrumpieron jóvenes elocuentes con discursos bien articulados, que hablaban con propiedad de la LOCE, de los diversos tipos de quórum requeridos para modificar leyes y constituciones, que discutían en asambleas donde llegaban a acuerdos por mayorías, que entendían perfectamente —para lección de muchos “servidores públicos”— lo que significa un mandato de las bases, y que negociaban de igual a igual con las máximas autoridades. Aunque cueste a muchos, habrá que aceptar que la sólida e inteligente estructura de asambleas y voceros generó pertenencias sólidas e inéditas, y logró poner en evidencia las ambigüedades y contradicciones de las dirigencias políticas.

Por cierto que es una exageración atribuir, de forma generalizada, al movimiento secundario criterios igualitaristas. Precisamente uno de sus mayores éxitos resultó el mantener una asombrosa dosis de heterogeneidad, tanto ideológica como social, en la cual los criterios anteriores van a cohabitar con el malestar por la inexistencia de condiciones parejas de competitividad, por el derecho a competir en las mismas condiciones.

Cierto es también que algunos factores “externos” van a influir en la viabilidad del movimiento secundario. Uno de ellos, acaso el mayor, es el de las expectativas de participación y equidad que abrió en vastos sectores la campaña presidencial de Bachelet. Sin esas expectativas abiertas, y su correspondiente frustración a medida que avanzaba el tiempo, no puede explicarse por completo la conmoción social que logra producir el movimiento “pingüino”. Pero tampoco podemos, a guisa de lo anterior, restarle los méritos propios. Bien sabemos que en la vida hay oportunidades,

pero otra cosa es tener la capacidad de aprovecharlas. Aún cuando muchos con algo de razón puedan juzgarlo frustrado por la resolución final del conflicto y la recomposición que logran los mecanismos de control social, el movimiento de los secundarios marcó un verdadero hito en los procesos de construcción de actores sociales efectivamente protagónicos, no simplemente denunciativos ni testimoniales, en la etapa histórica abierta desde 1989.

PARA LA MEMORIA: EL CONFLICTO EN SUS NÚMEROS, IMÁGENES Y VOLTERETAS

Mucho se ha dicho que el que corre es un tiempo de la desmemoria. Volvamos a la retahíla de argumentos predominantes, para evaluar la experiencia social todavía fresca que se está considerando. Los teóricos del posmodernismo han indicado que estamos prisioneros de una suerte de “presentismo” en el que, por un lado el pasado se diluye rápidamente y, por otro, el futuro resulta marcado por la carencia de proyectos, y con eso el sentido mismo de la vida. Que la vida singular queda ineluctablemente enclaustrada en su inmediatez; que, a lo más, hay una sumatoria de singularidades sin que se elabore un horizonte trascendental (un imaginario colectivo o utopía) por medio del cual la vida en común puede ser concebida y abordada como obra de todos. Que, por eso mismo, el tiempo se vive como una secuencia de acontecimientos, de coyunturas, que no alcanzan a cristalizar en una “duración”, es decir, en un período estructurado de pasado, presente y futuro. Que vivimos, en definitiva, en un presente continuo, un tiempo sin horizonte, en donde el problema de fondo es que ninguna experiencia logra crearse, más allá de la retórica del momento, un horizonte de futuro. Que prima, más bien, una ansiedad casi histérica por lo nuevo, lo efímero, la moda. Que se borra el pasado y, en consecuencia, la distancia histórica que daba relieve a la actualidad. Condensando el tiempo en un solo presente, entonces, la vida social deviene una superficie plana. Un aceleramiento del tiempo en que ya nada se afirma. De ahí, pues, que la cultura posmoderna aparece como una crisis de identidad. Claro, conforme a tal argumentación, ¿cómo afirmar una identidad en un presente recurrente? Cómo hacerlo en una temporalidad en que el individuo queda atrapado en una existencia desarticulada, en que los diferentes elementos desconectados, no se estructuran en una secuencia coherente; en un presente perpetuo. En tal ausencia de un sentimiento de identidad, pues, es dable pensar que el individuo no solo es nadie sino que tampoco hace nada. Que para superarlo tendría que tener proyecto, y eso implica comprometerse a cierta continuidad. Por cierto, no podemos dejar de concordar en el hecho de que, al romperse las continuidades temporales mediante las cuales nosotros seleccionamos y ordenamos los distintos aspectos de la vida, la visión de mundo deviene indiferenciada: una sumatoria ilimitada de elementos yuxtapuestos. En tanto el individuo no “filtra” el presente, tiene una experiencia más intensa, pero finalmente abrumadora. Vive

intensamente el instante, pero al precio de petrificarlo. A falta de ponerle límites al presente, de dimensionarlo, se ahoga en una inmediatez sin fondo.

De ahí el valor de las continuidades en esta discusión. Por eso, independientemente de que todo esto sea así o no –arena de otra discusión con la que no corresponde abrumar estas páginas–, más allá del análisis anterior conviene reseñar, brevemente, algunos elementos del conflicto en cuestión, para cuando nos falle –como dicen: indefectiblemente– la memoria.

Iniciado a fines de abril con la primera acción masiva de los secundarios (marchan recién alrededor de 15 liceos), el conflicto parte con la demanda de gratuidad en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y en la tarifa escolar, pero además, desde un principio reformas a la LOCE y a la Jornada Escolar Completa (JEC), y principia a concitar un creciente apoyo, primero entre apoderados, profesores, estudiantes universitarios, y luego en la sociedad en general. Desde entonces, el gobierno, como contraparte, ensayará sucesivas y contradictorias formas de encarar el conflicto, mudando los interlocutores (Subsecretaria de Educación, Ministro del ramo, Ministro del Interior, la propia presidenta, parlamentarios como intermediarios, etc.), espacios (mesas de negociación, comisiones y subcomisiones de diálogo, etc.) y grados de dureza tanto en el discurso como en la acción (al punto que la propia presidenta, en uno de los giros más comentados, anuncia en su momento que actuarán “con todo el rigor de la ley frente al vandalismo”, para luego desdecirse reivindicando el derecho a protestar de los jóvenes y hasta acusar de excesos a la acción policial y al alto oficial a cargo), en un curso reconocidamente errático en el que los jóvenes representan al actor más claro y centrado en sus objetivos.

Entre medio, la convocatoria juvenil alcanza los 800 mil estudiantes movilizados a fines del mes de mayo a lo largo de todo el país (superando en la capital los 250 mil), con más de 950 colegios adheridos (más de 250 en la capital), a través de tomas de liceos y marchas que, a ratos, resultan duramente reprimidas, superando algunas de ellas el millar de detenidos por día. Números, en definitiva, que no tienen parangón en el país desde el fin de la dictadura militar.

Un aspecto a relevar es la forma en que el gobierno acepta considerar los aspectos particulares de la demanda estudiantil, a la vez que apuesta a dilatar las demandas de mayor hondura. Después de estériles intentos por desconocer la legitimidad del movimiento secundario, que pasa por erráticos cambios de interlocutores y escenarios, declaraciones contradictorias en que unas autoridades niegan a otras, el completo silencio sobre el problema en el informe anual del 21 de mayo (que irrita de tal modo a los estudiantes que, de ahí en adelante, dan curso a la verdadera masificación de las tomas, marchas y paros), el gobierno se allana a responder a las demandas estudiantiles a través de la propia presidenta.

A pesar de remarcar, en boca de la propia presidenta, que no se está negociando con los estudiantes, a la vez que afirma que éstos han abierto una oportunidad histórica de encarar el problema de la educación a partir de sus legítimas demandas,

se responde con ofertas particularistas del tenor de mejoras en infraestructura, aumentos en las raciones alimenticias, gratuidad de la PSU para los sectores más pobres y aumentos en el subsidio familiar. Al mismo tiempo, la discusión más sustantiva, sobre la LOCE y la JEC, se deriva sin mayores indicaciones gubernamentales a una numerosa y heterogénea mesa de diálogo que -todos coinciden en ello- al final de cuentas no pasó más allá de consignar las abiertas diferencias existentes entre los variopintos sectores sociales y políticos que la integran, a saber, los propios estudiantes (incluidos los universitarios), los profesores, sectores académicos, la CUT, técnicos del rubro, el empresariado, la iglesia católica, centros de estudios ligados a la derecha política y empresarial (como el Centro de Estudios Públicos y el Instituto Libertad y Desarrollo), entre otros. Lo peor de todo es que, al final, nadie quedó conforme con los resultados de la mesa: un documento saturado de indicaciones divergentes respecto a su hilo central, el cual, por lo demás, no sería rubricado por los estudiantes secundarios, los universitarios ni los profesores, quienes en masa abandonan dicha instancia. La iglesia también hará sus descargos, sumándose a las molestias expresadas por técnicos adscritos a los centros de estudios de la derecha y el empresariado. Difícil, pues, para un ya errático gobierno, haber encontrado mejor forma de provocar la insatisfacción de todos a la vez.

Al final, el gobierno no sólo no dejó contento a nadie, sino que dio muestras de sobra de su aturdimiento. Carente de un manual de manejo de conflictos sociales, lo ensayó todo con los “pingüinos”: intentos por ignorarlos, descalificaciones, estigmatización, adulaciones, criminalización, represión, “arrepentimiento” (incluida la destitución de un general de la policía), negociación, cambios en los equipos encargados de “manejar” el conflicto (incluida la destitución del ministro del ramo), intervenciones directas de la presidenta (incluso por cadena nacional de televisión), la búsqueda del desgaste y quiebre de la fuerza estudiantil, etc. El mundo político – incluido el oficialismo- no trepidó en criticar la incapacidad y abierta improvisación del descolocado ejecutivo, mientras que los estudiantes no vieron en ello sino oportunismo y carencia de voluntad política para resolver el problema de fondo. Más fríamente se puede agregar que el gobierno subestimó completamente el poder y la capacidad de los estudiantes, así como la hondura de sus demandas.

En términos de imágenes de lo que fueron esos días –meses en realidad- dos hechos, puntuales pero representativos de los rasgos novedosos que para estos años de democracia trajo la insurgencia secundaria, valen de ser consignados. Uno –esta vez sí que impensable, fuera del canon de los conflictos sociales de los últimos quince años- es aquella oleada de respingados colegios particulares del sector oriente de Santiago sumándose al paro estudiantil, allá por fines de mayo. A tal punto llega el reconocimiento, el estremecimiento nacional frente al fenómeno de la movilización “pingüina”, que el último día de mayo el país despierta con la insólita noticia que, bajo disímiles maneras –paros con charlas, actos culturales, colectas, marchas, jornadas de reflexión- se sumaron a un apoyo activo a las demandas y la lucha estudiantil un

número significativo de colegios cuyos estudiantes pertenecen, sin duda, a las franjas acomodadas del país (aunque no a las más ricas, es necesario hacerlo notar). Colegios como la Villa María Academy, el Colegio de los Sagrados Corazones de Manquehue, La Maisonnette, Compañía de María Seminario, Cambridge College, United College, Santa María de Providencia, Saint George's, Santiago College y La Girouette entre otros, se reunieron con sus pares provenientes de sectores de menos ingresos o abiertamente pobres. No completamente independiente de este esto, otro hecho resulta también representativo de los alcances que llegó a tener el conflicto. Pocos días después de lo anterior, un grupo de apoderados, preocupado por el rumbo que tomaban las cosas, en su mayoría vinculados al Liceo Lastarria y otros centros del sector oriente capitalino (casi anunciando los duros términos de desalojo de las tomas que luego emprenderá en contra de los estudiantes el alcalde de Providencia, pinochetista de claro currículum), se reúnen de noche un domingo, directamente con el Ministro del ramo, con el objetivo de buscar fórmulas para terminar con la movilización, en forma sigilosa y paralela a la mesa de negociaciones en la que participaba entonces el máximo órgano estudiantil a través de sus representantes. Los estudiantes movilizados en tanto, reunidos a esa misma hora en el Internado Nacional Barros Arana, discutían la propuesta que recién les acababa de hacer la propia presidenta Bachelet. Enterados de la reunión paralela, parten indignados hasta el Ministerio de Educación y comienzan a golpear sus puertas –la imagen más clara es la del espigado “Comandante Conejo”– para exigir una explicación por lo que consideran un “doble estándar” de las autoridades. Los medios de comunicación cubren profusamente la escena. Algunos canales de televisión interrumpen sus noticieros para transmitir en vivo los hechos, como expresión diáfana del grado en que el país, ya a esas alturas, resultaba conmocionado por el conflicto y atento al curso que asumía. Al otro día, iniciándose la semana, la prensa escrita anunciaba al unísono el quiebre de la movilización, trocando deseos con realidades sobre un conflicto que todavía le quedaba harto por andar.

LAS RAZONES DE UNA HONDA FRUSTRACIÓN CON LA EDUCACIÓN

De manera inobjetable, clara como pocas veces, lo que ha detonado al resto de los problemas ha sido el malestar que existe con el estado de la educación en amplias franjas de la sociedad chilena. Cualquier revisión entonces de las dinámicas sociales vinculadas a ello exige la revisión también del problema de la educación. Más que una discusión técnica, interesa aquí aproximarnos a las claves que explican su relación con el malestar manifestado este año.

El panorama de la educación chilena resulta abiertamente frustrante para la gran mayoría de la sociedad. Es sinónimo de desigualdad de recursos, de una reproducción del origen familiar, de segregación, de problemas en la formación de los profesores, de defectos en la asignación de las subvenciones.

El modelo vigente, que privilegia la llamada libertad de enseñanza, además de permitir un currículum flexible, estipula un subsidio estatal a la educación que se entrega a los sostenedores de los colegios, en la idea de que representa un incentivo para atraer estudiantes y, como tal, semejante competencia proveería una mejor educación, pues las familias escogerían escuelas exitosas y las de mal desempeño resultarían desplazadas. De este modo, en Chile el 90% de la educación básica y media recibe alguna subvención del Estado. Esta se paga por niño que asista al mes (a lo que los municipios más pobres alegan que tienen altos índices de ausentismo escolar en invierno por las enfermedades de los alumnos, acarreado descuentos automáticos por subvención a las escuelas municipalizadas). Y dicho subsidio se traslada de escuela si el niño que lo recibe es trasladado de establecimiento por sus padres. Es igual para toda escuela o colegio gratuito, sea municipal o particular. Los establecimientos subvencionados no pueden cobrar nada más, salvo sumas mínimas como la matrícula y el “financiamiento compartido”, o sea, un aporte de los padres. De todos modos, los colegios gratuitos, sin subvención, tendrían que cerrar sus puertas. Claro que a los colegios particular subvencionados se les permite seleccionar a sus estudiantes, discriminación que opera por rendimiento escolar, discapacidad, religión, familia, etnia, etc., cosa que los municipalizados no pueden hacer: están obligados a atender “en los bordes” de las comunas a los más pobres, excluidos de otras escuelas y mantener esa obligación aunque les vaya mal. Ello establece a fin de cuentas una desventaja estructural respecto de los colegios particulares subvencionados, configurando una situación que los monetaristas, adalides del mercado, tildarían de “competencia imperfecta”. De tal modo, nada tiene de sorpresa que desde 1981 a la fecha la educación pública venga retrocediendo sistemáticamente a favor de la enseñanza privada: si ese año la primera representaba el 78% ya en 2004 caía a un 48%, mientras que en el mismo lapso, la educación particular subvencionada ascendía de un 32% a un 44%. La educación particular pagada se mantendrá invariablemente en un 8%.

En los años ochenta, tras la idea de una descentralización, el régimen militar dejó al Ministerio de Educación sin escuelas ni liceos: todos pasaron a las municipalidades, según su ubicación territorial. Así las viejas escuelas públicas –inspiradas en la expansión racionalizadora del Estado Nacional- fueron sustituidas bajo dictadura por escuelas subvencionadas con nombres de fantasía o por escuelas municipalizadas. Pero los padres no accedieron a una información rigurosa que les permitiera elegir dentro del nuevo sistema (¿provee acaso el mercado tal tipo de información en alguna otra esfera?). En particular, la asimetría entre oferentes y demandantes es abismal en los sectores pobres. Por otro lado, las escuelas municipalizadas no internalizaron los costos de su mal rendimiento; sus déficit siguieron siendo financiados por la administración central. Aún más, como es reconocido, este esquema facilita también la proliferación de sostenedores de baja calidad.

La segregación social, que agrupa a pobres con pobres y ricos con ricos, se incrementó, dañando los resultados. Está comprobado que la segmentación de las escuelas por nivel socioeconómico o por capacidades –algo que pueden hacer las privadas, pero no las municipalizadas– perjudica los logros de aprendizaje. En buenas cuentas, esto significa que el Estado subsidia escuelas que discriminan. Hoy el mayor espejo de esta falta de equidad ya no está –como antaño– en la cobertura, sino en los magros resultados de las evaluaciones sobre los logros en el aprendizaje (Simce) pues, a pesar de que los recursos del sector se han triplicados en los últimos 16 años, de todas las reformas y cambios curriculares, la enseñanza no mejora para los más pobres que mantienen la brecha educativa con los colegios particulares, pasando el problema histórico de la equidad en la educación desde la cobertura a la calidad como elemento diferenciador. Así, se configuró una educación “para las manos” en las escuelas municipalizadas y otra “para la cabeza” en los colegios privados, siendo la escuela el lugar donde se consuma la predestinación social de los niños y los jóvenes.

Por lo demás, el financiamiento compartido acentuó el peso de las familias (cuando la escuela tenía por objeto disminuirlo). La comunidad abdicó toda autoridad en la escuela (y en cambio la entregó a los sostenedores). La educación principió a ser concebida bajo el modelo de capital humano (y las funciones éticas e integradoras del aprendizaje escolar se olvidaron). La formación de profesores se descuidó de manera grave.

Y aquí es que el progresismo ha comulgado con este modelo, sin siquiera discutir el diseño en lo más mínimo, sin abordar el déficit de integración y el maltrato a la igualdad que acarrea. ¿Qué han hecho al respecto los gobiernos de la Concertación? Diez leyes se han dictado desde 1991 a la fecha para introducir modificaciones a la LOCE, la mayoría se refirió a aspectos puntuales, pero ninguna modificó materias estructurales o de fondo. En un errático curso, carente de una estrategia capaz de abordar los problemas sustantivos, no pocos de estos proyectos sucesivos intentan corregir los problemas que han ido creando sus antecesores, lo que dota escasamente de racionalidad al sistema educativo. Desde el punto de vista estudiantil, en cambio, se planteó cambiar uno de los principios básicos con que cuenta dicha ley: la prevalencia de la libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación. Incluso los últimos candidatos presidenciales no incluyeron modificaciones a la LOCE en sus programas ni discursos.

Es que el tema de la educación no es menor. Cambiar de raíz el sistema heredado de la dictadura, o al menos en forma sustantiva, implica decisiones políticas mayores. Es que el modelo de educación vigente está íntimamente relacionado con el modelo de desarrollo y la concepción de sociedad imperante. Por eso, los problemas de la educación, que tanta frustración y malestar están mostrando, remiten en buenas cuentas a los problemas y las limitaciones que impone el estilo de desarrollo vigente, lo cual significa además que el malestar con uno es en cierto modo un malestar con el otro.

Instalados ambos bajo la dictadura, en el modelo de educación está presente el sistema de vouchers ideado por uno de los economistas considerados padrinos del modelo económico chileno, Milton Friedman. Sólo que aquí el subsidio no se entrega a las familias (como pretendía Friedman), sino a los sostenedores de los colegios quienes así tienen incentivos para atraer estudiantes, en la idea que la competencia proveería una mejor educación. En todo caso, la fuente de financiamiento no causa controversias. La educación obligatoria se financia con impuestos.

En nuestro país ese financiamiento público se efectúa mediante un sistema de subsidios a la demanda (como sugirió Friedman). El Estado entrega dinero a las escuelas por cada niño que asiste a clases. Si cada escuela quiere maximizar sus ingresos –supuso Friedman– se esforzará por ser mejor para que así los padres matriculen a sus hijos en ellas. La competencia castigaría a las malas escuelas y haría que las buenas pudieran florecer. Un ideario que se aplica a muchos otros ámbitos de la sociedad a partir de la transformación del modelo de desarrollo que inaugura en Chile la dictadura.

Aunque existe en algunos países en forma parcial, Chile es el único país que cuenta con un sistema universal de vouchers (cosa que no debe extrañar, si se considera nuestra situación en áreas como el sistema previsional, de salud, en general el panorama en cuanto a “protección social”). El subsidio se emplea, a elección de los padres, en el sistema municipal, privado, religioso o de cualquier índole. Aunque, como se sabe, el sistema no ha funcionado bien. Los padres carecen de información; el sistema municipal tiene rigideces de las que carece el privado; algunas escuelas seleccionan, lesionando la integración; no hay mecanismos para evaluar el desempeño; los requisitos para proveer educación son mínimos.

Del hecho que la educación obligatoria la financie el Estado mediante vouchers, se sigue otra característica de nuestro sistema escolar: la educación financiada con fondos públicos puede ser proveída por entes públicos o privados. Una educación con cargo a rentas generales, pero restada a todo control efectivo (no sólo en términos de programas de enseñanza, sino también en términos de quién ingresa a la condición de sostenedor de un establecimiento particular subvencionado). El que los estudiantes ingresen a la variante pública o privada sólo depende de la elección de los padres, pero en condiciones de “competencia imperfecta”. Más allá de los poderosos sectores que defienden el actual estado de cosas, a esta situación oponen algunos una vía para arreglar las cosas sin alterar lo sustantivo del modelo. Alegan que ninguno de los defectos antes anotados –y reconocidos por la amplia mayoría, excepto grupos minoritarios, a menudo directamente beneficiados por el actual estado de cosas– es fruto directo del sistema de vouchers. Por lo tanto, una solución al problema actual estribaría en constituir auténticas condiciones de competencia por la vía de que exista mejor información para los padres, requisitos de entrada más exigentes para los sostenedores (hoy todo un gremio), igualdad de condiciones entre el sector municipal y el privado, un currículum mínimo efectivo, formas de selección más

adecuadas, mayores subsidios a quienes más lo requieren, evaluación de resultados más allá del Simce, entre otras cosas, buscando hacer funcionar mejor el sistema sin alterar su diseño básico. En fin, apegándose con más rigor a la promesa liberal, de la cual reniegan a menudo los propios empresarios, con su tradicional lógica rentista.

Claro, en esa variante, de todos modos se pierde aquella función de la escuela como una institución integrada a un proyecto nacional y a la expansión de la república. Por cierto, hoy no sólo está en crisis la calidad de la escuela, sino el proyecto colectivo, nacional, que antes la legitimaba y le otorgaba sentido, ergo, hoy no sólo está en crisis la educación, sino también el valor y sentido que poseía. En cambio, a lo que se han opuesto los estudiantes secundarios es a la esencia misma del modelo educacional heredado: a que la educación particular se financie con dineros públicos. Han apuntado al centro del modelo como no lo hicieron antes los movimientos universitarios, consumidos en demandas corporativas (“arancel diferenciado”, etc.), en tanto han exigido trocar las cosas en una dirección directamente opuesta a la imperante: los estudiantes secundarios han exigido que las platas públicas sean para la educación pública. Incluso han tenido el cuidado de no cuestionar la existencia de una educación privada, sólo han exigido que no se financie con dineros públicos. Y eso ha concitado un gran apoyo, además del reconocimiento a la capacidad de apuntar al centro del problema. Aunque es pertinente anotar que, el generalizado malestar con la educación, que apoyó la protesta por su actual estado, no necesariamente se puede atribuir por completo a esta segunda fórmula de solución, sino que es muy razonable pensar que se divide entre los dos campos de solución anotados.

Y estas diferencias no resultan menores. Pues actualmente todo está centrado en la adquisición de conocimientos y habilidades para mejorar la posición del individuo en el mercado de trabajo, no en la formación de los alumnos en un saber general y en ciertas normas morales y/o republicanas. Entonces, unos coinciden en el malestar en tanto el actual sistema educacional no resuelve esos problemas, esto es, en la medida en que no opera efectivamente la promesa liberal de la “igualdad de oportunidades”, que en definitiva significa igualdad de condiciones para competir. Mientras que otros cuestionan esta base misma. Como apuntábamos al principio de este apartado, ello remite las cosas al modelo de desarrollo, de sociedad vigente: ¿en función de qué ideales, de qué sueño de nación queremos educar a las generaciones que vienen?

Y es aquí que el gobierno, la Concertación como tal, como fuerza de conducción política, aparece más claramente que en otras oportunidades mirando el techo, jugando con la lengua dentro de la boca, sin decir nada, pidiendo a una heterogénea mesa de diálogo que diga algo al respecto. Queda, pues, desnudada como una fuerza de administración, que no guarda dentro de ella ya mucho más que eso. Carente de proyectos, y con eso, de definiciones. La presidenta decía a principios de junio, en medio de los momentos más álgidos del conflicto: “si algo recuerdo de mi paso por el Liceo 1, es el orgullo por la educación chilena”. La pregunta que se

descuelga sola es: ¿cuál es, pues, el motivo de ese orgullo?. No sólo el gobierno y la Concertación han demostrado que no tienen voluntad ni determinación para intentar recuperar aquello que caracterizaba al modelo educativo del cual se dice sentir orgullo, sino que en buenas cuentas han devenido en la fuerza más efectiva de que se dispone en el país para administrar el actual modelo de sociedad y de educación.

Empero no por ello las cosas son más fáciles para quienes pretenden cambiar radicalmente dicho modelo. Es innegable que el sistema neoliberal se ha naturalizado al punto de transformarse en “verdad” situada más allá de la voluntad de los individuos. A al punto que promover, por ejemplo, una universidad pública gratuita parece hoy una declaración obscena porque atentaría contra el éxito y la estabilidad del “modelo chileno”.

Sin embargo, la idealización del modelo de educación anterior ilustra la medida en que se ignora la complejidad de construir un sistema educativo de calidad sobre la base de la inédita cobertura que hoy alcanza la educación, de hecho mucho mayor que la del modelo educativo mesocrático anterior, restringido a aquellos que resultaban incorporados política, económica y socialmente al modelo desarrollista. Por cierto que los incorporados representaban una porción de la población mucho mayor que la que resulta efectivamente integrada en la actualidad. Pero eso no puede llevar, bajo el signo de la idealización, a desconocer que la incorporación de los sectores obreros urbanos y las franjas medias vinculadas al empleo burocrático estatal, se asentaba sobre la base de la exclusión de amplias capas populares tanto rurales como urbanas. El propio gasto social del Estado, por cierto proporcionalmente mucho mayor al actual, seguía una matriz de distribución “con cintura de gallina”, al decir de Aníbal Pinto, esto es, se consumía preferentemente en los sectores medios y medios bajos de la sociedad, alcanzando poco de ello para los que estaban más abajo.

El problema es que a lo largo de los últimos años, hay que reconocerlo, esos sectores más bajos de la pirámide social han accedido a la educación. No es posible desconocer el aumento sostenido de la cobertura del sistema educacional. Claro, se podrá alegar que esa cobertura se ha producido de la mano de un deterioro acentuado de la calidad de la enseñanza. Lo cual también es cierto. El problema es combinar las dos cuestiones: una educación de calidad, sobre la base de la cobertura que alcanza hoy el sistema educativo. Eso como tal, nunca lo resolvió -¿acaso lo buscó?- la educación de mayor calidad que cobijó el extinto Estado de Compromiso. Cuando nuestra presidenta iba al Liceo 1 la cobertura en educación media no alcanzaba al 50% de los jóvenes, y el promedio de escolaridad para la población mayor de 15 años era de apenas 4.3 años, esto es, mientras la niña Bachelet recibía una educación gratis de calidad, los pobres de verdad no tenían acceso. En cambio hoy la educación media está universalizada en el país. La idea conforme a la cual la vieja educación pública, de calidad indiscutible, resultaba meritocrática e inclusiva, es falsa. Era excluyente. Los pobres no accedían a ella. La masificación de la enseñanza secundaria

se produjo recién en los años noventa, de la mano –hay que considerarlo- de un sistema que entrelaza educación pública y privada en las formas nada justas que ya hemos comentado, es decir, en las manos de quienes en vez de educadores parecen tiburones. De modo que la idealización de los tiempos pasados no hace avanzar mucho las cosas, en tanto ignora la especificidad irreductible del presente y sus complejidades. Esas nostalgias son injustificadas.

“ADELANTE MUCHACHOS”:

EL MALESTAR CON LA MODERNIZACIÓN SE ASOMA A LA CALLE

Como si fuesen pocos los motivos anteriores para incubar un fuerte malestar con el estado de la educación, se agrega además una razón que está imbricada, a guisa de sustrato, con todo lo anterior. Según se ha demostrado en varias ocasiones (los propios informes anuales del PNUD lo indican), en las imágenes socialmente instaladas la educación aparece vinculada por sobre cualquier otro factor con las expectativas de ascenso social. Luego, en el malestar con la educación aquí considerado hay también una frustración de las expectativas de ascenso social vinculadas a ella. No es, por tanto, sólo un malestar con la precaria calidad que muestra la educación, sino también un malestar de aquellos que, accediendo a una educación de cierta calidad, no ven que eso se traduzca en oportunidades de ascenso social siquiera cercanas a sus expectativas. Entonces es también un malestar con la actual educación para la desigualdad, para la segmentación, la diferenciación social, una educación que no conduce a la movilidad, al ascenso social, esas promesas de la ideología liberal en boga.

Claro que las restricciones al ascenso social no son responsabilidad ni se deben únicamente al estado y el carácter de la educación, sino que tienen que ver con el modelo de sociedad como tal. De ahí que, el malestar con la educación que se desata este año, resulte expresivo de otros malestares, acaso mayores. Como también el aplauso generalizado, esa extendida conmoción que dejan a su paso los jóvenes movilizados.

Es pues un malestar con la desigualdad, con las razones reales de la diferenciación social, que no residen –como sugiere el mito liberal- tanto en la competencia como en la monopolización de las oportunidades. El mítico informe del PNUD de 1998 ya indicaba que, bajo el actual orden de cosas, amplios y variados sectores de la sociedad incubaban un significativo malestar a partir de la percepción de que el país crece a un ritmo mayor al cual crecen sus propios ingresos, oportunidades y horizontes. Se trata, pues, de un malestar por los grados existentes de concentración del ingreso, fuente principal de la desigualdad actual. Un hecho que choca violentamente con arraigados patrones culturales provenientes, en buena medida aún, de un modelo anterior de sociedad regido por un distributivismo de carácter

mesocrático. Es que no siempre existió semejante concentración excluyente de las oportunidades como la que muestra el panorama actual de la sociedad chilena.

En estas condiciones, la educación, comúnmente considerada como la vía principal para el logro de la movilidad y el ascenso social, entrega un panorama frustrante no sólo en cuanto a la calidad de la enseñanza sino también en este sentido señalado, por lo que, si la educación deviene más bien en fuente de desigualdad, queda claro para estos sectores que, hablar de crecimiento entonces parece más bien un engaño.

Una cosa entonces es explicar el apoyo de los sectores populares al movimiento “pingüino”, y otra bien distinta -y a menudo eludida- entender las motivaciones del apoyo de sectores medios muchas veces acomodados a éste. Es que no sólo en las comunas populares del país recibieron muestras de apoyo los estudiantes movilizados, sino que inéditamente estas se propagaron hasta más “arriba” de Ñuñoa y Providencia, alcanzando a La Reina, Las Condes y Vitacura, entre los barrios del acomodado sector oriente de la capital. Repitiendo una rutina empleada para solidarizar con la Teletón, en medio del conflicto secundario una enorme cantidad de autos del sector oriente aparecieron con su vidrio trasero pintado con cal alegando “NO + LOCE”, tocando sus bocinas en caravanas, dando vuelta a las plazas luego de algunas de las más logradas marchas de los “pingüino”s. Si en el caso de los sectores populares el detonante es su exclusión de la enseñanza de calidad, de una educación efectivamente integradora (así como una exclusión cultural, política y económica, una exclusión general, social en definitiva), en el caso de los sectores medios acomodados la exclusión que perciben no puede estar referida a los mismos factores que en el caso de los primeros. En el caso de los sectores medios, incluidas algunas franjas acomodadas, se percibe una exclusión de la fiesta de la concentración del ingreso, dada en esa señalada imagen de que “el país crece a un ritmo mucho mayor del que nosotros crecemos”. Estas clases medias están cansadas del cierre social de la verdadera elite, y la medida en que concentra entonces la inmensa mayoría del fruto del “éxito” del modelo chileno.

Y he aquí que el movimiento “pingüino” –a diferencia de los corporativos movimientos universitarios anteriores– logró apuntar al meollo del problema de la educación chilena. Antes de la última movilización de los estudiantes secundarios las protestas sociales no alcanzaron semejante reconocimiento, en gran medida dado que se reducían a un carácter estrictamente popular, al tiempo que levantaban demandas muy específicas, economicistas, que no involucraban los intereses de otros sectores, ni siquiera muchas veces populares propiamente tales. El momento más álgido de ello fue en el año 1997, en donde coinciden los mineros de Lota, los profesores primarios, los trabajadores portuarios, los mapuches y los estudiantes universitarios¹. Pero a excepción de los universitarios, por lo demás entonces bajo

¹ Para un análisis de este proceso véase Ruiz, Carlos, *La opacidad social*, Revista Análisis del año 2005. Política, Sociedad y Economía, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago, enero, 2006.

conducción comunista, el carácter social de los movilizados resulta estrictamente popular. Y las demandas de unos y otros escasamente articulables, incluso entre sí, dado su acentuado carácter corporativo. El propio movimiento universitario no pasa de su demanda arancelaria a la hora de criticar el estado de la educación. Esta vez, en cambio, no fue así. Los secundarios apuntaron a los dilemas centrales que mantienen tanto el deterioro de la calidad de la enseñanza como su carácter segregante. Y cuando alguien da en el medio de un problema sentido por muchos, el aplauso no tarda en dejarse caer. Rompieron así con una tendencia corporativa y restrictiva que había marcado hasta entonces a los conflictos sociales en la etapa democrática, concitando esta vez el apoyo mesocrático en la medida en que logran expresar también el malestar de los sectores medios del país.

He ahí una de las fuentes de reconocimiento que explican el extendido apoyo social que alcanzan. En ello inciden en no poca medida ciertas formas que adopta el propio movimiento “pingüino”, como el control que logran de los instintos sectarios en su seno, tanto en términos sociales como políticos; algo también inédito en los movimientos sociales de los últimos tres lustros, muy a menudo reducidos a la izquierda extraparlamentaria, y expresivos de importantes dosis de resentimiento social, que limitan su reconocimiento a los sectores más duramente excluidos. Muchos estudiantes secundarios, que pudieron compartir algo de esto último, estimaron políticamente más importante mantener y proyectar una alianza social y política amplia, cuestión que les granjeó un extendido reconocimiento. Ello habla de una loable capacidad política.

El movimiento secundario, con su imagen de independencia de las desprestigiadas maquinarias políticas vigentes, ofrece la posibilidad que importantes sectores de la sociedad expresen sus malestares a través de un actor que no los compromete con las reparticiones políticas actuales. De cierto modo, el movimiento secundario recoge ese apoyo que en otro momento concitó el llamado fenómeno Bachelet, cuando aún no era candidata, incluso tampoco todavía pre-candidata. Entonces la futura presidenta se erguía en las encuestas por sobre aquellas figuras que preferían las maquinarias políticas. Bachelet en su momento expresó ese rechazo a la política, ese malestar con la política. Pero luego fue perdiendo esa condición. La gente la fue asimilando gradualmente a aquél mundo político de cuyos vicios antes la consideraran inmune; precisamente uno de los puntos más claros en que pierde en forma notoria tal condición es con su actitud ante el movimiento de los “pingüinos”. Éstos, por el contrario, se erguirán como el fenómeno que en las nuevas condiciones expresará entre otras cosas ese malestar que viene acumulándose hace más tiempo ya.

Otro tipo de reconocimiento al movimiento de los estudiantes secundarios, en cambio, la solidaridad del espectro político, en toda su diversidad, se produjo sólo una vez que éste movimiento probó su eficacia. Más aún, se puede señalar que parte de este respaldo se caracterizó por un franco oportunismo, un modo de conseguir cámaras, de ingresar al mundo mediático que cubrió a los estudiantes, de hacerse

parte de un hecho del que no formaron parte como no sea en el sentido más laxo y menos comprometido del término. Pero ello no hizo sino rebelar la forma en que opera el mundo político oficial, cómo la oficialidad política se pliega y se despliega ante todo aquello que le permita un instante de presencia televisiva, sin pudor alguno, apropiándose de escenas y escenarios ajenos como fue el movimiento “pingüino”.

El descontento estudiantil rebeló un país real que estaba constreñido, impedido de mostrarse en toda su magnitud. Eso explica la perplejidad que se apoderó de los observadores extranjeros, incluidos expertos en América Latina, quienes hasta entonces parecían no tener suficientes palabras con las que alabar los éxitos del “modelo chileno”. Es más, la protesta estudiantil dejó en evidencia la distancia entre el Chile real y los tópicos de la discusión en el espacio público; mostró hasta qué punto éste se había encapsulado en sus propios referentes, en un diálogo cerrado de reverencias entre el mundo político y los medios de comunicación de masas. Los estudiantes de colegios municipalizados de Chile, los más pobres y de peores resultados en las pruebas internacionales fueron los que obligaron al país a mirar la realidad, que lo conmovieron y lo llevaron a indignarse, y apoyarlos. Después de la movilización de los “pingüino”s, entonces, resulta más difícil justificar la inercia política, culpar de todo a la herencia de una institucionalidad amarrada por la dictadura. Los estudiantes secundarios despertaron a la ciudadanía a la evidencia de que los amarres se pueden desatar, que las leyes, incluso las orgánicas, se pueden reformar y también derogar, que crear una nueva institucionalidad no es un imposible.

La enorme simpatía que despierta el movimiento “pingüino” está, de este modo, muy vinculada a la posibilidad que ofreció —a partir de sus rasgos— a amplios y heterogéneos sectores de la sociedad para sacudirse del pesimismo y la impotencia.

EL MITO DE LA EXPANSIÓN DE LAS CLASES MEDIAS

Advertida la presencia de otras dimensiones, distintas a la enseñanza, en el reciente conflicto por la educación, así como de una diversidad de sectores sociales que —por distintas razones— apoyan a la protesta de los jóvenes. Advertida también, la efectividad con que esos noveles personajes desnudaron la crisis del modelo educacional vigente y capturaron un malestar de extensas franjas de la sociedad que no encontraba expresión en la política ni el espacio público, dada el modo en que estos se hallan configurados por entelequias ensimismadas. Podemos revisar —como hemos venido haciendo— aquellos mitos, hoy derrumbados o trastabillantes, que en su reiteración a coro por las autoridades, la clase política, la intelectualidad cortesana y los medios de comunicación de masas, oscurecían el panorama del Chile real que ha irrumpido de la mano del movimiento “pingüino”.

El más reiterado de esos mitos, y por momentos no poco arraigado, es aquél que indica una expansión sostenida y a niveles inéditos de la clase media en Chile en el ciclo histórico reciente. Tales imágenes apuntan a “un país dominado por la clase

media”, en palabras de Roberto Méndez. Clase que, según dichas estimaciones, constituye el grupo mayoritario del país, alcanzando al 65% de la sociedad chilena, crecimiento que se explica por la mayor cobertura educacional. Una clase media que, en virtud de este hecho, “domina numérica, económica y culturalmente”, por lo que “está afectando la forma como se gobierna, como se hacen los medios de comunicación, la entretención, la televisión”. Tales visiones, por cierto, reconocen que –aunque no explican por qué– esa clase media se organizó y movilizó recientemente para protestar por la educación.

Empero, al contrario de esta imagen mitificada por los medios y la sociología apologetica del modelo, no sólo ocurre que no hay tal expansión de las clases medias (habría que empezar precisando qué se entiende por clase media), sino que las verdaderas clases medias se encuentran más inestables, reducidas, inseguras, sometidas a la mayor tasa de movilidad social que registra la sociedad chilena actual (a diferencia de los sectores situados en los extremos altos y bajos de la pirámide social), el mayor grado de volatilidad en sus posiciones sociales o, dicho en otras palabras, que los individuos ubicados en este sector enfrentan el riesgo más alto de perder la posición en que se encuentran². En suma, que no la pasan bien y están, por lo demás, excluidas de la fiesta mayor, dados los elevados índices de concentración del ingreso, al tiempo que muchos sectores considerados en dicha imagen mítica como clases medias en realidad no lo son, y difícilmente lo serán. Por ello, al hablarse así de clases medias, se está hablando no sólo de aquellas franjas efectivamente incluidas en tal categoría social sino también de extensos sectores que en realidad no lo están. Dicha imagen no sólo busca encandilar a los auténticos sectores medios haciéndolos sentir como la parte fundamental de la sociedad y la más beneficiada por el modelo vigente, sino que busca encandilar también a extensos sectores populares que en rigor no pertenecen a dicha categoría social. Ello a pesar de que, en algunos casos pertenecientes al mundo popular, producto de la expansión y segmentación del sistema de educación superior, sus hijos hayan accedido a una formación universitaria a diferencia de sus progenitores, puesto que eso no implica mecánicamente tal ascenso social. Como indican estudios recientes, la relación entre un aumento del capital educativo y un aumento en el nivel de ingreso resulta claro en aquellos segmentos en que se produce un ascenso desde el trabajo manual al trabajo no manual, pero no así para las franjas medias, en donde el aumento del nivel educativo se relaciona más bien con la defensa

² Este rasgo de los sectores medios, el sector más dinámico en términos de movilidad social, se ha mantenido a lo largo de la transformación que la sociedad chilena ha experimentado en las últimas décadas, que arranca a fines de los setenta con el denominado proceso de “privatización de las clases medias”, y que se proyecta hasta la actualidad como un rasgo no ya de transición sino inherente a dicha posición social en el actual modelo de sociedad. Para una ratificación empírica reciente del fenómeno puede verse Wormald, Guillermo y Florencia Torche, *Estratificación y movilidad social en Chile: entre la adscripción y el logro*, División de Desarrollo Social, Serie Políticas Sociales No. 98, Cepal, Santiago, octubre, 2004.

de la posición social detentada, pues sin tal aumento, el descenso social parece inevitable³; esto coincide con el hecho ya anotado de que las posiciones sociales de los sectores medios son las que resultan más inestables en la actual dinámica social.

Entre las imágenes más burdas que se han usado está aquella, empleada desde Patricio Navia a Roberto Méndez, que reza que por sobre un ingreso de 300 mil pesos mensuales se puede considerar a un individuo como un miembro genuino de la clase media. Amén de que, como sabe hace mucho tiempo la sociología, ello no se define simplemente por un corte de ingreso, no quita que podamos impresionarnos por el grado de distorsión y/o ignorancia que porta la cifra espetada. Entre otras variables, por cierto, el ingreso incide, y todo el mundo sabe en este país que tal ingreso resulta claramente precario para poder vivir con dignidad, que resulta por lo demás completamente insustancial para poder encarar cualquier costo de salud o educación de alguna consideración, y que conduce a una jubilación absolutamente decorativa. El problema es que, basados en la enorme expansión que aprecian según esos parámetros, plantean entonces una asociación directa con una mayor estabilidad de la democracia y el desarrollo, en tanto consideran que estos elementos están inexorablemente asociados al estado de salud de la clase media en una sociedad. Si es así, si la situación de la clase media tiene tales connotaciones como las que afirma esta difundida visión ideológica, entonces conviene echar un vistazo al estado de dicha salud.

Desde el punto de vista de los ingresos se ha insistido en su aumento sostenido en el último período. Un panorama que, por cierto, marca una distinción de la realidad chilena en el contexto latinoamericano, como recientemente ha refrendado la Cepal. La razón de ello está en el ciclo de crecimiento económico sostenido, aunque la presentación habitual de este hecho no considera otros aspectos. Por un lado, la apuntada sensación de que los ingresos de las personas crecen pero a un ritmo menor al que crece el país, lo que implica que en alguna parte de concentra la mayor proporción de ese crecimiento general. Por otro lado, la efectiva ampliación de los ingresos debe prorratearse con el volumen de gastos que tienen que cubrir en el actual modelo de sociedad. El proceso de privatización de las condiciones de vida que significó el desmantelamiento de los viejos servicios públicos y sistemas de protección social, eleva a niveles inéditos los costos de mantención que recaen ahora directamente sobre el bolsillo de los individuos, consideración que no hacen los análisis apologéticos de las bondades del crecimiento económico reciente al resaltar unilateralmente lo primero. Se destaca en cambio la sorprendente expansión del consumo que va aunada a este crecimiento de los ingresos, por ejemplo en las formulaciones de Eugenio Tironi. Se habla de una “democratización del consumo”, en la medida en que otras capas se incorporan a éste, así como de una satisfacción social generalizada a partir de ello, cuestión, ésta última, discutible a la luz de los

³ Véase al respecto Wormald y Torche, *op. cit.*

malestares expresados recientemente con las promesas incumplidas por la modernización. Pero la desaparición de las viejas políticas sociales que incorporaban fuertes apoyos a la resolución de aspiraciones habitacionales, educacionales, cobertura de salud y en la cuestión previsional, entre otras, implicaban no sólo un nivel de seguridad más alto para los individuos sino que una suerte de “salario ciudadano” otorgado por el Estado, al decir de los socialdemócratas europeos, que como tal también habría de considerarse en las comparaciones históricas que se hacen ignorando en forma maniquea tal hecho. Precisamente la extendida sensación de inseguridad actual en gran parte de la sociedad chilena –que ha comprobado empíricamente el PNUD en sus registros- se produce en forma paralela a este aumento de los ingresos. La paradoja apenas aparente que pudiera haber en tal coincidencia se disipa apenas se considera el grado extremo en que, en el actual modelo de sociedad, se hacen recaer los gastos de salud, educación, vivienda, previsión, etc., sobre los ingresos directos de los individuos, los cuales, por lo demás, se hacen más inestables a medida que se extrema el ya fuerte régimen de flexibilidad laboral⁴.

Si apelamos a los últimos datos oficiales disponibles (los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) de 2003), se tiene que, en términos de distribución del ingreso, si la distancia entre el primer y último veintil de población (5%) en 1989 era de 137 veces, en 2003 esta distancia aumentaba casi al doble: 209 veces⁵. Pero tal expresión del aumento de la desigualdad en la sociedad chilena no responde tanto a un aumento de la pobreza (o sea a un desplazamiento hacia abajo del sector más pobre respecto del más rico), pues la pobreza va disminuyendo de algún modo (por cierto, existen cuestionamientos atendibles a la noción oficial de pobreza). Más bien ocurre todo lo contrario, el sector que se despega del resto de la sociedad es el de mayores ingresos. Tal distanciamiento se produce no sólo respecto del veintil más pobre, sino que, aunque en diferentes magnitudes, sobre todo el resto de la sociedad chilena, revelando que el carácter distintivo que asume la desigualdad en la sociedad chilena actual estriba, a diferencia de antaño, en el agudo proceso de concentración del ingreso experimentado en los últimos tres lustros que corresponden al período democrático.

⁴ Sobre este problema se encuentran interesantes aproximaciones en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD titulado “Las paradojas de la modernización, de 1998, particularmente los capítulos 7 y 8, “La protección frente a las amenazas: salud y previsión” y “La realización de las oportunidades en educación, trabajo y consumo”, respectivamente. Para una comparación en algunos de estos ámbitos entre el panorama chileno y latinoamericano, puede verse también Ruiz, Carlos, *¿Habrá crecimiento con igualdad para el Bicentenario?*, Revista Análisis del Año 2004. Política, Sociedad y Economía, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, enero, 2005.

⁵ Para estas y otras referencias sobre el panorama de la desigualdad en Chile, y su comparación con otros países de la región y el mundo, véase el mismo artículo Ruiz, Carlos, *¿Habrá crecimiento con igualdad para el Bicentenario?*, *op. cit.*

Puesto en otros términos, en los últimos quince años el país a registrado un inédito proceso de expansión económica, pero los frutos de dicho crecimiento se han concentrado marcadamente en una franja muy exclusiva de población. Un veintil de población (5%) corresponde en esas mediciones aproximadamente a unas 750 mil personas. Tal medida del sector más beneficiado resulta todavía muy gruesa, pese a que se contrapone al restante 95% de la sociedad. Cobija en su interior una importante disparidad de ingresos, por lo que aún resulta muy heterogénea para ilustrar con alguna precisión al sector que concentra los frutos del crecimiento económico reciente. Referido directamente a la distancia entre los grupos medios y el 1% más rico de la población, se tiene que si en los grupos medios el ingreso promedio familiar mensual aumenta de 510.000 a 710.000 pesos entre 1990 y 2003, para el segmento más rico lo hace de 6.600.000 a 10.200.000 en ese mismo lapso. Ello explica, por ejemplo, que el mercado de lujo crezca a tasas mucho mayores que las de cualquier otro segmento de éste, mientras que el fenómeno del sobreendeudamiento abarca al 76% de la población, dejando fuera, además de esta elite económica, a aquellas franjas que no son consideradas sujeto de crédito por las entidades financieras dado lo extremadamente exiguo de sus ingresos.

Estos números están diciendo que no sólo los sectores más pobres han quedado excluidos de la fiesta del crecimiento económico en todos estos años, sino también los trabajadores estables e incluso las propias clases medias, incluyendo a muchas de sus capas más acomodadas. De ahí que, al malestar continuo de los pobres y los trabajadores, se ha empezado a sumar, de modo gradual pero ascendente al menos desde 1997 en adelante, el malestar de estos sectores medios. Comienza a aflorar un malestar mesocrático, que le imprime nuevos rasgos al más conocido malestar popular con el patrón de crecimiento económico vigente y el modelo de sociedad a él asociado.

La sostenida expansión de las clases medias en todos estos años es, por tanto, un mito. En la medida en que a dichas clases se les considera habitualmente asociadas a la estabilidad de la democracia y el desarrollo, entonces no es difícil comprender que se trata de un mito ideológico, que busca efectos políticos. Por lo que, si se tiene en cuenta que lo que ocurre no es nada de eso, sino más bien la aparición de un sector con aguda conciencia de que está excluido de los festines más suculentos abiertos por el crecimiento económico, que no encuentra medios efectivos -la educación incluida- para acceder a él, entonces se puede concluir que el aumento del malestar de estos sectores medios constituye un riesgo para la estabilidad política acaso más sensible -dada la estructuración del régimen político- que el que han expresado los sectores más pobres, así como los trabajadores.

Como recordábamos arriba, en 1997, el año más álgido en cuanto a conflictos sociales del período democrático antes de la revolución “pingüina”, concentró las fuertes protestas de los trabajadores del carbón, de los puertos, de la educación básica, de mapuches y estudiantes. Todo ello con el claro predominio -en formas y contenidos- de un claro carácter popular en las decenas de miles de personas que

entonces se movilizaron. Un típico personaje de los círculos más determinantes de la política oficial, Gutemberg Martínez, apuntaba entonces que el sistema político podía soportar sin mayores problemas hasta diez de ese tipo de sectores movilizados simultáneamente, dado su carácter social. Esta vez, en cambio, detrás de la protesta de los secundarios apareció, además de los sectores ya conocidos en los últimos conflictos sociales, el malestar mesocrático. Y quedó claro que, con su apoyo, le imprimió connotaciones nuevas al conflicto social, especialmente en término de proyecciones políticas.

Es que el malestar mesocrático remite a la insatisfacción del sector más influyente en la configuración cultural del país durante la mayor parte del siglo pasado, que constituye en gran medida –para bien o para mal, ese es asunto de otra discusión– las imágenes, idearios y expectativas de los propios sectores populares. De ahí la complejidad que reviste para este tipo de regímenes políticos el malestar de las clases medias.

CAMBIO CULTURAL Y “MALESTAR EN LA CULTURA”

El panorama de los sectores medios en el país, entonces, no aparece precisamente signado por una expansión numérica sostenida. Tampoco por una arraigada satisfacción producto de la expansión del consumo. Otros fenómenos, vinculados al llamado cambio cultural resultan más expresivos de este sector de la sociedad.

Como se ha estudiado, las actitudes más conservadoras, por ejemplo con respecto a la familia, se aprecian en los últimos años en los extremos de la pirámide social: el sector alto y los más pobres tienen una visión mucho más conservadora con respecto a la familia. En los más pobres la disolución de la familia suele tener consecuencias desastrosas para el nivel de vida. En los medios es donde se ha producido en mayor medida el cambio valórico y cultural.

Aunque, más que un cambio cultural acendrado, estudios recientes (como los presentados este año por UC-Adimark y Mori) parecen indicar que estamos en medio de una transformación cultural que todavía tiene mucho por recorrer. Otra cosa es que, al irrumpir este proceso, llame tanto la atención frente a los arraigados patrones conservadores que marcaron la cultura chilena por centenas de años. La dinámica de transformación es acelerada, lo que significa que los niños actuales habitarán un país aún más diferenciado de los viejos patrones conservadores, y les parecerá que en un tiempo como hoy apenas se apreciaba el “cambio cultural” en función de las dimensiones que, a este ritmo, llegará a alcanzar.

Esta es una cuestión sobre la cual se especula considerablemente más de lo que se sabe. La mayor parte de los datos enarbolados proviene de encuestas. Pero la interpretación de encuestas de opinión sobre temas valóricos o visiones de la vida porta siempre el riesgo de trocar la opinión de una persona con lo que efectivamente se piensa o se siente en términos de orientar comportamientos. En la sociedad

actual se produce una fuerte incongruencia entre lo que se afirma que se piensa y los comportamientos que se dan en la práctica, porque la velocidad de cambio en las formas de convivencia y en la subjetividad no va acompañada de esa misma velocidad en cuanto a las formulaciones verbales y estereotipos que la gente tiene en su mente. Así, se responde verbalmente mucho más a partir de esos estereotipos que a partir de lo que son las vivencias y conductas efectivas, de modo que no pueden extraerse conclusiones sobre determinados temas a partir de preguntas y respuestas simples. De ahí que se produzcan interpretaciones que desconocen la realidad de los comportamientos efectivos, así como distorsiones de los mismos datos para llegar a conclusiones basadas simplemente en intereses ideológicos particulares. Por ejemplo, respecto de la reciente Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark (con apoyo de El Mercurio y el Canal 13 de televisión) se desconoció que un 47.2% justificaba el aborto en ciertas circunstancias, o que el rechazo declarado a aventuras ocasionales en la pareja contrasta absolutamente con la generalización de esta conducta, o que la afirmación que el matrimonio es un compromiso para toda la vida es un dato obvio que hay que contrastar con la masificación de rupturas y de uniones temporales. Los resultados de dicha encuesta intentarán rebatir especialmente la idea que la familia en Chile “está en crisis” o viviendo un acelerado proceso de transformación⁶.

En general los estudios coinciden en destacar que los niveles de satisfacción en los distintos ámbitos revelan la muy desigual distribución de las oportunidades de felicidad entre los distintos sectores sociales. Es decir, no sólo las oportunidades y recursos materiales o educacionales, como ya se sabe, revelan una gran injusticia en la sociedad, sino que la felicidad, el afecto, la seguridad ratifican y agudizan la desigualdad. En términos fácticos, la estructura tradicional de familia –madre y padre casados, con hijos- ha ido acelerando su transformación. Si en 1989 se celebraron 104 mil matrimonios, en 2003 esta cifra cae a 58 mil y en 2005 a sólo 38 mil; aunque, según el Censo 2002, el 58% de los hogares aún está constituido por matrimonios. Mientras, según los censos, las convivencias suben de un 3.4% en 1982, a un 5.7% en 1992, y finalmente a un 8.9% en 2002, en condiciones en las que el porcentaje de hijos que nacen fuera del matrimonio crece de un 40% en los años ochenta a un 56% en los noventa. Todo ello de la mano de cambios importantes en los papeles sociales que desempeña la mujer. Por ejemplo, los hogares a cargo de una mujer pasan de un 25.3% en 1992 a un 31.5% en 2002, mientras que las mujeres que trabajan pasan, en este mismo lapso, de 28% a 37%. Como se indicó, aunque las magnitudes aún no indican proporciones todavía preponderantes, las tendencias son claras, así como el hecho que el arraigo de estas proporciones resulte mayor en los sectores medios.

⁶ Véase Larraín, Soledad, *Mujer, trabajo y familia: Desafío pendiente*, El Mercurio, domingo 5 de noviembre, 2006.

En términos valóricos, en los últimos 15 años se registra un sostenido aumento de la tolerancia hacia la homosexualidad, el divorcio, a la prostitución, al aborto, la eutanasia, entre otros valores seculares, aunque, pese a tal aumento, no alcanza los niveles de sociedades más liberales como las europeas (sobre todo de la Europa protestante) y algunos casos latinoamericanos. Las encuestas dicen, además, que aun quienes se definen a sí mismos como católicos hoy tienen posiciones frente al divorcio, al aborto, a la posibilidad de que los separados y vueltos a casar puedan comulgar, que se ordenen sacerdotes mujeres, sorprendentemente más liberales de lo que se pensaba.

Si de la encuesta UC-Adimark se desprende –indican sus realizadores– que Chile “aparece, por lejos, como uno de los países más religiosos del mundo”, por otra parte una encuesta de la consultora Mori, que integra el Estudio Mundial de Valores (aplicado en 80 países), indica que la sociedad chilena está siendo cada vez más materialista, liberal y secular, constituyendo con ello incluso una suerte de excepción en el marco latinoamericano. En particular revela que, en 16 años, las iglesias en Chile, en especial la católica, responden menos a las necesidades espirituales (81% en 1990 a 64% en 2006); a los problemas de la vida familiar (77% al 52%); a problemas morales y necesidades individuales (72% al 47%), y a los problemas de tipo social (70% al 43%).

En términos de los cambios en la familia el mismo estudio indica que si en 1990 el 15% de los chilenos pensaba que el matrimonio constituía un tipo de unión que era anticuada, en 2006 se eleva a un 27%. Del mismo modo, si en 1990 el 92% pensaba que un niño necesita un hogar con ambos padres, hoy cae a un 75%. Por último, precisa el mismo estudio, estos cambios ocurren principalmente en el seno de las clases con mejor bienestar económico, educacional, especialmente los jóvenes. Esto significa que los porcentajes correspondientes a los temas tratados aumentan considerablemente en el seno de las capas medias, resultando éstas particularmente expresivas de la transformación cultural en curso. Luego, es en estos sectores medios en donde se manifiestan con más fuerza las inestabilidades asociadas a los cambios que acarrea el proceso de modernización, haciendo más claras allí las incertidumbres que están en la base del malestar con dicho proceso.

Gran parte de los cambios apuntados conducen a un aumento en la demanda de funciones que se espera cumpla la educación, vinculando así el malestar con el estado que muestra ésta última, a complejos problemas del llamado cambio cultural. De ahí que la educación reciba una presión social cada vez mayor para que ejerza una labor formativa, una función moral, porque a la escuela se le exige que compense la declinación que vienen experimentando las familias, las iglesias, además de los partidos políticos y el mismo Estado como instituciones moralizadoras.

LA DEMANDA DE CERTIDUMBRE

Los dilemas anotados remiten, en definitiva, a los grados de seguridad y certeza existentes en la población, o bien a sus déficit y, como tal a la incertidumbre. Se trata de una inseguridad socioeconómica y psicosocial. En parte se explica por el carácter y la orientación que asumen las transformaciones económicas e institucionales de las últimas décadas, y se manifiestan en lo que el PNUD apuntó como la existencia de una sociabilidad y comunicación deficitaria en la sociedad chilena⁷. Tiene que ver con la relevancia que alcanzan los sentimientos de pérdida de protección social ante la dirección que asume, por ejemplo, la transformación de los sistemas de salud y previsual, así como con las dificultades que se surgen en torno a la realización de oportunidades, y la forma en que éstas se expresan en ámbitos como la educación, el trabajo y el consumo. De ahí la impresión de que la seguridad humana resulta deficitaria en un Chile en pleno y acelerado proceso de modernización.

Los mecanismos de seguridad han de ofrecer protección básica contra las amenazas y permitir la realización de las oportunidades ofrecidas. En términos de la educación, en la medida en que juega un papel importante en la determinación de la condición social de las personas, siempre ha sido apreciada como canal de movilidad social. Tal vinculación entre nivel educacional y nivel socioeconómico la confirman análisis recientes. La educación representa simultáneamente la forma fundamental de socialización (junto con la familia) para integrar a todo individuo a la vida social. Es a través de la educación escolar que las personas aprenden a compartir cierta tradición cultural, particularmente el lenguaje y la historia nacional, cierta interpretación del mundo actual y expectativas similares de futuro, en fin, a compartir un “sentido común” y, por tanto, a desarrollar un sentimiento de arraigo y pertenencia.

En las últimas décadas se ha ampliado sostenidamente la cobertura del sistema educativo, pero ello no da cuenta del acceso muy desigual al sistema educativo. Ya en el momento de ingresar a la escuela, punto de partida y condicionante de la biografía posterior, no existe una igualdad de oportunidades. La desigualdad inicial se prolonga y refuerza en la medida en que aumenta el nivel educacional. Por otro lado, la desigualdad de oportunidades se refleja en la calidad del sistema educativo. Las mediciones que evalúan el rendimiento escolar muestran una marcada correlación entre nivel socioeconómico y rendimiento escolar. En fin, el sistema educacional no ofrece una igualdad de oportunidades.

Por otra parte, el trabajo ocupa un lugar fundamental en la sociedad chilena en cuanto condiciona no sólo el bienestar material sino igualmente el bienestar síquico y el universo cultural de la gente. Esa preponderancia radica en la importancia que tiene el trabajo productivo en la reproducción material de la sociedad y para el bienestar de las personas. Tener un empleo estable con ingresos adecuados permite

⁷ PNUD, *op. cit.*

a los individuos valerse por sí solos. De ahí el papel primordial del trabajo para el bienestar psicosocial: influye en las posibilidades de autoestima, de autorrealización individual y, en general, condiciona las relaciones de confianza y sociabilidad que puedan desarrollar las personas. Es decir, el empleo procura no sólo ingresos sino también vínculos sociales. Más allá de su importancia económica el trabajo tiene, así, una enorme importancia en la configuración de la identidad colectiva, de los sentimientos de pertenencia y de participación de los individuos, en fin, de su integración en la vida social. Por eso el reconocimiento social del trabajo no se agota en la remuneración: atañe a la forma en que se organiza la sociedad.

Mientras que las oportunidades de empleo aumentan con el crecimiento económico, tal incremento no ha sido igual para los diversos sectores de la sociedad. Los grupos con menor capital social y cultural tienen también menores oportunidades de insertarse en un proceso de modernización que se apoya cada vez más en el conocimiento y la información. La mayor demanda de empleos calificados en una “sociedad de conocimiento” sugiere que la flexibilidad del empleo seguirá aumentando en el futuro, incrementando las oportunidades y los riesgos. En tal caso, el problema prioritario consistirá en la adaptación de las personas a una fuerte rotación del empleo.

En términos de ingresos, en los años noventa no sólo se recuperan los niveles anteriores, sino que tiene lugar una mejoría de los ingresos en todos los sectores sociales. Pero se mantienen grandes diferencias; en rigor se ahondan. Aparecen nuevos empleos que permiten un aumento de los ingresos, pero éstos quedan rezagados en relación con el crecimiento de los ingresos del país en su conjunto. La percepción de la distancia que separa los ingresos propios de los de otros sectores y la comparación de la situación propia con el crecimiento económico sostenido del país acentúan el sentimiento de injusticia de amplios grupos sociales. Ello remite a los problemas de ascenso social que son, tradicionalmente, un motivo de preocupación de los chilenos. La mayor flexibilidad del mercado laboral se acompaña de una mayor segmentación entre las categorías sociales. La movilidad resulta más bien horizontal (dentro de una misma categoría) que ascendente. Por otra parte, hay una importante disconformidad con los ingresos. A pesar de que todos los grupos sociales han visto un incremento de sus ingresos, la mayoría los considera insuficientes para solventar sus necesidades, especialmente de salud y previsión de vejez.

Dada la alta relación entre ingreso y educación, ello ha impregnado el sentido común, dando lugar a una creciente valoración de la educación y de la capacitación. De ahí que el malestar con la educación resulte también un malestar con la movilidad y la falta de equidad. En cambio, en el caso de los empresarios y ejecutivos, los ingresos parecen depender menos de la educación que de la experiencia y de otros factores como el acceso a activos fijos. En definitiva, los ingresos ya no se refieren a una escala institucional de remuneraciones y tienden a depender mucho más de la inserción en redes; dos personas con similar formación pueden tener muy distintos ingresos según su “valor” circunstancial en determinada coyuntura (ello denota una

pérdida de predictibilidad y, como tal, una fuente de inseguridad). En tales contextos, los ingresos suelen ser más altos, pero también más inestables. Es decir, la posición laboral y los ingresos devienen situaciones aleatorias que frecuentemente dependen más de factores externos que de méritos propios.

El impacto de éstas y otras transformaciones es potenciado por la celeridad de los cambios. Modernizaciones que en Europa maduraron a lo largo de décadas, generalmente amortiguadas por un tejido social sedimentado, se realizan en Chile en pocos años. La velocidad de las transformaciones exige procesos igualmente acelerados de aprendizaje y acomodo para aprovechar las nuevas oportunidades. La celeridad de los cambios, por otra parte, vuelve más difícil distinguir entre oportunidades sólidas y espurias. Todo ello en un contexto en el cual los mecanismos institucionales para la seguridad laboral tienen una efectividad restringida.

En suma, la rápida reorganización y tecnificación del trabajo aumenta las oportunidades y los riesgos. En el futuro, el mercado laboral seguramente estará marcado por una fuerte rotación. Habrá más oportunidades de empleo, particularmente para personas calificadas, pero el empleo será más inestable. El problema prioritario ya no es la estabilidad del empleo actual, sino el permanente proceso de reinsertión en un mercado extraordinariamente móvil. El futuro aparece pues como algo incierto en un aspecto tan vital como lo representa el trabajo. Aun cuando tal dinámica no provoque necesariamente desempleo, suscita incertidumbre.

En este sentido, cabe interrogarse por el significado político que puedan tener los sentimientos de inseguridad, desamparo y desencanto que se aprecian en la sociedad. Ello apunta a los requerimientos que pesan sobre la democracia chilena; requerimientos culturales propiamente tales, pero capaces de afectar al propio sistema político. Tales requerimientos culturales actúan como un malestar con la política, en la medida en que, en la actualidad, los anhelos no encuentran un marco interpretativo, y por lo tanto, tras las crisis ideológicas recientes, se produce la ausencia de todo proyecto. Con ello, aunque fértil para el problema del orden, el sentimiento que subyace a la democracia actual es de desencanto. Mientras, la política, y el análisis de ésta, se centra en la dinámica institucional, la estrategia de los actores y los condicionamientos económicos sin considerar debidamente la experiencia diaria de la gente, sus miedos y sus deseos.

En la medida en que las organizaciones políticas, cada vez más especializadas (burocratizadas) y escindidas del quehacer diario de la gente común, ya no crean ni aseguran las identidades colectivas, éstas tienden a recomponerse al margen e incluso en oposición a las instituciones. Pero también decaen aquellos ámbitos de sociabilidad informal (como el barrio, el club de fútbol o la universidad) en que se compartían emociones y sueños, que se constituían referentes colectivos. Ello lleva a una escisión entre el ámbito cotidiano y la sociedad general. Una oposición entre “comunidad” (entendida en su connotación positiva de convivencia armónica, no destruida por la modernización) y la “sociedad” orientada por la racionalidad formal. El aspecto

más relevante de la vida cotidiana se vuelve, entonces, la búsqueda de las certezas más básicas. Esta escisión entre lo cotidiano/comunidad y política/sociedad está en el origen de la pérdida de seguridad que experimentan hoy los individuos.

La otra cara de la certidumbre es la inseguridad, y esta está asociada al miedo. En la alta visibilidad otorgada a la criminalidad (por sectores políticos, gobierno, medios de comunicación, etc.) hay un intento de objetivar el horror, proyectándolo para obtener aceptación del orden existente. Las encuestas oficiales son claras en establecer que, en Chile, las tasas de victimización resultan varias veces superiores a las de los países desarrollados y, en algunos delitos, aun más altas que las de países latinoamericanos, independientemente de que aumente o no la tasa real de delitos. Este año el asunto volvió a ser tema del espacio público. Los medios de comunicación mostraron profusamente el brutal asesinato Hans Pozo y la difícil vida que llevaba el joven. Del registro de la violencia desplegada principalmente en poblaciones populares a propósito del 11 de septiembre, se abrió una liviana disquisición acerca de los grupos anarquistas, o los neonazis criollos, discusión que se empalma con una serie de reportajes sobre los clanes que dominan en barrios populares de la capital. Historias de caciques locales, clanes y redes de narcotráfico servirán para agitar la inseguridad de la población, así como para relevar la ineffectividad de las políticas oficiales y reclamar mano dura.

Como un símbolo de estos ghettos incontrolables se erige el sepelio masivo del mítico "Indio Juan", con una inédita exhibición del poderío de las pandillas armadas. Termina así por llamar la atención la medida en que se reivindica la delincuencia en forma abierta, como una forma legítima de obtener bienes o alcanzar mejorías relativas en la condición económica que por otras formas, legales, resulta vedado para amplios sectores populares. La violencia delictiva se instala ya sin culpa como una suerte de remedo en contra de los grados de iniquidad y ausencia de oportunidades a que la sociedad chilena actual condena a amplias capas de su población.

La inseguridad está ahí, pero los medios de comunicación masiva y la iniciativa gubernamental se esmeran en reducirla a la cuestión de la delincuencia, ignorando otras dimensiones, como aquellas que apunta el PNUD en términos de una "sociabilidad deficitaria", de la desconfianza entre los individuos, de lo endeble que resultan las relaciones sociales a partir de la desarticulación de muchas de las viejas estructuras sociales y formas de comunidad. Así, tanta proyección de la criminalidad, ignora que la inseguridad ciudadana no se resuelve por la vía de acatar disposiciones tecnocráticas. Más allá de su trivialización, ésta remite a la falta de certeza acerca de las normas de convivencia social, y ello no puede ser abordado como un asunto meramente técnico-administrativo. Es cierto que se produce una demanda de orden, pero todo no se reduce a ello.

El miedo explícito a la delincuencia no es más que un modo de expresar otros miedos silenciados: miedo no sólo a la muerte y a la miseria, sino también a la vida sin sentido, despojada de raíces, desprovista de futuro. Ello en la medida en que la

diversidad social no logra ser asumida como pluralidad, sino que es vivida como desintegración cada vez más insoportable. De ahí la pérdida de certidumbre, vinculada al desplome de diversos referentes colectivos. A tal clima de incertidumbre responde, entonces, tanto el autoritarismo como la democracia restringida, encarnando el deseo de orden frente a la amenaza del caos. Solicita la legitimación a cambio de procurar orden. El resultado es una sociedad vigilada.

La instrumentalización de los miedos es uno de los principales dispositivos de disciplinamiento social. Se trata de una estrategia de despolitización que no requiere medidas represivas, salvo para ejemplificar la ausencia de alternativas. Más allá de excesos que llevan a su instrumentalización prolongando rasgos autoritarios, la demanda de orden es indesmentible, y pesa sobre la estructuración de la nueva democracia chilena. Empero, no puede extremarse el campo de la racionalidad formal al punto de identificar la política racional con el cálculo de intereses (costos y beneficios); allí la mezcla de la tendencia a la secularización de la política y las herencias culturales autoritarias, se unen para precarizar la democracia. El punto es que el malestar con la política plantea el dilema de restablecer cuál es el campo de la política. En un contexto como el actual de vertiginosas mutaciones culturales, expresión de una crisis de identidad, ¿en qué medida contribuye esto entonces a generar una cultura política democrática? Al contrario, la crítica a la noción histórica de sujeto tiende a socavar las bases para repensar la política. Al identificar la lógica política con el mercado y el intercambio no puede plantearse el problema de identidad. Pero esta es una de las mayores tareas que enfrenta la cultura política democrática. De ahí la importancia de la cultura política: si no se logra desarrollar un nuevo horizonte de sentidos la institucionalidad democrática queda sin arraigo: una cáscara vacía. Es que, no hay que llegar al extremo del neoliberalismo, con su ofensiva ya no solamente contra la intervención estatal, sino contra la idea misma de la soberanía popular. Al cuestionar la construcción deliberada de la sociedad por sí misma no se cuestiona sólo a la democracia; se cuestiona toda la política moderna.

EL “CIERRE SOCIAL” DE LA ELITE Y EL MISTERIO ACERCA DE SU TALENTO

Pero la elite permanece ajena a estas preocupaciones y los dilemas de extensas franjas de la sociedad. A pesar de que el país no logra retomar la anhelada senda del crecimiento, las más grandes empresas gozaron este año de ganancias a tasas mucho más altas que la del crecimiento del país. Las elecciones en la Confederación de Producción y Comercio transcurren sin mayor novedad. Las disputas no pasan de ajustes internos que ratifican, sin sorpresa, el predominio de las líneas bancaria y minera dentro del empresariado. El cambio más relevante en los últimos años es la adopción de una línea pragmática, que lleva al empresariado a distanciarse de la figura de Pinochet y arribar a crecientes acuerdos con la Concertación, o más exactamente con su elite “transversal”. La apertura de los directorios de sus empresas

a un selecto grupo de tecnócratas y figuras políticas de esa elite concertacionista, se suma al trabajo conjunto que emprenden en esferas internacionales para viabilizar acuerdos y alianzas con capitales externos.

Más allá de los ruidos, en política tampoco producen mayor cambio. Presenciamos la consumación de la alianza de la elite concertacionista y el muy empresarial Centro de Estudios Públicos (CEP), una suerte de “dirección intelectual y moral de la sociedad”, para ponerlo en términos gramscianos, de cuyas oficinas han salido en los últimos años los diseños de gravitantes políticas públicas. La actual presidenta ha continuado el ritual de comentar y discutir en el poderoso centro con los grandes empresarios y sus técnicos cuanto plan de significación tiene el gobierno. Por otro lado, es precisamente el CEP, de la mano de Eliodoro Matte, quien jugó un papel central en la tarea de “educar a los empresarios para vivir en democracia”, o sea, en el entendimiento con la elite concertacionista. Se consolidan así, al punto del rito, tales encuentros y su eficacia para cimentar una estrecha vinculación –y hasta cierto tránsito– entre la elite política y económica del país⁸.

De otro lado –menos novedoso aun– se produce el retorno de los Larraínes a la cabeza de la derecha política, la misma que declara estar necesitada ¡de cambios!. Con tal objeto recurre a Hernán Larraín, la UDI, y a Carlos Larraín, RN, quienes ostentan tan conspicuo apellido que evoca nuestro pasado más rancio y oligárquico. Un ubicuo clan familiar desde hace tres siglos, que sobrevive a muchas fortunas, que precede a la organización misma del Estado-nación republicano, confirmando lo persistente que es esta familia. Desde la misma colonia hay Larraínes en todas las áreas de importancia: encomenderos, comerciantes, terratenientes, mayorazgos, poseedores de títulos y miembros de órdenes nobiliarias y militares, oidores, alcaldes, corregidores y sacerdotes. Un protagonismo que crece con la independencia, figurando como diputados, senadores, obispos, arzobispos, ministros y presidentes de la República, rectores de universidad, diplomáticos, junto a patrones de fundo, rentistas, comerciantes, directores de empresas y asociaciones gremiales, que atestiguan la importancia de llamarse Larraín.

Claro que no toda la elite resulta históricamente estática. A pesar de recomposiciones periódicas, la elite dirigente, por siglos, no varió en lo medular. Pero es cierto que esta situación colapsa con la reforma agraria de los años sesenta y setenta del siglo recién extinto, y el viejo patriciado señorial desaparece para siempre.

⁸ El Informe del PNUD de 2004 presenta un detallado mapa de los vínculos existentes entre las distintas elites –económicas, políticas, culturales, etc.– y el carácter cerrado que estos adoptan. Véase PNUD, *El poder: ¿para qué y para quién?*, Informe de Desarrollo Humano en Chile, Santiago, 2004, parte 5, “La elite chilena y la difícil conducción del desarrollo”. Allí se afirma que, entre las entidades que más propician el actual entramado de la elite chilena se encuentran –sin nombrar alguno en especial– los centros de investigación, confirmando su creciente funcionalidad para los objetivos de la elite, p. 200.

Se termina con la hacienda y el inquilinaje que antaño brindaban un aura de casta impenetrable, a menos que se aportara dinero, influencia política o solvencia profesional, los medios clásicos de ascenso del viejo Chile. Y resabios de esta antigua elite, claro, persisten. Apellidos rancios, “vinosos”, aún suenan, como acabamos de ver.

Pero ello no puede desconocer los cambios que en la última etapa experimenta la elite chilena. Cambian las formas de hacerse y hacer visible la riqueza. En razón de que ésta posee ahora un acentuado componente financiero, se vuelve exponencial. Si antes, bajo códigos estamentales estrictos que valoraban más los privilegios que la mera cuantía de dinero a su haber, se requerían dos o tres generaciones para ser aceptado, hoy se puede ser multimillonario en menos de una década. Pero hay otras diferencias, por ejemplo en las formas del prestigio social. En el pasado, ser conspicuo suponía ser conocido por todo el mundo, en cambio, la riqueza actual es más anónima. Es que el actual no se equipara en espíritu nacional (oligárquico, por supuesto) al viejo patriciado. La nueva elite no se ha destacado por su manejo de la “cosa pública”.

Para hacernos una idea de esta nueva realeza, se puede considerar que las fortunas sobre el millón de dólares —entre emergentes y consolidadas— abarcan hoy en Chile a unas 4 mil familias. De ellas, sólo 632 superan los 5 millones de dólares. Lo más relevante es que todos estos grupos han crecido aceleradamente en los últimos cinco años: los chilenos con 5 millones de dólares o más aumentan en un 65%, y los que superan el millón de dólares lo hacen en un 53%. Sólo el 0.09% de las familias chilenas —según un estudio del Boston Consulting Group— conforma la clase que puede acceder al superlujo. Las personas con alto patrimonio, en cambio, están en el 1% de la población con mayores ingresos, el que —según datos de la encuesta Casen— está conformado por 40 mil familias, aunque sus extremos resultan muy distantes el uno del otro. Una nueva casta que comenzó a surgir en los años noventa cuando el país alcanzó tasas de crecimiento del 7%. Muchas de ellas son riquezas que crecen en forma explosiva: mucho dinero en poco tiempo. El resto de los sectores de la sociedad también incrementó sus ingresos, pero en una medida mucho menor: un 20% salió de la pobreza oficialmente considerada, y los sectores medios aumentaron su ingreso promedio familiar —en términos reales de acuerdo al IPC 2003— de unos 510 mil pesos mensuales en 1990 a unos 710 mil en 2003. Es claro, pues, que no hay proporcionalidad entre dichas velocidades de aumento de los ingresos, o sea, en el modo en que se distribuyen los frutos del crecimiento económico.

Tan acentuado resulta el fenómeno que, comparaciones internacionales arrojan que pocos países en el mundo exhiben fortunas tan cambiantes como Chile. Los profundos cambios económicos, políticos y sociales que vive el país durante las últimas décadas han influido enormemente en los vaivenes de la riqueza y de quienes la detentan. Después de la reforma agraria, donde parte importante de la elite de ese entonces perdió su fuente de riqueza, surgieron después de 1973 nuevos grupos económicos, varios de los cuales colapsaron durante la recesión de los años ochenta.

Por ello, uno de los rasgos más llamativos de las actuales fortunas es la escasez de “plata vieja”. Pese a que los millonarios son una tribu que floreció en la última década y media, Chile no es un país que, proporcionalmente, tenga muchos. Su signo es el de la extrema concentración del ingreso: Brasil y Chile son los países de la región donde más a crecido el número de millonarios en los últimos cinco años. Sólo entre 2004 y 2005 aumentó en un 20% el monto de la riqueza que administran los chilenos que tienen más de un millón de dólares.

De ahí que un corte de 10% de la población de mayores ingresos resulte aún demasiado grueso para perfilar a este sector. Una familia chilena en la que el marido gana 800 mil pesos y la esposa 400 mil y tiene al menos un hijo, se ubica inmediatamente en el 10% de mayores ingresos. Cohabita en dicho decil con los millonarios antes anotados, y hasta fortunas que superan los mil millones de dólares. Tal disparidad revela la alta heterogeneidad de ingresos que convive en el 10% más alto de la pirámide social chilena. En el 90% restante, según la encuesta Casen 2003, se congregan desde la pobreza extrema hasta sectores medios bajos. La verdadera riqueza en Chile está asentada en el 1% de la población, aunque éste también resulta aún relativamente heterogéneo. El ingreso a este corte de población se establece en torno a un ingreso familiar de 5.4 millones de pesos mensuales, el que si bien garantiza cierta holgura, no convierte necesariamente a sus integrantes en millonarios. Al comparar las cifras promedio actuales de este sector con las de 1990, se tiene que aumentó sus ingresos desde 6.6 millones a 10.2 millones mensuales. La conclusión relevante apunta a que este 1% de los chilenos ha aumentado su participación en los ingresos totales del país en los últimos años: si en 1990 se llevaba el 16.2% de los ingresos totales, en 2003 se empina por sobre el 19% de la torta nacional.

Como se sabe, la explosión de la tenencia de bienes en Chile ha sido sostenida y generalizada. Precisamente, uno de los mayores cambios de la sociedad chilena es que la tenencia de bienes dejó de ser un buen indicador para diferenciar a los grupos sociales. El consumo se ha expandido socialmente, con lo que muchos bienes perdieron su etiqueta de exclusividad. Coinciden en ello varias razones: el aumento del ingreso de los sectores medios, el ingreso de la mujer al mundo laboral y la masificación del crédito, entre otras. No obstante, la elite mantiene sus propios códigos de estatus que le permiten diferenciarse. Aunque la adquisición de bienes en los mercados de alto lujo podría ser la muestra más evidente de ello, según quienes estudian estas pautas, se mantienen ciertas constantes históricas, como el número de personas que trabajan alrededor de las tareas familiares y el lugar donde se estudia, se vive o se veranea. Es que, cuando el consumo se masifica, los grupos con más poder adquisitivo tratan de escaparse: si la educación superior se ha extendido, ahora lo que cuenta son los posgrados en las universidades más cotizadas en el extranjero.

Claro que, los criterios de admisión en las universidades locales preferidas por estas elites no necesitan idear favoritismos para privilegiar a los más ricos. Una persona que estudió en un colegio público y cuyo padre no es profesional parte con 200

puntos menos en la PSU. Por eso, gracias a la segmentación que establece el propio sistema de educación, la elite cuenta con una cómoda ventaja, al igual que antes, cuando mandaba la herencia o la familia. El problema está –como se vio este año– en que la falta de movilidad está resultando ser un dolor de cabeza para el gobierno. Los datos son claros en indicar que los ricos son cada vez más ricos, y si bien los pobres no aumentan, esas posibilidades “de surgir” que porta la promesa liberal no se cumplen. De ahí todo el movimiento a favor de la meritocracia –la cultura del mérito–, que contrasta con la aristocracia –la cultura de la cuna–. Un dilema que no tarda en apuntar a la educación como factor clave en la búsqueda de la mentada igualdad de oportunidades.

Pero, contrario a ello, existe toda una red de colegios privados que se encargan de encumbrar con efectividad –léase protección, aunque la palabra no sea del gusto de la ideología profesada– a los retoños de estas elites. Entre ellos, un lugar cimero lo ocupan los colegios del Opus Dei. Es ilustrativo de los mecanismos de constitución y cierre forjados por esta elite, ver cómo surge el fenómeno de los colegios de La Obra. Éstos, que son de gran calidad en términos de instrucción –Tabancura, Cordillera, Los Andes y Huelén–, se ubican habitualmente entre los primeros en los resultados Simce y PSU. Su universidad (de los Andes) es una de las más destacadas entre las privadas. De modo que no es extraño que por su calidad, tal como en los años cincuenta y sesenta ocurre con el Saint George’s, San Ignacio y Verbo Divino, las elites chilenas comenzaran a llevar a sus hijos a educarse en ellos y, décadas más tarde, sus ex alumnos atestaran las gerencias y los directorios de las más grandes empresas situadas en el país.

Las razones de esta influencia del Opus Dei en la elite se remontan a la crisis política de los años sesenta, en la cual la iglesia católica jugó un papel muy particular. Desde el siglo XIX, la iglesia y buena parte de la elite operaban unidas desde el Partido Conservador. Juntas resistieron las leyes laicas, la educación estatal, la separación del Estado y la iglesia, el matrimonio civil, los cementerios laicos y tantas otras reyertas del Chile decimonónico. Y luego resistieron a los gobernantes liberales y los radicales. Fue una iglesia sumamente conservadora hasta fines del Concilio vaticano II. Entonces, esa iglesia desentendida de las encíclicas sociales, de pronto devino una iglesia progresista: reforma agraria, educación no segregada, trabajo en las poblaciones, etc.

Buena parte de la elite chilena se sintió abandonada, juzgada y expropiada por los mismos que antes habían sido sus aliados: una iglesia a favor de los empresarios en su lucha contra los movimientos populares. Y este cambio se reflejó rápidamente en sus colegios tradicionales –como recoge la película Machuca– que pasaron a ser mixtos. De relativamente segregados a integrados por la fuerza. Y en que una parte importante de los curas se casaron o se volvieron hacia la izquierda. La evolución del Saint George’s es ilustrativa de esta crisis ideológica en el mundo elitario.

Entonces aparece un movimiento religioso que le ofrece a la elite empresarial todo lo que la nueva iglesia le quitaba: enseñanza de calidad, conservadora en lo valórico y neutra respecto a las luchas sociales. Admirador del trabajo bien hecho (el trabajo empresarial, por supuesto) y centrado en la vida sacramental y personal, más que en los “pecados sociales” y las culpas colectivas del sistema capitalista. Pero no sólo eso: la lucha por los derechos humanos de la iglesia chilena no fue acompañada por el Opus Dei. De modo que la elite que apoyó tan entusiastamente a la dictadura militar sintió que en este movimiento tenía mucha acogida y muy poca crítica. No había contradicción –ni leve– entre ser empresario y ser católico. Entre perseguir a la izquierda y la religiosidad. Entre querer ser rico y exitoso en los negocios y ser católico ejemplar. Tampoco entre, bajar costos, despedir empleados y comulgar todos los domingos. El dilema entre el nuevo catolicismo social y la vida empresarial quedaba así obsoleto.

Es que, entre todos los movimientos religiosos neoconservadores que llegan o surgen en Chile, el Opus Dei ganó la cima a las claras. Fue el primero en ofrecer sus servicios, con su efectivo modo de asumir el catolicismo para superar la crisis ideológica de las elites. Por eso goza del liderazgo en la elite nacional. Al tener personajes gravitantes en sus filas, muchos jóvenes vinculados a sus redes pueden ascender más rápido en sus vidas.

Cierta línea de la sociología, abocada a los aspectos relativos a la acción colectiva como factores explicativos de las divisiones en clases sociales, más que a factores como la propiedad sobre los medios de producción, comprende este proceso bajo la noción de cierre social. Como tal, la aplica a aquellos tipos de acción a los que recurren los grupos sociales para asegurarse los máximos beneficios posibles, limitando a otros el acceso a los recursos y oportunidades⁹. Ello considera la necesidad de designar ciertos atributos sociales o físicos como bases justificativas de tal exclusión, con la finalidad de monopolizar determinadas oportunidades, normalmente económicas. Su intención es siempre cerrar el acceso a oportunidades sociales y económicas. Las prácticas antes anotadas de la elite en Chile se corresponden con ello, contraviniendo las promesas que establece el discurso liberal divulgado. La monopolización no sólo las oportunidades sino del prestigio social como tal resulta indicativa de ello. Por esto, no ha de extrañar que la elite chilena resulte hoy es menos permeable y se defiende para que no entre más gente al grupo. Que se casen entre ellos y privilegien sus relaciones. Que se proteja a sí misma. Sus miembros se identifican y hay un poderoso instinto de autoconservación.

Empero, a instancias de esa misma elite, se divulgan las promesas liberales acerca de que los bienes escasos, como el poder, el prestigio o la propiedad, deben

⁹ Véase Parkin, Frank, *Orden político y desigualdades de clase. Estratificación social de las sociedades capitalista y comunista*, Editorial Debate, Madrid, 1978.

distribuirse al compás del desempeño y del talento de los ciudadanos y no en base a características adscritas, como el origen familiar. Por eso, desde hace casi dos siglos, la escuela tiene un lugar preponderante entre las instituciones sociales. En la llamada modernidad la escuela y el ideal liberal van de la mano. A la mezcla de ambas cosas –igualdad de derechos y distribución de recursos en base al desempeño– se le denomina meritocracia. Un tipo de sociedad en la que los recursos se distribuyen según los logros obtenidos por cada uno de sus miembros. Pero la nuestra no parece una sociedad meritocrática. Y por eso el talento de nuestras elites, y sus abundantes virtudes, son un misterio. En vez de distribuir recursos escasos en base al mérito o al desempeño, se hace en base a cualidades adscritas como la cuna, las confianzas tejidas en los colegios, las redes familiares, el ascenso matrimonial, las similitudes construidas a la salida de la misa dominical, las adscripciones religiosas. Intervienen muchos criterios para distribuir bienes escasos y para decidir quién está por arriba y quién por debajo en la escala del prestigio y del poder. Pero el mérito – el desempeño sobre la base de la igualdad inicial- no se usa casi nada. Así, la voluntad y el esfuerzo personal se hacen irrelevantes.

Contrario a lo que reza la teoría de la justicia que subyace a estos ideales liberales, tenemos una educación que no es para nada igualitaria (nadie discute que los resultados del aprendizaje se distribuyen según el ingreso familiar). Por eso ocurre que tenemos una elite cuya inteligencia es un misterio (puesto que nunca ha sido puesta a prueba) y cuyas virtudes morales (fuera de su entusiasta participación en los ritos dominicales) nunca se ejercitaron del todo cuando el horror inundó al país.

De todo esto se desprende que, en definitiva, dados los ensimismados aires que capean sobre las elites, no aparece una voluntad de cambio con la cual afrontar los malestares que este año se han hecho presentes. Nuestra elite está en otra.

¿MÁS INERCIA TECNOCRÁTICA FRENTE A LOS CONFLICTOS SOCIALES?

Pero aún pese al ensimismamiento de las elites, la actual es una etapa compelida de introducir transformaciones en la política, y no seguir bajo una inercia tecnocrática que evade los dilemas que han ido apareciendo. Es que la protesta estudiantil fue un golpe mayor no sólo al gobierno, sino también al sistema político. Las simpatías que despertó en el país dan cuenta de grandes falencias que están más allá del sistema educacional. Los parlamentarios se mostraron perplejos de la capacidad de los dirigentes escolares y varios se dejaron llevar por el oportunismo. Los jóvenes echaron al suelo la imagen de una juventud indiferente y apolítica. Han devuelto la política al frente de la democracia, postergada por el tecnocratismo y el sesgo conservador de éste.

La protesta estudiantil tensiona a la Concertación pues se confrontan dos maneras de entender la acción del gobierno: una mirada “técnica”, con un recetario de *policies*,

posible de ser compartida por “expertos” de distintos bandos políticos. O una mirada política, en torno a un objetivo superior, capaz de distinguir a la Concertación de la derecha. La mirada técnica desconoce los conflictos de intereses que hay en la sociedad, mientras que la mirada política los reconoce y los busca regular por consenso o por la norma de la mayoría.

La discusión pública, cuando no resultó secuestrada por la movilización estudiantil, se centró buena parte del año en temas como qué hacer con los excedentes del cobre, si ahorrar, gastar, hasta prestar a otros países. Súbitamente se proyectó una imagen de ricos, de atesorar mucho más de lo que se pensaba, con lo que, supuestamente, las discusiones basadas en la idea de la escasez perdieron valor. Los medios de comunicación insistieron en que, a partir de ello, se desata una suerte de avalancha peticionista en torno a tal abundancia en las arcas fiscales. Donde ésta resulta claramente visible es en el sector de los trabajadores públicos, uno de los grupos de interés organizado, a diferencia de otros sectores de la sociedad. Aunque también ocurre en el sector privado, como la sonada huelga de los mineros de la mayor empresa privada del rubro cuprífero, Minera Escondida, que termina con desembolsos cuyos montos en bonos de término de conflicto encandilaron al resto de los trabajadores chilenos. Los gremios de trabajadores estatales presionaron duramente al gobierno. El Colegio de Profesores recurrió a paros, negociaciones y articulaciones con los jóvenes secundarios movilizados. A ello se sumaron los trabajadores fiscales de la ANEF, así como los gremios de los trabajadores de la salud, llegando la Confenats a sostener la protesta más dura y prolongada. Pero el gobierno no se apartó de su inercia tecnocrática.

Valga recordar aquí su origen. Este se remonta a la concepción que, cuando todavía no se apagaban los incendios del 11 de septiembre de 1973, Miguel Kast y otros cuadros de una nueva derecha entonces por surgir, impulsaron de manera resuelta al alero de un Pinochet que también afiataba aceleradamente su control sobre diversas esferas estatales y de las fuerzas armadas. Por aquél entonces se pensó en revertir la lógica mesocrática que había animado al gasto social por décadas de desarrollismo. Como se sabe, este último modelo privilegió a los sectores obreros y de burócratas públicos en detrimento de los más excluidos de la ciudad y el campo. Ahora, para Kast, despuntaba la oportunidad de girar en contra de ese patrón distributivo de carácter mesocrático, e impulsar una suerte de “pinochetismo popular” a partir de una concepción de gasto social focalizado en algunos de los sectores realmente más pobres.

Lo impresionante de esto no está en esa historia, que como tal tenía un objetivo político claro, sino en que dicha lógica de la gestión estatal se haya mantenido por más de tres lustros bajo los gobiernos de la Concertación. Tal ha sido el espíritu que ha regido sus políticas sociales, enmarcadas por la regla de fuego del monetarismo, que exige equilibrio fiscal a cualquier costo. Como tal, esta orientación determina el

sentido en que se reestructura la burocracia pública, la racionalidad que sostiene a la gestión pública y con ello, a los patrones de formación que siguen universidades e institutos para entrenar a los cuadros burocráticos de relevo. La medida en que ello incorpora una racionalidad propia de la gestión de empresas, es sólo una muestra más del acentuado carácter tecnocrático de los grupos que hoy desempeñan labores de gobierno.

Pero no sólo de la lógica tecnocrática no se apartó el gobierno. Tampoco se despegó de la lógica de la escolaridad de las tareas férreamente acotadas y con fechas fatales de finiquito. Mantiene el discurso y la oferta programática con una impronta “apolítica”, “inconflictuada”, preferentemente técnica. Lo que en sí es contradictorio con los anuncios de “cambio de tiempos”. Si esa es la ambición, su implementación será conflictiva y requerirá de un gran protagonismo político. Pero sucede que el gobierno ha tenido dificultades para encontrar un eje de conducción.

Las autoridades tenían una evaluación que auguraba baja conflictividad política y social y bonanza económica, lo que les hacía prever un período calmo y apto para un gobierno “tareístico” y hacedor. Pero las cosas no han sido así. La demanda por un cambio de ciclo, y la fuente de conflictividades que de allí deriva, tiene su principal explicación y manifestación en la pérdida de legitimidad del “modelo chileno”. La sociedad hace rato que identifica el “modelo” de una manera más amplia que la que cubren sus lindes económicos. La ciudadanía no juzga al “modelo” sólo por sus méritos o deméritos económicos, sino por su capacidad para responder a demandas que incluyen mejorías y expectativas en diversos planos. La consecuencia que esto tiene para la política es trascendente, ya que ésta se sostuvo en los tres últimos lustros sobre los requerimientos que emanaban de la transición y los apoyos que emergían de la legitimación del “modelo”.

En la transición, la llamada gobernabilidad adquirió connotaciones excepcionales y subsumió otras dinámicas y lógicas intrínsecas de la política. Pero sin la transición como telón de fondo se entra a una etapa en donde la política tiende a “recuperar” su normalidad y dicha gobernabilidad pasa a ser una categoría que compite con otras. Si se comparte que la transición ya no es un cauce que grave y si se comparte que el “modelo” enfrenta una crisis de legitimidad, sería consecuente coincidir que la política chilena está en una situación que la impele hacia procesos reconstructivos de gran magnitud. El escenario en que estará inmerso el gobierno estará caracterizado por una gran movilidad social y política, fuente originaria de conflictos.

El desborde de las demandas de los distintos gremios y grupos de presión durante el 2006 tiene su origen en los déficit de representación que muestran el sistema político y el espacio público configurado por un puñado reducido de grupos. Movimientos sociales como el de los “pingüino”s constituyen algo más que una manifestación de una coyuntura económica. Han puesto de relieve un encierro de la política oficial, producto de los términos en que se constituye a partir de la transición, lo que le impide dar respuestas efectivas a las demandas sociales que no se ven

representadas por la institucionalidad existente. La enorme cantidad de intereses que se dejaron fuera en los términos pactados de transición a la democracia, hoy pugnan por reconfigurar un sistema político que no es capaz de absorber y resolver sus demandas.

La presidenta Bachelet, por ser mujer, fue presentada por el instinto de supervivencia de la elite concertacionista como la encarnación de una novedad naciente. Pero en verdad, y al contrario, Bachelet no ha representado hasta ahora una renovación del mundo oficialista. Hondos malestares de vastos sectores de la sociedad con el modelo de sociedad vigente seguirán clamando por un cambio de rumbo. Ante este panorama, ¿qué ofrecerá el gobierno? ¿Más inercia tecnocrática frente a los conflictos sociales? El país espera esa definición.

2006: Un año de desaceleración económica

HUGO FAZIO Y MAGALY PARADA

2006 fue un año de desaceleración económica, a pesar de las condiciones externas extraordinariamente favorables y el fuerte ingreso de divisas consecuencia de la cotización elevada del cobre. El momento más bajo se produjo en el tercer trimestre. El crecimiento del PIB en comparación con los mismos meses del año anterior, fue de sólo 2,9%, llevando así el incremento del producto en enero-septiembre a 4,2%, cifra marcadamente inferior a las previsiones para 2006 realizadas por el Banco Central (4,75% a 5,25%) y el ministerio de Hacienda (5,0%), efectuadas poco antes de darse a conocer estas cifras. La demanda interna también se frenó, aumentando en julio-septiembre en 3,9% en doce meses, con un crecimiento de la formación bruta de capital fijo (FBCF) de apenas 3,0%, muy similar al trimestre anterior. En 2005 la demanda interna se había expandido en 11,5% y en el primer semestre de 2006 en 8,2%.

Cuadro n°1
PIB, Demanda Interna y Formación Bruta de Capital Fijo: 2005-2006.
(Fuente: Banco Central. Variación porcentual real anual.)

Período	PIB	Demanda Interna	FBCF
2005, primer semestre	6,9	12,2	26,9
segundo semestre	5,8	10,8	23,1
2006, primer semestre	4,8	8,2	6,9
julio-septiembre	2,9	3,9	3,1

Las reiteradas formulaciones oficiales de que el menor crecimiento económico constituía una consecuencia de “hechos puntuales”, resultó, con estos antecedentes, más que nunca impresentable. “Me parece sorprendente -dijo en un seminario organizado por el Diario Financiero el economista de la Universidad de California Sebastián Edwards- que (...) las autoridades llamaran a no preocuparse (...) El

punto central -añadió- es el tema del dólar y la enfermedad holandesa, porque un dólar bajo y poco competitivo ha hecho que una serie de proyectos que son rentables en el largo plazo no sean emprendidos y, al contrario, sean postergados, lo cual ha reducido la inversión (...) y reducido por tanto la tasa de crecimiento” (CENDA, Base de Datos, 20/11/06¹). El ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, se declaró “perplejo” al conocer las cifras del tercer trimestre y declaró no disponer de un “diagnóstico claro” para explicárselo, lo cual es imprescindible si se quieren aplicar remedios para revertir la situación.

El vicepresidente del Banco Central, José De Gregorio -en un seminario organizado por la Sofofa, El Mercurio y la Universidad del Desarrollo-, debió constatar que la inversión productiva “se frenó fuertemente”, cifrando su incremento en todo 2006 en “cerca” de 3%. Al mismo tiempo, De Gregorio, ratificó la visión del Banco Central de la existencia de una tasa de política monetaria -la cobrada por sus préstamos a los bancos comerciales- expansiva, sin explicar por qué en estas condiciones se derrumbaba la inversión, la producción industrial y numerosos otros sectores. La rigidez de la política fiscal llevó a desestimar apresuradamente la propuesta efectuada, oportunamente por la Comisión Económica y Social de la DC, para incrementar el gasto público en el segundo semestre, usando en un cierto monto el fuerte superávit fiscal acumulado. De haberse actuado en la forma propuesta, a lo menos, se habría frenado el proceso de desaceleración. El esquematismo de la conducción fiscal fue absoluto.

En el cuarto trimestre, el cuadro deprimido continuó, aunque se recuperó en relación al muy bajo nivel de los meses precedentes. El Banco Central lo reconoció abiertamente en su reunión de política monetaria de noviembre, cuando resolvió mantener la tasa de interés en 5,25% nominal anual. “La actividad interna -constató- sigue mostrando un dinamismo reducido, por debajo del previsto y más allá de fenómenos puntuales en la industria y la minería” (17/11/06), reconociendo así lo equivocado de sus formulaciones anteriores. Habían dejado de ser válidos los argumentos dados sólo dos meses antes. Los hechos puntuales no pueden repetirse mes a mes. Sin embargo, no analizaron nuevamente las causas de fondo de la desaceleración.

En octubre el Indicador Mensual de Actividad Económica del Banco Mundial (Imacec) aumentó en doce meses un 5,3% llevando el incremento acumulado en el año a 4,3%, un punto por debajo del nivel estimado oficialmente como de “crecimiento de tendencia”. La brecha del producto -distancia entre el PIB y la capacidad potencial de producción del país- se amplía. “Hay -como señaló comentando estas cifras el economista de Cepal, Ricardo Ffrench-Davis- una insuficiencia de demanda. Hay que considerar -añadió- que llevamos diez meses con

¹ En adelante todas las fechas que no tengan fuente explícita harán referencia a información extraída de la Base de Datos de CENDA.

una demanda por producción nacional muy inferior a la capacidad productiva del país” (06/12/06).

El uso de políticas por el gobierno y el Banco Central para intentar detener el proceso descendente de la actividad económica fue muy pobre. Resultaba fundamental estimular la demanda interna, lo cual no se logra con un esquema fiscal cuyo objetivo prioritario es tener limitado el gasto público y generar elevados superávits presupuestarios, ni al no tener una acción efectiva para detener el proceso revaloratorio de la moneda nacional, que tiene en una situación muy aflictiva a vastos sectores económicos. El mecanismo presupuestario durante el año no fue anticíclico, al contrario, al limitarse el gasto público se transformó en uno de los responsables de la desaceleración económica. “Se debe considerar –manifestó Ricardo Ffrench-Davis, en un foro organizado por Estrategia- que la economía está funcionando como si el cobre estuviera a 99 centavos, mientras que (el Gobierno) dejó que el alza del precio del petróleo entrara directo, esto provocó un efecto como si los términos de intercambio hubieran caído” (11/12/06).

A su turno, el desempeño monetario del Banco Central, al apearse a su objetivo recurrente antiinflacionario, no fue capaz de modificar oportunamente su conducta teniendo en cuenta la desaceleración producida en la economía que se visualizaba claramente desde comienzos de año. Finalmente -como señaló el economista defe de Larraín Vial, Leonardo Sánchez- el Banco Central “tuvo que cambiar su discurso”. Le costó “asumir –agregó- que las tasas de interés no podían subir más, que la actividad estaba ajustándose y la inflación cayendo” (15/12/06).

El consumo, en cambio, se mantuvo por encima del producto, pero en un porcentaje creciente se orientó hacia la adquisición de productos importados aprovechando la revaluación y la reducción arancelaria, lo que limita su impacto en la producción nacional. Ello afecta, especialmente, a las medianas y pequeñas empresas que producen para el mercado interno al ser desplazados por bienes traídos desde el exterior. En julio-septiembre el Índice de Ventas de Bienes Durables, de la Cámara de Comercio de Santiago y la consultora GFK Chile, aumentó en 10,4% anual, pero en ello fue determinante como indica el estudio “la revaluación de la moneda local (que) genera un efecto deflacionario, puesto que, en su carácter de bienes transables, los precios de estos productos expresados en moneda local experimentaron una reducción” (17/11/06). La situación deprimida de las pymes es uno de los factores determinantes de la desaceleración económica.

El curso de la economía fue un nuevo factor en contra para enfrentar el drama del desempleo, que permanece muy alto desde la recesión de fines de los años noventa. Las nuevas series de empleo entregadas por el INE indican que por cada punto de crecimiento en el producto el empleo crece sólo en 0,67 punto porcentual, tasa inferior a la mostrada por la serie anterior, que entregaba como promedio para el lapso 1960-2004 una relación de 0,75.

La desaceleración se produjo en un contexto extraordinariamente favorable para el país, dada la tasa de crecimiento de la economía mundial, el alto precio del cobre y de otros recursos primarios exportados por Chile y el nivel de las tasas de interés externas. Sin embargo, estas circunstancias no se aprovecharon al tener una política económica extraordinariamente pasiva. En materia de precios externos se produjeron dos impactos principales por las alzas en las cotizaciones del petróleo (que se revirtió en la última parte del año) y en el cobre. Pero las consecuencias negativas del aumento en el precio del oro negro no se amortiguaron con medidas internas, mientras los efectos positivos a recibirse de la elevada cotización del cobre se frenaron al transformarse en superávit fiscal o envíos de utilidades de la minería privada al exterior.

Las proyecciones de la economía mundial son a la desaceleración. Ya en el tercer trimestre, el PIB de EE.UU. creció sólo, con relación a los mismos meses del año anterior, un 2,2%, fundamentalmente por el estallido de la “burbuja inmobiliaria”, amortiguada por el nivel récord alcanzado en el mercado bursátil. La inversión en viviendas descendió en el mismo lapso en 18%. También se debilitó la venta de automóviles.

La UE no reemplazará el papel de “locomotora” desempeñado por EE.UU. En 2006, las economías de la eurozona crecerán, de acuerdo al segundo informe semestral en el año de la Comisión Europea, en 2,6%, incrementando su nivel de actividad principalmente por la intensificación de la inversión empresarial y el aumento de las exportaciones. Sin embargo, la estimación para 2007 es que su ritmo de crecimiento caería a 2,1%, a causa de las políticas contractivas de ajuste fiscal puestas en prácticas en sus tres mayores economías -Alemania, Francia y Italia- en su empeño por cumplir con el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento que les obliga a limitar su déficit fiscal. Simultáneamente, el gobierno germano decidió elevar a partir del primero de enero el IVA en tres puntos porcentuales, lo cual reducirá bruscamente la renta disponible de grandes capas de la población. Al mismo tiempo, el Banco de Inglaterra sigue subiendo su tasa de interés temiendo que se produzca un alza de la inflación. Por ello, como señaló editorialmente el diario español El País, el crecimiento de la eurozona “no será suficiente para compensar” la desaceleración estadounidense “porque el impulso de las principales economías de Europa también perderá fuelle en los próximos trimestres” (11/11/06). La importancia de lo que acontezca en la UE es muy grande, ya que representa aproximadamente un 30% del PIB mundial, unos US\$14,2 billones, ligeramente superior al de EE.UU.

(En billones de dólares.)

	Monto		Monto
UE	14,2	Eurozona	10,4
EE.UU.	13,3	Japón	4,5

El Banco Mundial, en su Informe Anual sobre Perspectivas Económicas Globales, estima que el producto mundial corregido por paridad de poder de compra descendería desde el 5,1% estimado en 2006 a un 4,5% en 2007, con una reducción para Estados Unidos de 3,2% a 2,1%, la eurozona de 2,4% a 1,9% y Japón de 2,9% a 2,4%.

“Es claro –manifestó el economista norteamericano Barry Eichengreen- que EE.UU. se está desacelerando bastante y para que a la economía global no le pase lo mismo, otros países tienen que emerger. Muchos dicen que Europa y Japón pueden hacerlo, pero yo creo que tienen un margen muy limitado para eso, mientras que se está subestimando la severidad del enfriamiento de EE.UU. No predigo una recesión global, pero sí una desaceleración más severa y un aterrizaje más severo de lo que el consenso cree. Aún si vamos –concluyó- de un crecimiento de 2,5% a uno de 1% sería bastante para la economía global. Las importaciones de EE.UU. se enfriarían, los términos de intercambio de América Latina se debilitarían (...) América Latina tendría que generar su crecimiento en casa” (12/11/06).

De ser así, Chile no habría aprovechado el boom de las “vacas gordas” para fortalecer la economía nacional y la economía mundial dejaría de “tirar” a la chilena. Por tanto, lo determinante pasaría a ser lo que acontezca internamente. El optimismo oficial de una reversión del proceso de desaceleración descansa en el incremento a producirse en 2007 en el gasto público, de 8,9%, y su impacto en la demanda interna. Sin embargo, la contracción experimentada en el crecimiento de la inversión productiva restringe la capacidad de responder a los incrementos en el gasto, particularmente en aquellos sectores afectados por la apreciación del peso y el mayor costo de la energía. Si la mayor demanda es satisfecha crecientemente desde el exterior, las deformaciones estructurales de la economía chilena se seguirán profundizando. De otra parte, se mostrará aún con más nitidez la pobreza de la conducta macroeconómica tanto del gobierno como del Banco Central. En pocas palabras, Chile perdió un nuevo año de una coyuntura externa extraordinariamente favorable y no queda claro si será capaz de aprovecharla mientras persista.

¿QUIÉN RESPONDE POR NO APROVECHAR EL CONTEXTO EXTERNO?

El Consejo del Banco Central en su sesión de octubre, donde mantuvo la tasa de interés de instancia de política monetaria (TPM) por tercera vez consecutiva en 5,25% nominal en doce meses, comunicó que “por un tiempo prolongado podrían no ser necesarios nuevos incrementos en la TPM para mantener la inflación, proyectada en torno a 3% anual”. En noviembre, dejó de mencionar la posibilidad de futuros aumentos, comunicando en un lenguaje absolutamente vago que “cambios futuros en la TPM (...) dependerán de la nueva información que se acumule y sus implicancias sobre la inflación proyectada”². La tasa de interés del Banco Central

² Banco Central. “Boletín Mensual”, noviembre 2006.

por lo general se determina explícitamente en función de una sola variable, la inflación. “La decisión de suspender los incrementos de tasa se adoptó –manifestó en octubre su gerente de la División de Estudios, Rodrigo Valdés- porque hay menor presión inflacionaria y ésa es la parte fundamental que guía las decisiones de política monetaria (...)” (21/10/06).

El Banco Central definió durante casi todo 2006 su nivel de TPM como “expansiva” y, por tanto, ella debería haber impulsado la demanda interna aunque siempre su obsesión de fondo fue impedir a futuro presiones inflacionarias. “La política monetaria -afirmó taxativamente Valdés- fue bastante expansiva, y sigue siendo bastante expansiva”. Se dejó de lado la estrategia de alzas periódicas de tasas cuando la economía entró en un claro proceso de desaceleración, demostrando la prácticamente nula incidencia en la economía real de la orientación seguida. La actividad redujo su incremento, de acuerdo a estas formulaciones, con una tasa expansiva. La contradicción no fue explicada por las autoridades monetarias, salvo hablar durante algunos meses de que era originada por efectos puntuales.

En realidad, los principales beneficiarios de las tasas de política monetaria fueron los bancos comerciales que obtuvieron elevados niveles de rentabilidad aprovechando en su beneficio la TPM del Banco Central, dado que a sus clientes les cobra intereses muy superiores, salvo a los muy grandes que están en condiciones de endeudarse en el exterior y, en consecuencia, no quedan supeditados a sus tasas expoliatorias. La banca comercial en vez de contribuir al crecimiento económico se transformó así en un freno.

A octubre, la tasa de rentabilidad anualizada del sistema financiero alcanzó a 19,05%. De esta manera, el conjunto del sistema recupera en cinco años la inversión efectuada. La situación es todavía más favorable para aquellas instituciones que obtuvieron rentabilidades mayores. Es el caso de los bancos más grandes de la plaza y de aquellos orientados a los créditos a las personas, donde se producen rentabilidades más altas. El ranking de rentabilidad a octubre fue encabezado por el Banco Falabella, del grupo Solari, con un 33,92%. Lograron tasas también superiores al 30% los bancos Santander-Santiago y De Chile. Con estas rentabilidades se recupera la inversión efectuada en un lapso muy breve.

Cuadro n°3
Ranking de Rentabilidad después de Impuestos a Octubre 2006
(Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En % anualizado)

Banco	%	Controlado por:
Falabella	33,92	Grupo Solari
De Chile	31,38	Grupo Luksic
Santander-Santiago	30,38	Santander Central Hispano (España)
BCI	25,73	Grupo Yarur
BancoEstado (1)	24,15	Estado
París	22,24	Grupo Paulmann
Bice	19,75	Grupo Matte
Ripley	18,45	Grupo Calderón

(1) Tiene un régimen impositivo distinto a las demás instituciones.

Las consecuencias negativas de la elevada concentración del sistema bancario son tan grandes que el fiscal nacional económico, Enrique Vergara, la calificó durante el trimestre con razones como “uno de los principales problemas de la economía chilena”. Cuatro instituciones, tres de ellas privadas (Santander Santiago, Chile y BCI) y la otra estatal (BancoEstado), representaban a octubre un 66,21% de las colocaciones totales. Si a ellas se añade Corpbanca y el español BBVA se alcanza a un 80,27% de la suma global, es decir algo más de las cuatro quintos. En utilidades el nivel de concentración es aún superior. Las cuatro instituciones de mayores colocaciones ganaron a la misma fecha \$552.992 millones, teniendo el BancoEstado, como institución perteneciente al Estado, un régimen impositivo diferente. Si se suman nuevamente Corpbanca y el BBVA se llega a \$616.895 millones. Este proceso transcurre paralelamente a la disminución en el número de bancos que desde 1993 bajaron de 38 a 26.

Desde luego el desafío central no es sólo constatar el alto grado de concentración de la banca comercial sino revertirla. Por lo demás se trata de un tema que se repite en múltiples sectores de la economía. Este proceso de concentración se ha reforzado durante los gobiernos de la Concertación. Los niveles de regulación han sido absolutamente permisivos. De allí que resuelve importante la formulación del fiscal nacional económico, si se traduce en medidas efectivas para enfrentarlo. Sin embargo, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Gustavo Arriagada, se pronunció rápidamente en sentido contrario, manifestando –en oposición a las evidencias- que no ve riesgos “desde el punto de vista de cómo está operando el sistema en Chile” (25/10/06). Mientras tanto, el Banco Central guardó silencio.

Los hechos que obligaron al Banco Central a modificar su conducta de aumentar gradualmente las tasas de interés fueron muy fuertes, el crecimiento del producto efectivo se colocó marcadamente por debajo del de tendencia, creciendo los factores productivos no utilizados. El ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, señaló que en el menor crecimiento influyó “que el Banco Central se apuró un poco en el ritmo de alzas de tasas de interés durante el 2005. Su preocupación -añadió- es evitar que la inflación se desvíe de la meta en cualquier sentido. Pero, en la práctica le ponen más fuerza a evitar que se vaya para arriba. Durante el 2005, como representante del gobierno en el Consejo con derecho a voz -recalcó-, lo dije permanentemente”. Eyzaguirre, eso sí, no recordó que en la entrega de la dirección del Banco Central a Vittorio Corbo desempeñó un papel determinante. Tampoco tuvo presente su opinión de ese mismo año 2005 de que con Corbo “somos personas que tenemos una forma muy similar de mirar las cosas, yo he aprendido mucho de él”³. E igualmente no recordó que públicamente defendió reducir los objetivos del Banco Central exclusivamente a la inflación. “Sobre meterle (al Central) más objetivos

³ Véase, “Lagos: El presidente ‘progresista’ de la Concertación”.

-manifestó en julio pasado- es una buena intención con resultados malos en la práctica porque si le metes como objetivo el crecimiento, por ejemplo deberíamos darle otros instrumentos que son del gobierno y yo no sería partidaria de eso” (19/10/06).

Corbo defendió la política seguida por el Consejo que encabeza aunque expresó que no entraría “en polémica con economistas”, recalando que debe “protegerse” al Banco Central (20/10/06), en otras palabras su “autonomía” y la unilateralidad de su gestión. Por su parte, su vicepresidente José de Gregorio (DC) refutó las críticas de Eyzaguirre, reconociendo que el propósito de subir las tasas de interés fue antiinflacionario. “¿Si el banco no hubiera subido la tasa de interés -manifestó-, nuestra economía habría crecido más? No tengo la menor duda. ¿Tendríamos mayor inflación? No tengo la menor duda. ¿Y sería mucho más costoso bajarla después?. No tengo la menor duda. Por eso me siento bastante tranquilo de haber subido la tasa” (18/10/06). Desde fines del año pasado la mayoría del Consejo es de la Concertación, pero el presidente continúa siendo Corbo.

La irrelevancia de la política del instituto emisor es muy fuerte y aumentar la tasa de interés en un contexto de desaceleración habría sido extraordinariamente grave, ya que cuando la sube sí rápidamente la banca comercial reacciona en el mismo sentido. De igual modo, en el momento de someterla a frecuentes alzas no se tuvo presente que se encontraban actuando otros factores contractivos, como la revaluación del peso y la política fiscal, en los cuales sin duda Eyzaguirre -como la actual administración, continuadora en lo fundamental de la misma política- tiene directa responsabilidad.

En la reunión del Consejo de noviembre de acuerdo a la minuta que dio cuenta de lo tratado, se expresó el riesgo de que la inflación se ubicase bajo el rango meta (2% anual) por un lapso “bastante importante”, lo cual “podía requerir un mayor impulso monetario” (07/12/06). En otras palabras, se entró a considerar reducir las tasas de interés si no se producía el “cierre de holguras”, o se mantenía el crecimiento del producto por debajo de su nivel de tendencia. Se trata del mismo Consejo que no mucho tiempo antes procedía a subir las tasas de interés mes a mes, ante un potencial recalentamiento inflacionario que nunca se produjo.

En noviembre, el IPC en doce meses se colocó por segundo mes consecutivo en 2,1%, después de haber superado en los inicios de 2006 el techo de su rango de inflación (4%). La disminución de las tasas de inflación fue provocada por la desaceleración económica, la reducción en el precio del petróleo en los mercados internacionales y la revaluación. Velasco afirmó al conocer las cifras de crecimiento y el IPC, que “la economía puede crecer sin presiones inflacionarias” (06/12/06), cuando la realidad muestra que son los factores productivos no utilizados los que constituyen una de las causas del IPC bajo.

Cuadro n.º
IPC en doce meses durante 2006.
(Fuente: Banco Central. Variación porcentual.)

Mes	%	Mes	%	Mes	%
Agosto	3,8	Julio	3,8	Marzo	4,0
Septiembre	3,7	Agosto	3,8	Abril	3,8
Octubre	3,9	Septiembre	3,7	Mayo	4,1
Noviembre	2,1	Octubre	3,9	Junio	4,1
Diciembre	2,8	Noviembre	2,1	Julio	4,0

LA ECONOMÍA CHILENA ES ABIERTAMENTE ANTICOMPETITIVA

El Banco de Ajuste de Basilea, en su tercer informe trimestral de 2006, constató que actualmente aquellos países con un tipo de cambio competitivo son los de mayores crecimientos. El estudio destaca principalmente las experiencias de China, Corea, India, Malasia, Rusia, Taiwán y Argentina. Los tipos de cambio competitivos son aquellos que generan mejores condiciones para sus exportaciones y defienden la producción interna de importaciones sustitutivas. Se trata de experiencias radicalmente diferentes al manejo cambiario existente en Chile caracterizado por la no intervención del Banco Central y una actitud fiscal que se limita a constatar que de no existir la acumulación de elevados superávits presupuestarios, colocados en un alto porcentaje en activos financieros, en Chile y sobre todo en el exterior, la revaluación sería aún mayor y sus efectos negativos aún superiores. Esta forma de actuar —ha manifestado Andrés Velasco— es “coherente con los esfuerzos por sostener la competitividad de la economía” (24/11/06). Los hechos, sin embargo, evidencian que la economía chilena es cada vez menos competitiva. La conducción cambiaria no es en la actualidad competitiva y constituye una de las razones de la desaceleración económica.

La formulación ortodoxa dominante en el país destaca que de existir intervención en el mercado y tener un tipo de cambio competitivo, como sostienen amplios sectores nacionales, conduciría a un proceso inflacionario. La apreciación cambiaria, en las diferentes formas que puede adquirir, tiende a producir un efecto contractivo, como lo comprueba la experiencia chilena. En julio-septiembre de 2006, la tasa de crecimiento mundial la volvió a encabezar China con una expansión de 10,8% en relación a los mismos meses del año anterior, que tiene un tipo de cambio competitivo, fuertemente criticado por la Casa Blanca y la Comunidad Europea.

La intervención de un Banco Central en el mercado para revertir el proceso revaloratorio conduce a incrementar las reservas internacionales. “Semejante acumulación de reservas en los países emergentes tiene lugar desde hace varios años y, sorpresivamente —destaca el informe— sin mayores efectos adversos sobre la

inflación”(16/11/06). Siendo, por el contrario, causa principal de crecimiento en la producción y en las tasas de empleo.

Los mecanismos para enfrentar el peligro de incremento de los precios provocados por la intervención cambiaria al aumentar las reservas y crecer la cantidad de dinero son variados: esterilización de aquella masa monetaria que supera el incremento de las necesidades de dinero propios de una economía en crecimiento, normas para reducir la liquidez y los recursos prestables de los bancos o, como acontece en China, estableciendo límites al incremento del crédito.

Un ejemplo de crecimiento con un tipo de cambio competitivo lo proporciona Argentina que en enero-octubre registró un aumento de su producto, con relación a igual período del año anterior, de 8,4%. De esta manera completó 46 meses consecutivos de expansión económica, el cual se sostiene tanto en un crecimiento de la inversión pública como privada y en el incremento general del gasto fiscal, muy lejos de la actitud restrictiva tenido en este plano por los gobiernos de la Concertación. La ministra de Economía trasandina, Felisa Miceli, define el esquema económico seguido como “de dólar alto, competitividad e inclusión social” (17/11/06).

La conducción cambiaria en Chile ha sido totalmente diferente al permitirse una fuerte apreciación del peso. Las consecuencias negativas son muchas. Un ejemplo lo proporciona el Índice de Competitividad Frutícola, elaborado por la Asociación de Exportadores (Asoex), que refleja el comportamiento del margen operacional sectorial, al mostrar que “el indicador ha bajado de 141,5 puntos en el cuarto trimestre de 2000 a -7,8 puntos en el segundo trimestre de 2006. Esto significa que actualmente el sector frutícola -en promedio- se encuentra operando a pérdida, lo que se hace más evidente en los emprendimientos pequeños y medianos” (20/11/06).

El sector frutícola, que hasta 2003 crecía a tasas de dos dígitos, en 2006 se estima que aumentó en un escaso 1,9%. “La caída del dólar –subrayó Rodrigo Echeverría, presidente de Fedefruta- afecta la rentabilidad, hay muchos productores con pérdidas y endeudados” (26/11/06). Las exportaciones vitivinícolas cerraron el año con cifras de crecimiento entre 5% a 7%, muy lejos del 24% de incremento anotado en 2004. Al impacto cambiario negativo se agregó un sobrestock en el mundo que condujo a que el precio promedio por litro tuviese en 2006 un incremento de sólo 0,4%.

La revaluación, al mismo tiempo, golpea a sectores agrícolas que compiten con importaciones. Desde comienzos de la década la superficie plantada con trigo se redujo desde 414.000 a 284.000 hectáreas. El trigo significa en superficie un 41% de los cultivos anuales. Enfrentan también dificultades los 16.000 productores de leche, luego de dos años de crecimiento, por la caída de la paridad cambiaria, el alza de las adquisiciones principalmente provenientes desde Argentina y la reducción de los precios impuestos por los consorcios controladores de las plantas.

Los grandes afectados por el ingreso de producción sustitutiva a la nacional, son las medianas y pequeñas empresas. Las medidas adoptadas durante el primer año

de gobierno de Michelle Bachelet fueron, en este plano, extraordinariamente pobres. En diciembre, el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, anunció el plan “Chile Te Acompaña”, dado a conocer conjuntamente con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Hernán Sonmerville. Su iniciativa más “emblemática” en la expresión ministerial fue la determinación de que unos mil ejecutivos de grandes empresas y 4.000 estudiantes universitarios asesoren a un millar de empresas pequeñas y medianas, constituyendo –como expresó Estrategia- “una clara señal de que el ministro de Economía no entiende cuál es el problema que afecta a las Pymes. Y todo para concluir que la gran mayoría (de las Pymes) tiene un diagnóstico claro de lo que sucede y se llama: alto endeudamiento y bajo capital de trabajo. Por los demás –concluyó la publicación-, un total de 1.000 compañías es un universo bastante mezquino si se considera que hay casi 300.000 con problemas” (11/12/06).

Para alcanzar un tipo de cambio competitivo debe producirse, cuando hay fuerte ingreso de divisas por cualquier concepto, una acción activa del Estado, lo cual se encuentra en contradicción con el esquema de política económica seguido en Chile que tiene como uno de sus fundamentos, precisamente, la reducción al máximo posible de su papel y suponer que el mercado restablecerá por sí sólo los equilibrios.

Con posterioridad a la Gran Depresión se impuso en la Reserva Federal una política que busca combinar los objetivos de crecimiento económico, baja inflación y empleo alto. A diferencia del Banco Central chileno que concentra su acción – como ya se dijo- exclusivamente en objetivos antiinflacionarios. El 20 de noviembre en una reunión efectuada por el directorio del Banco de Basilea, de acuerdo a lo manifestado por el presidente del Banco Central de Argentina, Martín Redrado, el presidente de la FED Ben Bernanke expresó que “las tasas de interés en los EE.UU. van a tender a bajar en los próximos meses”, ya que agregó al encontrarse los precios “bajo control, ahora vamos a evitar que se desacelere la producción (24/11/06). Una formulación de esta naturaleza es impensable la realice Vittorio Corbo, por la unilateralidad extrema con que actúa el Banco Central de Chile. Bernake, llamó la atención *The Guardian*, “admira” el legado de Friedman, pero su política es “proactiva”. “Hay una razón simple para que actúen así: probaron el monetarismo y no funcionó (...)” (26/11/06).

Otra formulación en la línea de esquemas marcadamente ortodoxos fue abrir totalmente el país al movimiento de capitales, suponiéndose que ello potenciaría la economía nacional. “La integración financiera –expresó Vittorio Corbo en su discurso de inauguración de la Décima Conferencia Anual del Banco Central de Chile- tiene el potencial de acelerar el crecimiento económico permitiendo que el ahorro de otros países financie proyectos de inversión rentables en Chile que de otra manera no se realizaría. Recordemos –añadió- que el déficit en cuenta corriente no es más que la brecha entre inversión y ahorro nacional”. El presidente del Banco Central no explicó por qué el país tiene actualmente superávit en cuenta corriente, lo cual significa

que el ahorro nacional se está utilizando fuera de Chile. En enero-septiembre el desahorro alcanzó un 4,5% del PIB.

Trimestre	%	Trimestre	%
2005, enero marzo	-1,9	2006, enero-marzo	-4,5
abril-junio	-1,6	abril-junio	-5,5
julio-septiembre	2,0	julio-septiembre	-3,6
octubre-diciembre	-1,0		

¡DEBEN GRAVARSE LAS UTILIDADES EXCESIVAS DE LOS CONSORCIOS PRIVADOS CUPRÍFEROS!

La derrota de Bush en las elecciones legislativas efectuadas en EE.UU. el siete de noviembre puso en el tapete de la discusión al interior de Partido Demócrata numerosas demandas que modifican la extraordinariamente regresiva política seguida desde que fue elegido presidente -en una oscura elección- hace seis años. Entre los planteamientos realizados está establecer mayores gravámenes a las compañías petrolíferas que en los años de alto precio del oro negro han obtenido utilidades récord. Desde luego esta exigencia es absolutamente legítima en todos los países en donde empresas privadas han registrado ganancias extraordinarias por las altas cotizaciones de la generalidad de los commodities.

Es el caso de Chile en el sector cuprífero, donde con el aumento en la cotización en los mercados internacionales y, por tanto, con la expansión de las utilidades de las empresas privadas, se produjo un fuerte incremento de remesas al exterior. Un principio fundamental utilizado en la nacionalización del cobre durante el gobierno de Salvador Allende fue recuperar para el país las rentas excesivas obtenidas por las transnacionales norteamericanas antes de ese paso trascendental. En la actualidad, sólo se limita el gobierno a contabilizar los montos extraídos del país. No existe una política de defensa de los intereses nacionales como se manifiesta, en la actualidad, en varios países de la región. Esta sangría muestra a uno de los grandes beneficiarios de la fase de las “vacas gordas”, si se usa la expresión empleada por el ex ministro Nicolás Eyzaguirre.

En América del Sur en un núcleo de países se ha procedido en forma muy diferente, aumentando la presencia nacional en la explotación de sus recursos básicos. En Bolivia, al cumplirse el plazo de seis meses dado por el Gobierno, las empresas extranjeras presentes en el área de hidrocarburos aceptaron los incrementos de los

impuestos que fluctuarán en adelante entre el 50% y el 82%. El acuerdo entrega al Estado, al mismo tiempo, el control del proceso de comercialización. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que agrupa a los inversionistas extranjeros, subrayó la “relación positiva y duradera entre socios -las compañías y el Estado-” establecida. En ello fue determinante, como señaló el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, “el acuerdo del gas con Argentina (que) permitió disciplinar a las empresas petroleras. Porque garantizó mercados a muy buen precio y, como señaló Néstor Kirchner, la posibilidad de inversiones de Argentina si las empresas que están acá no las hacen. Fue –agregó García- una decisión política. Eso permitió romper una suerte de sindicato de empresas petroleras que había decidido no negociar”.

Esta experiencia muestra cómo la colaboración entre los países de la región y procesos de integración económica concretos son capaces de doblar la mano a la acción concertada de empresas transnacionales. El acuerdo alcanzado revela que se puede rescatar para el país parte de las ganancias producidas en la explotación de sus recursos naturales, dejándole un espacio de ingresos aceptado por los inversionistas extranjeros, que hasta ese momento obtenían utilidades colosales.

La recuperación de recursos nacionales incide en muchos aspectos, incrementa los ingresos fiscales. En Bolivia, 2006 finalizó con un superávit fiscal (el año anterior, en cambio, se había producido un saldo negativo) y aumenta la inversión social en un país en el cual dos tercios de sus seis millones de habitantes viven en la pobreza.

Lo sucedido en Bolivia no constituye un hecho aislado. “En el curso del actual ciclo alcista de los precios de las materias primas en todo el mundo –comentó *Financial Times*-, los gobiernos han renegociado los contratos con las empresas privadas que explotan los recursos naturales en su territorio. En el caso de América Latina –añadió la publicación-, los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia han logrado mejorar de modo muy significativos los términos en que operan en su territorio las empresas extranjeras duplicando los cargos de royalties e impuestos y en algunos casos expropiando activos” (12/10/06).

Chile, a pesar de las gigantescas ganancias obtenidas por las empresas cupríferas, permanece al margen, en lo fundamental, de este proceso. El llamado Royalty II es una caricatura muy pobre con relación a lo sucedido en otros países. Quince mineras privadas obtuvieron en enero-septiembre utilidades por US\$11.410,7 millones, los cuales proyectados a doce meses ascienden a US\$15.214,3 millones, sin considerar que en el cuarto trimestre la cotización del cobre permaneció por encima de su promedio anual. Ello justifica ampliamente aplicar medidas que retengan para el país las ganancias excesivas. En los primeros nueve meses, a la vez, cancelaron impuestos por US\$2.668,7 millones, con ventas de US\$19.124,1 millones, es decir con una tributación en comparación con éstas de sólo 13,9%, o sea inferior a lo que una persona común y corriente paga por concepto de IVA. El porcentaje de impuestos sobre las utilidades fue de 23,4%, notablemente bajo si se considera las altas utilidades remesadas al exterior o sacadas del país. El impuesto general sobre

las utilidades es de 17% a lo que debe añadirse el pago efectuado al remesarse ganancias al exterior. En otras palabras, se persiste en concederles fuertes privilegios.

Cuadro n°6
Mineras privadas de cobre: resultados enero septiembre
(Fuente: Fecus al 30/9/06. En MMUS\$)

Empresa	Ventas	Impuestos (*)	Utilidades
Escondida	6.495,1	986,0	4.127,3
Collahuasi	2.715,5	366,7	1.595,2
Los Pelambres	2.130,0	333,2	1.464,5
Sur Andes	1.754,4	229,6	1.010,7
El Abra	1.203,2	159,4	709,4
Nueva Candelaria	1.076,0	105,0	468,3
Zaldívar	620,7	111,7	481,9
Mantos Blancos	656,4	79,4	330,7
Cerro Colorado	620,7	94,7	345,9
Quebrada Blanca	460,6	59,7	259,8
El Tesoro	447,6	55,8	243,2
Lomas Bayas	341,8	45,7	197,6
Michilla	191,9	15,2	63,7
Meridian	159,7	19,1	90,0
Mantos de Oro	119,6	6,6	30,5
	19.124,1	2.668,7	11.410,7

En Venezuela, durante el año 2004 -cuando comenzó el período de las “vacas gordas” en la economía chilena- se elevó el royalty sobre las ventas de las empresas petrolíferas privadas de 1% a 16,7%. En 2006 lo volvió a subir a 33,3%, incrementando, al mismo tiempo, la tasa de impuesto, sobre las utilidades desde un 34% a un 50%. Simultáneamente se propuso a las empresas extranjeras constituir sociedades mixtas, que aumentaron la participación en la propiedad de Petróleos de Venezuela en porcentajes que fluctúan entre un 30% y un 49%, los cuales proyecta en un plazo no muy amplio convertir en mayoritario.

En Ecuador se nacionalizaron los activos de un consorcio petrolífero estadounidense, Occidental Petroleum, y se redujeron porcentualmente los ingresos de las compañías petrolíferas extranjeras considerando la alta cotización alcanzada por el crudo. La Casa Blanca procedió, ante estas medidas, a suspender unilateralmente las conversaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países, que volvió así a utilizar como un arma de presión política.

De otra parte, los Estados deben tener políticas activas frente a los procesos de comercialización. China, ante el alza de la cotización del cobre en los mercados internacionales, procedió a hacer uso de sus reservas para hacer descender el precio. En enero-octubre, sus importaciones mundiales del metal rojo, incluyendo productos semiterminados, se redujeron en 22,4%, con relación a los mismos meses de 2005. Chile siendo el principal productor y comercializador mundial de cobre no cuenta, en cambio, con políticas en este plano, dejando todo a merced del “mercado”.

El gran desafío para los países que emprendieron el proceso de recuperar en diferentes grados la propiedad sobre sus recursos naturales o cobrar una adecuada renta por ellos es ser capaces de utilizar los recursos que quedan en poder de los Estados -tal cual aconteció en Chile con la nacionalización del cobre- como palanca para entrar a una nueva fase de desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Por el contrario, la privatización de recursos energéticos y la carencia de una política global de largo plazo ha conducido en Argentina a enfrentarse al peligro de una crisis en el sector. En 2005, la extracción de petróleo, al alcanzar 254 millones de barriles, fue un 20% inferior a 1998. Más de un 40% de ese total fue producido por la española Repsol que durante el gobierno de Menem se apoderó de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), efectuando escasas inversiones. Sus necesidades de gas natural las enfrenta con un amplio acuerdo de suministro desde Bolivia.

En América Latina, la recuperación de la propiedad nacional sobre las fuentes energéticas constituye una base potencial para la profundización de la integración regional. “Una política energética regional o subregional- como ha escrito el ex jefe del gobierno español Felipe Gonzalez- contribuirá más que todos los discursos integracionistas a la unidad latinoamericana y al desarrollo (...)” (06/11/06). Ya existen algunos pasos importantes en esa dirección, de los cuales también Chile permanece hasta ahora al margen.

LOS ASPECTOS GRISES DEL PRESUPUESTO 2007

La aprobación del Presupuesto 2007 volvió a plantear la discusión sobre la conveniencia o no para el país de seguir acumulando superávits fiscales. La Dirección de Presupuestos estimó que en 2006 fue de un 7,6% del PIB (unos US\$11.000 millones). El monto definitivo será aún superior, ya que a octubre -de acuerdo a la información de Ejecución Presupuestaria- el excedente en el año ya alcanzaba a US\$9.930 millones. Si se considera, además, que para 2007 se proyecta un nuevo superávit de 4,4%, algo más de US\$6.200 millones, en el cuatrienio 2004-2007 se acumularían excedentes superiores a un 18,8% del PIB (más de a US\$27.000 millones, en cifras de 2007).

Cuadro n°7					
Balance Fiscal 1998 – 2007					
(Fuente: Dipres. En base devengada, % del PIB (e): estimación, (p): proyección)					
Año	%	Año	%	Año	%
1998	0,4	2002	-1,2	2005	4,7
1999	-2,1	2003	-0,4	2006 (e)	7,6
2000	-0,6	2004	2,1	2007 (p)	4,4
2001	-0,5				

Una de las debilidades más grandes del mecanismo presupuestario vigente consiste, precisamente, en que se pueden acrecentar los excedentes sin tope, colocándolos en activos financieros, no efectuando un equilibrio adecuado entre tomar providencias para otras fases de la evolución del país -que se producirán necesariamente- con desarrollar potencialidades nuevas de la economía nacional, extraordinariamente dependiente hasta ahora de unos pocos recursos naturales o producciones de bajo valor agregado, y enfrentar puntos críticos como la situación deteriorada de amplios sectores de la pequeña y mediana empresa que produce fundamentalmente para el mercado interno y la regresiva distribución del ingreso que se expresa en una elevada concentración de la riqueza en unos pocos y la precaria situación de grandes mayorías.

Otro tema relevante es el monto del gasto público, lo cual en definitiva expresa la disposición o no de hacer que el Estado cumpla un papel activo. Su aumento en el presupuesto 2007 de 8,9% no aprovechó a plenitud todas las posibilidades que presentaba el propio mecanismo presupuestario en aplicación y las condiciones extraordinariamente positivas en materia de ingresos fiscales. Según el director de Presupuesto, Alberto Arenas, “los costos de producir el cobre son una de las materias que explican el por qué estamos en el umbral o un guarismo de 8,9%” (4/10/06). La explicación resulta claramente insuficiente. “Cuesta calzar –señaló el senador socialista Carlos Ominami, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado- el 8,9% con el 1% del superávit estructural. Si de repente –añadió- la propia regla le indica a usted un crecimiento de dos dígitos, a lo mejor no hay que tener un aumento de gasto de dos dígitos, por tres razones: puede haber temas cambiarios, inflacionarios o de ejecución. Pero, si es así, dígalo derechamente y no tratemos de salvar la regla (...)” (04/10/06). El ministro de Hacienda se comprometió explícitamente a cumplir con el mecanismo presupuestario creado durante la administración anterior. En el cálculo se consideró, además, el precio de largo plazo del molibdeno –con una metodología que se reconoce debe perfeccionarse –y el efecto en los ingresos cíclicos de la tributación minera privada.

La determinación del porcentaje de incremento tiene un componente político evidente. Alberto Arenas lo reconoció abiertamente. “Si me preguntan –manifestó en entrevista de prensa- si en el Presupuesto no hay decisiones de política, por supuesto que hay decisiones de política. Para llegar al cálculo matemático de ese 8,9% la decisión política fue mantener una política responsable y cautelosa con balance estructural y un superávit de 1% del PIB” (07/10/06). Por lo tanto, junto al esquema utilizado, está presente lo que Arenas consideró “una política responsable”, la cual tiene como motivación central el supuesto que no crezcan a futuro los riesgos de inflación. El temor a las alzas en los precios lleva a aplicar decisiones que acomodaron el mecanismo presupuestario que se prometió aplicar rigurosamente.

En definitiva, limitar por mecanismo administrativos el gasto público, es una forma de reducir la presencia del Estado en la economía, propia de las concepciones neoliberales. “Chile -comentó el economista jefe para América Latina de Goldman

Sachs, Alberto Ramos— será uno de los países más austeros de la región en materia de presupuestos, pues continuará aplicando la regla de superávit estructural que le permitirá seguir ahorrando” (04/10/06). Situación muy diferente a la de otros países latinoamericanos que han aprovechado el aumento de los ingresos fiscales producto de los altos precios de los recursos naturales para expandirlo y enfrentar así diferentes desafíos. Los directivos de los organismos empresariales, lógicamente, expresaron su satisfacción con la política seguida. “Esto refleja -dijo el secretario general de Sofofa, Hernán Concha- la responsabilidad del gobierno y de la autoridades del sector económico” (04/10/06). Una reacción similar se produjo en los grandes grupos económicos. Eliodoro Matte calificó igualmente de “muy responsable” el presupuesto elaborado (06/10/06).

Según estimaciones del economista de la Universidad Católica Rolf Lüders, el gasto fiscal de 2007 equivaldrá a un 20,57% del PIB, superior a los dos años anteriores pero menor al de 2003 cuando llegó a 21,26% y claramente inferior a su nivel durante el gobierno de Salvador Allende momento en que alcanzó a casi un 35% del PIB. El monto de 2007 será también inferior al promedio registrado en el período de la dictadura. En la década de los setenta se mantuvo sobre el 30% y volvió a incrementarse en la crisis de 1982. “Nos pusimos keynesianos –reconoce Rolf Lüders, que fue biministro en el área económica durante ese período- para mantener el nivel de actividad” (07/10/06).

Al persistir en aplicar rigurosamente el rígido mecanismo presupuestario establecido durante el gobierno Lagos se mantuvo inmodificada la norma de que al alcanzarse en la actividad económica real los indicadores de tendencia inmediatamente se produce un superávit fiscal equivalente a un 1% del producto (aproximadamente US\$1.500 millones en 2007). De esta manera, se acota inmediatamente el nivel de gasto público constituyendo uno de los ejes centrales del mecanismo creado. “La verdadera discusión subyacente es, una vez más –como anotó Nicolás Eyzaguirre- el tamaño del Estado, no la regla fiscal” (08/10/06). “La meta de superávit estructural del 1%- sostuvo Velasco– se justifica en la existencia de un déficit estructural del Banco Central, la existencia de pasivos contingentes relacionados con la garantía de pensiones mínimas y asistenciales y la existencia de vulnerabilidades externas asociadas a descalces cambiarios y potenciales limitaciones al endeudamiento externo en moneda nacional” (04/10/06).

Es una argumentación muy pobre, frente a un superávit acumulado en estos años tan gigantesco. “Un Estado ya acreedor como el nuestro –como escribe Ricardo Ffrench-Davis-, naturalmente debería funcionar con un balance estructural de cero” (07/10/06). Por lo demás la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal destina un 0,5% del PIB, cuando se excede el superávit del 1% -como volverá a acontecer en 2007- a capitalizar el Banco Central y otro porcentaje similar a un Fondo de Reserva de

Pensiones. Además, debe recordarse que se mantuvo el IVA -el gravamen más regresivo- en 19% argumentando la necesidad de financiar los aumentos en las

pensiones mínimas y asistenciales. Finalmente hablar de “limitaciones al endeudamiento externo” cuando el sector público consolidado es acreedor neto resulta insostenible.

El Informe de Finanzas Públicas –que fundamentó la elaboración del Presupuesto 2007-, expresando la rigidez con que se manifiesta la política fiscal, mantuvo inmodificado el superávit estructural de 1% durante todo el período de la administración Bachelet, aunque los hechos revelaban nítidamente que nada lo justificaba. Así se cumplía, además, con la obligación expresada en la Ley de Responsabilidad Fiscal que cada gobierno debe definir en sus primeros meses de gestión la conducta presupuestaria a seguir durante todo su período, independientemente que las circunstancias puedan ser distintas.

El ministro Velasco en la exposición sobre la Hacienda Pública sostuvo que la vigencia de esta regla “ha sido consistente con el proceso de convergencia de la actividad económica hacia sus niveles de tendencia, en un escenario de mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos” (04/10/06). La realidad de 2006, como lo confirmó el propio informe ministerial, no condujo precisamente a esa conclusión, dado que el crecimiento económico se alejó marcadamente de su crecimiento de tendencia. Para 2007, el Informe de Finanzas Públicas proyectó un crecimiento del producto de 5,7.

Sin embargo, analizar la economía a partir de la realidad y no de esquemas rígidos fue ganando terreno. Incluso uno de los autores del mecanismo el ex director de Presupuestos en el gobierno anterior, Mario Marcel, debió constatar en diciembre que las condiciones para mantener la regla “han ido cambiando” y que el 1% del PIB de superávit “no está escrito en la Biblia ni en la Constitución” (14/12/06). Luego de esta afirmación el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, también se pronunció en ese sentido: “La regla de superávit estructural –dijo- contenía un conjunto de hipótesis y, en la medida en que sean modificadas por la realidad, es posible también cambiar la regla de superávit estructural” (15/12/06).

Lo cierto es que las condiciones ya, en ese momento, habían variado claramente y el mecanismo, desde que se estableció, fue expresión de una política fiscal profundamente conservadora. Desde que se estableció la regla, el déficit patrimonial del Banco Central -uno de los fundamentos entregados para establecerla- se redujo a la mitad por la disminución de sus tasas de interés reales y los fuertes prepagos fiscales efectuados. La Ley de Responsabilidad Fiscal, por lo demás, le proporciona abonos si el superávit supera el 1% del PIB, al igual como acontece con los compromisos previsionales presupuestarios. El descalce cambiario tampoco constituye una razón, dado que el Gobierno Central dejó de ser deudor transformándose en acreedor internacional.

Los recursos acumulados por encima del superávit estructural de 1% pasan a engrosar el Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES). En noviembre el

ministerio de Hacienda informó que su administración, así como el del Fondo de Reservas de Pensiones, fue entregado hasta mediados de julio al Banco Central, para efectuar en esa fecha una licitación internacional que permitirá contratar parte de su manejo a “agentes privados”, transformándose así en una fuente adicional de ganancias para grandes consorcios financieros internacionales. Al mismo tiempo se comunicó que los recursos acumulados en ambos fondos serán colocados en su totalidad en dólares, moneda que en los últimos años viene experimentando un proceso devaluatorio, y se supone que seguirá evolucionando en igual forma. La colocación de los recursos en dólares presenta un alto riesgo y en el curso de 2006 significó una pérdida cuantiosa, si se mide en euros o en libras esterlinas. Al primero de diciembre, en el año la moneda estadounidense había perdido un 12,62% de su cotización en relación al euro y un 15,02% si se la comparación se efectúa con la libra. En ese momento todas las divisas mundiales principales se habían revaluado frente al dólar norteamericano.

La derecha insistió en la discusión previa a la exposición ministerial, así como luego de presentarse, en la necesidad de reducir impuestos. “Cuando se tiene mayores ingresos permanentes -manifestó el economista de la Universidad Católica y miembro del equipo económico de Sebastián Piñera en las pasadas elecciones presidenciales Felipe Larraín- el Estado puede darles dos usos, o aumentar el gasto o reducir los impuestos, (...) es tan responsable agregó lo uno como lo otro” (04/10/06). Hablar en general de reducir impuestos no es responsable cuando el país tiene una carga tributaria a niveles internacionales extraordinariamente baja. El debate tributario que el país requiere, no efectuado durante los años de gobierno de la Concertación, es modificar la regresividad de la estructura tributaria que, obviamente, influye para que Chile sea uno de los países de peor distribución de ingresos de la tierra. La decisión de mantener el IVA en 19% desde comienzos de 2007, dejando de lado la disposición de bajarlo automáticamente en un punto porcentual, se revela con más fuerza todavía como una determinación absolutamente injustificada⁴.

“Frente a la espectacular situación (de ingresos fiscales) que tenemos de 2006 y se prevé para 2007 -escribió el economista Enrique Goldfarb-, se insiste en el ahorro de recursos para no se sabe que eventualidad, cuando el incendio lo tenemos ahora mismo. En lugar de no gastar -agregó- hay que gastar y gastar en inversión para reincorporar al carro de la economía a los desplazados” (06/10/06). La preocupación oficial es el equilibrio fiscal a futuro, cuando de lo que se trata es equilibrar la economía y producir un viraje inmediato en la situación de las grandes mayorías nacionales.

⁴ Véase, “Lagos: el presidente ‘progresista’ de la concertación”.

REFORMA PREVISIONAL Y POLÍTICA FISCAL

La iniciativa gubernamental de reforma al sistema de pensiones crea -en un paso positivo, propuesto inicialmente por Cenda, que fundamentó la existencia de recursos con este fin, y recogido posteriormente por amplios sectores sociales- la Pensión Básica Solidaria (PBS) a todas las personas mayores de 65 años, que no hayan cotizado en el sistema y que pertenezcan al 60% de la población de menores ingresos y un Aporte Previsional Solidario (APS) para quienes habiendo cotizado tengan pensiones bajas.

Sin embargo, se establece un monto y una gradualidad para que la PBS llegue a los \$75.000 y el APS alcance su punto máximo absolutamente injustificados considerando las posibilidades fiscales existentes. Existen condiciones para poner en vigencia la PBS a plenitud inmediatamente. “No me parece -señaló el diputado Pablo Lorenzini- que haya que esperar. Hay recursos y holguras” (16/12/06). Igualmente el pleno funcionamiento del APS puede abreviarse considerablemente.

En cambio, se prevé su tramitación parlamentaria durante 2007, y se comience a aplicar en una primera etapa a partir de julio de 2008, con un monto de la PBS de \$60.000 inferior al establecido cuando se encuentre en pleno régimen recién en 2009. La CUT propuso una PBS “a lo menos de \$85.000”. Hasta 2009, el beneficio lo percibirán sólo los dos quintiles de la población de menores recursos, llegándose al 60% recién el año 2017, de acuerdo a lo informado por la superintendente de AFP Solange Bernstein. La idea original del ministro de Hacienda fue establecer una PBS de apenas \$52.000. Se estableció como condición que sus beneficiarios deben tener 65 años de edad, lo cual es superior a la edad que en la actualidad se permite a las mujeres acogerse a jubilación, dando un primer paso para imponerlo como condición para poder acceder a este beneficio, en oposición a la reiterada formulación en contrario de la Presidenta de la República. Se descartó, con toda razón, llegar como propuso la comisión Marcel, a partir de 2025 a los \$75.000, con un incremento real de 2% anual. Actuar más rápido a juicio de integrantes de la Comisión Marcel sería “populismo”. Por su parte, el APS se pondrá en funcionamiento el primero de julio de 2008 para las pensiones inferiores a \$60.000 e irá creciendo anualmente con un tope de \$200.000 el primero de julio de 2012, sumándole los ahorros efectuados por el beneficiario. El APS tendrá un monto máximo de \$75.000.

Cuadro n°8
Aporte de Pensiones Solidarias al año 2012
(Fuente: Ministerio de Hacienda. En pesos)

Pensión autofinanciada	Complemento Fiscal	Monto Total
0	75.000	75.000
50.000	56.250	106.250
100.000	37.500	137.500
150.000	18.750	168.750
200.000	0	200.000

El proyecto reemplaza el sistema vigente de pensiones asistenciales (PASIS) y mejora gradualmente las pensiones del 60% de la población de menores ingresos. Al anunciarse el proyecto por la Presidenta de la República, fiscalmente se financiaban 437.200 pensiones asistenciales y se garantizaban pensiones mínimas -de acuerdo a cifras del INP- a 512.719 personas. Al finalizar 2006 un 15% de la población jubilada recibe PASIS, las cuales pasan a denominarse Pensión Máxima con Aporte Solidario, complementándose sus montos actuales con recursos estatales. Se trata de un avance importante.

La determinación sobre los recursos a emplear en la Reforma Previsional fueron vistas al margen de la comisión a nivel ministerial creada por la Presidenta de la República y entregada, en los hechos, a las visiones conservadoras del ministro de Hacienda. “Como ocurre con esta o cualquiera otra reforma o cualquier otra política -subrayó Velasco-, su impacto fiscal y financiamiento lo ve el ministerio de Hacienda con la Presidenta de la República (17/12/06). El Comité interministerial fue presidido por el ministro del Trabajo, pero su secretaría ejecutiva funcionó en la Dirección de Presupuestos. Inmediatamente se descartó financiarla introduciéndole modificaciones a la regresiva carga tributaria existente en el país. El programa de gobierno se comprometió -por iniciativa en particular de Andrés Velasco- en no modificarla, formulación que ha sido muy destacada por los grandes intereses económicos presentes en el país y beneficiarios del modelo económico.

En estas condiciones, el financiamiento debía provenir de los excedentes fiscales acumulados en los últimos años por el precio del cobre y el mecanismo fiscal en aplicación, que conduce a destinar la mayor parte de esa elevada cotización a superávit y, en consecuencia, a no destinarla a gasto público. La regla fiscal mantenida rigurosamente por Velasco anula en gran parte los beneficios extraordinarios para el país de la evolución de los términos de intercambio, es decir de la relación de precios en los mercados internacionales. Al aplicarse rigurosamente el esquema presupuestario vigente el financiamiento de la reforma se hará en sus primeros años con los ingresos estructurales generados por los ahorros fiscales. A septiembre, los activos financieros gubernamentales alcanzaban a US\$9.752 millones, y siguen creciendo, habiendo generado a esa fecha por concepto de intereses más o menos US\$340 millones.

La Comisión Marcel estimó que entregar una pensión básica universal de \$75.000 tendría un costo estimado de US\$1.100 millones, suma inferior a la generada por el mecanismo presupuestario que limitando el gasto público genera un superávit estructural de 1% del PIB al llegar al nivel de los indicadores de tendencia. “Cuando la reforma esté plenamente en régimen, y esto comprende no sólo la gradualidad de la entrada en vigencia de los distintos aspectos, sino también la transición demográfica -cifró el ministro Velasco- el costo será aproximadamente de un punto del PIB (...)” (17/12/06). Ello se producirá el año 2025.

De otra parte, el Fondo de Reserva de Pensiones tenía ya acumulados, al anunciarse la Reforma, US\$606 millones a ser utilizados, de acuerdo a las estipulaciones establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, en la próxima década. Finalmente, debe considerarse que aproximadamente la mitad del costo de la PBS se financia con el gasto fiscal actual en pensiones, a lo que deben agregarse los recursos que se irán liberando a futuro de los compromisos presupuestarios a la fecha como el bono de reconocimiento entregado a las personas que cotizaron en el antiguo sistema de pensiones. Proyecciones efectuadas por la Dirección de Presupuestos establecen que los gastos provenientes del antiguo sistema comenzará a reducirse a partir del año 2010, para disminuir drásticamente a partir del 2015.

El ministro de Hacienda explicó que la reforma previsional será financiada desde cuatro fuentes: uso del fondo de reserva de pensiones, el crecimiento económico, los recursos a liberarse al pasarse del antiguo al nuevo sistema y por los intereses a obtenerse por los activos financieros acumulados. La utilización de excedentes fiscales podía efectuarse de diferentes maneras. Una de ellas era terminar con el mecanismo absolutamente injustificado de generar un superávit fiscal de 1% del PIB. Más aún, cuando el consenso de modificar la rigidez del sistema alcanzó a uno de los creadores del mecanismo, el ex director de Presupuestos Mario Marcel, y a muchos personeros de la coalición gubernamental. Mantenerlo inmodificado como se estableció en el programa durante la campaña presidencial de Michelle Bachelet e intentar proyectarlo en el tiempo fue claramente un error. Alternativa de financiamiento previsional que Velasco también rechazó aduciendo, como lo ha hecho anteriormente, que “el superávit estructural se rige por normas muy claras (...) que llevaron a plantearnos la meta del 1%. Mientras esas circunstancias objetivas se mantengan -añadió- esa meta se mantendrá! Es lo que decía el programa de la Presidenta Bachelet y es lo que este gobierno ha reiterado en numerosas oportunidades” (13/12/06). En verdad, dichas “circunstancias objetivas” ya no existen.

En definitiva, en la forma de financiamiento se impuso el criterio del ministerio de Hacienda que no se movió ni un milímetro del mecanismo presupuestario en aplicación, transformado en el principal escollo para acceder a beneficios sociales más de acuerdo con las necesidades de la población. Velasco debió, eso sí, ir cediendo en hacer menos lejano el acceso a los beneficios, pero demorando su rápida puesta en vigencia.

La Reforma Previsional mantiene la estructura de Administradoras de Fondos de Pensiones y, por tanto, su papel gravitante en la economía nacional. Se trata de un mercado fuertemente concentrado. Al 30 de noviembre, Provida -controlada por el consorcio bancario español BBVA- reunía un 31,05% de los activos totales y al 31 de octubre un 38,5% de los cotizantes. Si se le suma Habitat, administrada por la Cámara Chilena de la Construcción y el grupo financiero estadounidense Citybank, se llegaba respectivamente a un 54,59% y a 65,05. Finalmente, agregando a Cuprum manejada por el Grupo Penta se alcanzaba a un 73,09% y a un 74,58% de la suma global. La reforma conduce a aumentar los fondos manejados por las AFP al estimular la incorporación al sistema de trabajadores independientes. El ministro Andrade estimó en un millón el número de personas que ingresarán por este motivo al sistema. “Es un cambio sustantivo -añadió- para la industria y para incentivar a nuevos actores” (17/12/06). La reforma no se efectuó, como lo expresó el ministro del Trabajo “contra la industria, es una reforma con la industria”, o sea con las AFP, facilitándose además el ingreso de otros grandes actores económicos a este negocio. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfredo Ovalle, por ello valoró que el proyecto ratificase “lo que ha sido el sistema de AFP” (20/12/06), cuando el país requiere modificarlo profundamente.

Cuadro n°9
AFP: Participación de mercado antes de los anuncios
(Fuente: Bolsa de Comercio. En porcentajes del total)

AFP	Cotizantes 31/10/06	Activos 30/11/06	Controlado por:
Provida	38,50	31,05	BBVA (España)
Habitat	26,55	23,54	C.Ch.C. y Citibank (EE.UU)
Cuprum	9,53	18,50	Grupo Penta
Santa María	12,30	11,26	ING (Holanda)
Bansander	9,44	12,17	Santander (España)
5 de 6	96,32	96,52	

La Presidenta de la República en su exposición destacó la creación de comités de participación ciudadana, integrada por trabajadores, pensionados y representantes del sistema. Para los imponentes de las AFP -que son los dueños de los recursos acumulados- el nivel de participación es absolutamente precario. Los imponentes deben tener una participación real en el sistema en todos los asuntos relevantes que tengan relación con el manejo de sus recursos. La democratización del sistema sigue constituyendo una tarea pendiente.

Al mismo tiempo, se “flexibilizan” los recursos en poder de las AFP, permitiendo en particular destinar más fondos al exterior, reforzándose así los canales que conducen a sacar fondos de la economía nacional, cuando se trata, al contrario, de estimular la utilización de los ahorros generados al interior del país. Se eleva a un 80% el límite de inversión en el exterior, desde el 30% actual, estableciendo el Banco Central la

gradualidad con que se vaya produciendo el incremento. Se cede así ante una de las presiones más reiteradas de las AFP y de los defensores de la más plena apertura en el movimiento de capitales. Los senadores de la UDI y Renovación Nacional trataron de introducir una modificación en la misma dirección en el proyecto de ley de mercado de Capitales II. Al finalizar noviembre, la inversión externa efectuada con los fondos de los imponentes alcanzó a US\$27.200 millones, suma equivalente a un 31,4% de los fondos acumulados a esa fecha.

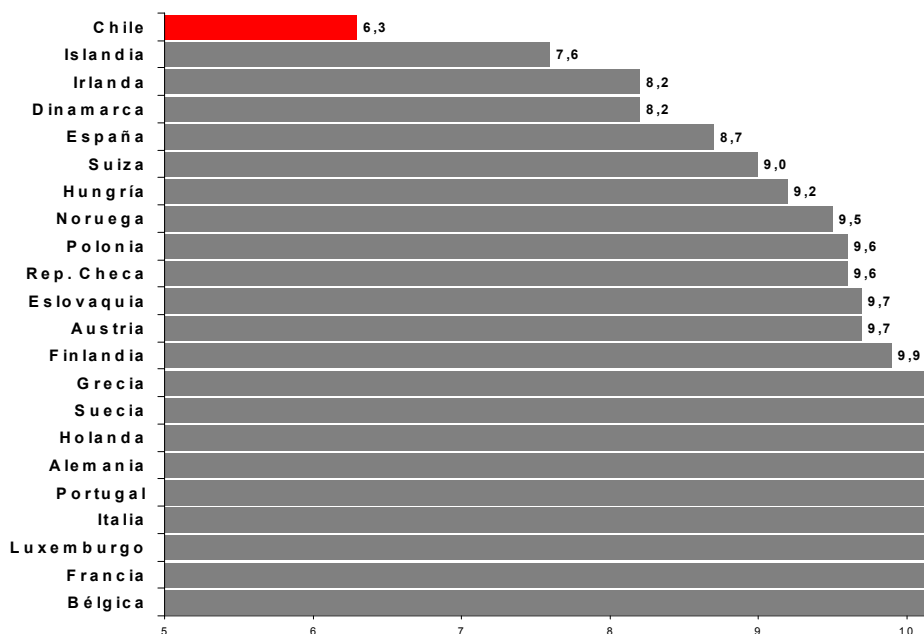
La Reforma no soluciona el daño previsional cometido a los funcionarios públicos. El proyecto, como manifestó el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, “no da solución a miles de funcionarios públicos que no pueden jubilar y que no lo pueden hacer porque tienen daño previsional debido a las subcotizaciones que sufrieron hasta la última parte de la década de los ochenta”. De otra parte, dejó inmodificada la situación previsional de los miembros de las FFAA., que cuentan con beneficios muy superiores al resto de los chilenos, sistema que se encuentra en crisis por la magnitud de los recursos presupuestarios que consume.

CHILE EXCESO DE FLEXIBILIDAD Y CARENCIAS EN PROTECCIÓN SOCIAL

En un mercado laboral absolutamente precario en la defensa de los intereses de los trabajadores, el ministro de Hacienda Andrés Velasco -aprovechó la tribuna del encuentro empresarial ENADE 2006- para volver a proponer la idea de “flexibilizarlo” aún más. Para justificar su planteamiento habló simultáneamente de aumentar la seguridad social, terreno en el cual el país es fuertemente deficitario. Los esfuerzos deben centrarse en esta dirección y no en aumentar los niveles de precarización del trabajo.

Un estudio efectuado por el especialista principal en políticas de empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gerhard Reinecke, ratificó que “Chile tiene un mercado del trabajo tanto o más flexible que el de Dinamarca” (07/12/06). En verdad, la serie estadística entregada por el especialista muestra que la flexibilidad en Chile es aún superior, comparando informaciones del país de 2003 con el de naciones europeas en 2005. En Chile, la antigüedad promedio del trabajo dependiente era de 6,3 años -y nada indica que haya mejorado- mientras que en Dinamarca es de 8,2 años. Por tanto, el grave problema del país no es, como pretende el ministro Velasco, aumentar la “flexibilidad laboral”, sino mejorar sustancialmente los mecanismos de protección social. El subsidio de cesantía establecido durante el gobierno Lagos no cambió la situación, dado el escasísimo aporte fiscal. “El Fondo Solidario –manifestó Reinecke- está diseñado en tal forma, que junto con la rotación en el mercado laboral chileno da respaldo sólo al 3% de los beneficiarios”. Velasco ha reiterado el carácter del seguro de desempleo en el país destacando sólo que su Fondo Solidario –absolutamente insuficiente- “se puede perfeccionar” (10/12/06).

AÑOS DE ANTIGÜEDAD PROMEDIO EN EL EMPLEO, DE TRABAJADORES DEPENDIENTES
(FUENTE: OIT. CHILE 2003, PAÍSES EUROPEOS 2005)



El viaje efectuado por Velasco a Dinamarca fue un recurso propagandístico. No se necesitaba ir, desde luego, al país europeo para informarse de la precarización existente en el mercado laboral chileno, tampoco para informarse que la seguridad social en ese país es incomparablemente superior a la existente en territorio nacional. “Dinamarca -destacó Velasco, luego de su viaje- tiene un mercado laboral extraordinariamente fluido. Casi un tercio de todos los daneses cambia de trabajo en el curso de un año. Los que salen de un empleo tardan en promedio (...) -subrayó- apenas un mes en encontrar otro” (10/12/06). La diferencia con Chile es muy grande, dado el alto porcentaje permanente de la población con problemas de trabajo.

El gran empresariado recibió la formulación con entusiasmo ya que lo identificó con su reiterada propuesta de “flexibilizar” el muy “flexible” mercado laboral chileno, terminando particularmente con el mecanismo de indemnización por años de servicios, cuyos beneficios se redujeron significativamente en el período de la dictadura y experimentaron un nuevo golpe al promulgarse el nuevo mecanismo de subsidio de cesantía. El Mercurio editorializó también en términos elogiosos destacando que “evaluar la posibilidad de avanzar” a una mayor flexibilización es una decisión “muy positiva” (06/12/06), señalando -en contradicción con los hechos- que “el mercado

del trabajo nacional es comparativamente rígido”. Su idea es que incluso el salario mínimo se reduzca o, en un escenario en su formulación más ideal, no exista. Con razón el ministro del Trabajo, manifestó que “si planteamos algún criterio o alguna medida que genere el aplauso unilateral de un sector, deberíamos preguntarnos si estamos haciendo bien las cosas. Para decirlo en una palabra –añadió- no es este el contexto de 1979, en que un grupo de tecnócratas pudo imponer unilateralmente un conjunto de transformaciones al mercado del trabajo, que se materializaron en el así llamado Plan Laboral” (07/12/06).

Andrade rechazó de inmediato la idea de una aún mayor “flexibilización”. “Lo que puedo señalar con toda certeza -manifestó- es que en el programa de empleo que la Presidenta le ha encargado a este ministerio, la flexibilidad laboral no está considerada” (02/12/06). El presidente del PS, Camilo Escalona, calificó el paso dado por Velasco de “error político, dado que es un tema que ‘divide’ a la Concertación” (03/12/06). Peor aún, es una propuesta que de materializarse incrementaría el trabajo informal y la precarización en el mercado laboral. Finalmente, como ya se ha transformado en un ritual, el gobierno anunció la creación de una comisión técnica, conformada por personeros de los ministerios de Hacienda y Trabajo, para preparar una agenda que impulse el empleo durante 2007.

Los teóricos de la “flexiguridad” la vinculan con la existencia de una economía abierta, una de las ideas centrales del Consenso de Washington, “Una economía abierta que quiera surgir –manifestó el profesor del Centro de Estudios Laborales de la Universidad de Aalborg Per Madsen- necesita flexibilidad laboral”. La apertura comercial “flexibilizó” la situación de muchas pequeñas empresas e incluso medianas al no poder competir con productos importados, al tiempo que el libre movimiento de capitales reduce la capacidad de acción del Estado. La “flexibilidad laboral”, por tanto, es un componente de una estrategia única que no por casualidad el ministro Velasco buscó repotenciarla en el encuentro del gran empresariado.

La “flexiguridad” busca quitar una conquista de los trabajadores, que en gran medida ya se les arrebató -la indemnización por años de servicios- lo que le confiere un carácter regresivo. El ministerio de Hacienda tiene en carpeta terminar con este beneficio en las nuevas contrataciones. El desafío actual es establecer una poderosa red de seguridad social y no seguir precarizando más el mercado laboral. En Dinamarca, el sistema garantiza un subsidio de paro durante cuatro años, en Chile su vigencia es de cinco meses. El subsidio asciende en promedio en el país europeo a más de un 70% del sueldo percibido mientras se estaba trabajando, porcentaje muy superior al cobrado en Chile, con un máximo de 90% y un tope de US\$30.200 anuales.

En Dinamarca, el financiamiento es efectuado en lo fundamental por el Estado, obtenido sobre la base de impuestos de 30% para las empresas y de 50% al ingreso personal. Es un esquema tributario muy diferente al chileno, que el programa

gubernamental- dándole garantías al gran empresariado- ha prometido no modificarlo.

La carga tributaria en Dinamarca es un 49% del PIB, mientras en Chile es de sólo un 18%, como se constató en un seminario con participación de la CUT, la CPC y el ministro de Economía. El fisco financia un 80% del seguro de desempleo y un 20% lo hacen los empleadores. El mecanismo de seguro de cesantía creado durante el gobierno Lagos, en cambio, es cubierto prioritariamente por los propios trabajadores. En el país, la estructura tributaria es profundamente regresiva, apoyándose primordialmente en impuestos indirectos, en primer lugar el IVA. No en impuestos directos como acontece en los países europeos. De otra parte, la experiencia de Dinamarca se apoya en niveles elevados de negociación colectiva, en un país con una tasa de sindicalización de 77%. En Chile, es ligeramente superior al 10%. La participación en el país europeo de las mujeres en la fuerza laboral tampoco tiene nada que ver con la existente en territorio nacional.

Los intentos de exportar la experiencia laboral danesa a través de aspectos parciales han fracasado. El mecanismo se construyó –explicó el secretario permanentemente del Ministerio del Trabajo de Dinamarca, Bo Smith-a lo largo de un siglo. Hemos recibido –agregó- a mucha gente, como el ministro Velasco, que buscan emularla. Estoy seguro –concluyó- que el modelo completo -añadió- no se puede exportar, porque está basado en cien años de desarrollo” (02/12/06). En Francia quisieron implementar aspectos parciales en pro del empleo juvenil, debieran desistir de su intento luego de fuertes jornadas de protestas públicas.

El ministro Velasco anunció desde Dinamarca que se está “evaluando” incrementar el aporte fiscal al fondo solidario del seguro de desempleo, medida que se encuentra incluida en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, por lo cual no puede sino llamar la atención que varios meses después de ejercer su cargo el ministro de Hacienda recién está “evaluando” el tema. Con el agravante que de inmediato subrayó que como todas las medidas a adoptar por el Gobierno “se enmarcan dentro de la regla fiscal estructural” (01/12/06), que limita fuertemente el gasto público. El mecanismo de seguro de desempleo establecido durante el gobierno Lagos traspasa a la cuenta individual de los trabajadores los recursos destinados a indemnización por años de servicio con el fin de financiar el periodo de cesantía, constituyéndose así en un instrumento para “flexibilizar” el mercado laboral al reducir la restricción concreta que tiene el empresariado para despedir trabajadores. Hasta los inicios de diciembre el subsidio promedio fue de \$80.000, manteniendo a sus receptores en situación de pobreza. Al fondo solidario tuvieron acceso, a la misma fecha, únicamente 28.000 trabajadores. Un seguro tan reducido, financiado por los propios trabajadores, refuerza los desequilibrios distributivos. El Fondo acumula recursos del orden de unos US\$200 millones. Su baja utilización es una consecuencia de que se diseñó considerando que la mayoría de los trabajadores cuenta con contrato indefinido, lo que ya no es así. La rotación laboral va acrecentándose.

La política de salarios seguida en los últimos años no ha buscado mejorar la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. El economista de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Andrés Marinakis, en un estudio sobre las implicancias que tuvo la reforma legal que disminuyó la jornada laboral semanal, muestra que en 2005 los salarios mensuales cayeron en 1,9%, su primera disminución desde 1990. Durante la primera mitad de la presente década los aumentos reales de las remuneraciones mensuales fueron muy bajos. En 2001 y 2002 fue de sólo 0,4%.

UNCTAD CRITICA LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES

En informe anual 2006 de la UNCTAD muestra crudamente las consecuencias negativas para los países en desarrollo de lo que denomina las “reformas de las décadas de los ochenta y los noventa”, o sea los esquemas neoliberales.

El informe plantea la necesidad para los países exportadores de materias primas de aprovechar la coyuntura favorable de alza en las cotizaciones -como acontece con el cobre- para invertir y diversificar sus estructuras productivas. “Si persiste el elevado nivel de los precios del petróleo -ejemplifica refiriéndose a las naciones exportadoras de oro negro-, ese factor podría contribuir a una corrección benigna de los desequilibrios mundiales debido a un crecimiento más fuerte de la demanda interna y a una mayor inversión social y en infraestructuras dirigidas a diversificar las economías de esos países”. Desde luego, esta misma formulación es válida para países exportadores de otros recursos primarios que también subieron fuertemente su cotización. Es el caso de Chile.

Esta recomendación se encuentra en abierta contradicción con el esquema presupuestario seguido en el país, que convierte todos los ingresos provenientes de un mayor precio del cobre -ya sea vía excedentes e impuestos entregados por Codelco o gravámenes a las empresas privadas- con relación a la estimación de tendencia (0,99 centavos de dólar en el presente año y US\$1,21 en 2007) en superávit fiscal. De tenerse en cuenta las recomendaciones de la UNCTAD la preocupación central en la elaboración del presupuesto sería potenciar al país tanto en recursos humanos como productivos hacia el futuro y no efectuar el gran esfuerzo del ministro Velasco de cómo alcanzar el menor crecimiento posible en el gasto sin torcer demasiado burdamente el mecanismo fiscal.

Mantener el superávit fiscal de 1% en un momento de alta colocación de recursos fiscales en activos financieros no tiene, más claramente que nunca, ninguna justificación. Menos aún convertir todos los ingresos cíclicos extras en superávit. Incluso centros de estudio y políticos de derecha han debido constatar la falta de sentido, en el contexto actual, de mantener el superávit de 1%. Los argumentos oficiales para defenderlo se debilitaron al aprobarse la Ley de Responsabilidad Fiscal que traspasa

recursos al Banco Central y crea un fondo previsional para cubrir requerimientos futuros en esta esfera. “La justificación para el superávit estructural desaparece, por lo que podría eliminarse gradualmente –concluyó el economista de Gemines, Alejandro Fernández- y establece como situación normal una de equilibrio estructural (...) lo que, además, parece absolutamente razonable si se tiene a la vista que la deuda pública es extremadamente baja (...)” (13/09/06). Obviamente, desde una visión de derecha esta realidad les lleva a tener una actitud “cautelosa” en materia de gasto público y, en un esquema ideal desde su perspectiva, reducir impuestos, lo cual se ubica en una dirección antagónica con el planteamiento de la UNCTAD.

Una de las grandes preocupaciones del ministro Velasco en la elaboración de su presupuesto 2007 fue el aumento de costos producido en Codelco. Lo cual hizo sin tener presente que una proporción de esos mayores costos proviene del manejo macroeconómico del país (en el cual tiene responsabilidad directa) o en decisiones que no han sido modificadas por los gobiernos de la Concertación y que afectan directamente los resultados de la empresa estatal. Como acontece con todas las empresas exportadoras los costos de Codelco se ven influidos por la revaluación del peso. ¿Se puede examinar esta variable sin vincularla con la pasividad absoluta del Banco Central en esta esfera, en cuyas reuniones participa con derecho a voz el ministro Velasco?

La situación de la empresa estatal se ve afectada, además, por dos imposiciones que no la tienen los consorcios privados del sector. Un 10% del equivalente de sus ventas debe traspasarse a las FFAA. para la adquisición de armamentos. De otra parte, debe entregar todos sus excedentes después de impuestos, no teniendo la posibilidad de efectuar operaciones financieras con saldos de ellos, ganando los correspondientes intereses, que sí las realiza la Dirección de Presupuesto, mientras debe endeudarse -con los costos del caso- para cumplir con su plan de inversiones.

Codelco, como todas las empresas y los ciudadanos corrientes, sufre además el impacto de aumentos en las tarifas de muchos servicios, incluyendo aquellos con mecanismos de regulación, en los cuales el Estado tiene participación en su definición. Obviamente, en los costos también influyen hechos internos, que deben examinarse objetivamente y de ser necesario críticamente.

El costo de Codelco como porcentaje de los ingresos de explotación se encuentra por encima del promedio sectorial. En el primer semestre de 2006 fue de 39,5%, contra un promedio general de 28,6%, en lo cual influye la antigüedad de muchos de sus yacimientos y las provisiones realizadas a causa del cierre programado de Salvador. La conclusión apropiada es aumentar sus inversiones y poner en funcionamiento nuevos yacimientos, como Gaby o Mansa Mina. ¿Qué política tiene el Estado para desarrollar Codelco o permitirle recuperar yacimientos que se entregaron a capitales privados durante el proceso de privatización de la gran minería cuprífera y que están proporcionando elevados ingresos y rentabilidades? Son preguntas que debería plantearse el ministro Velasco si quiere reducir los costos de la empresa a futuro.

La política presupuestaria fue diseñada para dar garantías a los capitales externos. Ello restringe la capacidad de aplicar políticas activas. “A veces -se señala en el informe 2006 de la UNCTAD- la reducción de la autonomía sólo se considera como resultante de los compromisos contraídos a través de acuerdos de comercio multilaterales. Pero, los acuerdos bilaterales y regionales suelen imponer condiciones aún más estrictas y, además, existen muchos otros medios no comerciales de restricciones al espacio de políticas (...)”. Este es el caso del TLC con Estados Unidos o el sistema de presupuesto estructural, que reducen el campo de acción del Estado.

En Chile se siguen aplicando políticas basadas en las recomendaciones clásicas del FMI, en momentos que se encuentran fuertemente cuestionadas a nivel global. El documento de la UNCTAD propicia políticas estatales activas, “a diferencia -se explicita- de lo ocurrido en los años ochenta y noventa, cuando las instituciones de Bretton Woods recomendaban a los gobiernos que se mantuvieran prescindentes y dejaran que las fuerzas de mercado fijaran “precios correctos”. Estas políticas, realizadas “a menudo a instancias de las instituciones financieras y entidades crediticias internacionales, no dieron -agrega- los resultados prometidos”. Chile sigue siendo uno de los países de peor distribución de los ingresos a nivel mundial. “La desigualdad -reiteró, durante el año, el destacado economista argentino Bernardo Kliksberg- es el producto de políticas económicas. La desigualdad -agregó- (...) está relacionada con el Estado ausente. No necesitamos suprimir ni desarmar al Estado. Se necesitan políticas públicas de primera calidad” (04/09/06). ¿No existen en Chile mejores condiciones para llevarlas adelante hoy cuando se produce una abundancia de recursos fiscales?

El informe de la UNCTAD critica el enfoque ortodoxo de “políticas macroeconómicas seguras”, que se sintetiza en concentrar unilateralmente los esfuerzos en tasas de inflación bajas como “la condición más importante para lograr un crecimiento satisfactorio”. La resistencia del ministro Velasco a un gasto público mayor lo fundamenta, al igual que el gran empresariado, en que podría desatar presiones inflacionarias. De allí sus esfuerzos por constreñir su aumento, que constituye otro de los componentes centrales en el enfoque neoliberal de una “política macroeconómica segura”. Esta orientación tiene un claro sello contractivo. Los grandes problemas de la población, en este enfoque, no están presentes.

Las propuestas del organismo de las Naciones Unidas lleva a políticas macroeconómicas muy diferentes: tasas de interés real bajas, que estimularían la inversión; tipos de cambio competitivos, lo cual llevaría a terminar con la no intervención del Banco Central en el mercado y promovería una mayor presencia externa e interna de la producción nacional; atracción de inversión extranjera directa, que contribuya a generar mayor valor agregado y a estimular el progreso tecnológico; aplicar un “enfoque flexible” arancelario, en vez de su sistemática reducción; que se defienda la producción industrial, no dejándose a merced de bienes sustitutivos. Los

gobiernos -se dice explícitamente- “deberían proteger las empresas nacientes, incluso aplicando con prudencia subvenciones y aranceles (...)” Afirmación que es absolutamente opuesta a privilegiar la apertura económica a todo evento como se hace en el país, particularmente luego de suscribirse el TLC con EE.UU.

“Una de las restricciones más importantes, destaca el estudio, “es la pérdida de la facultad de utilizar los tipos de cambio como instrumento efectivo para realizar ajustes (...)”. En Chile, esta conducta se lleva al extremo ya que el Banco Central nada hace desde hace varios años en esta esfera y nunca ha usado el tipo de cambio como instrumento de política desde que suscribió el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., en el cual Washington impuso la total apertura del mercado de capitales, la cual se cumple a plenitud si se deja la paridad cambiaria al mercado. Esta forma de actuar reduce también el papel del Estado.

“Para las pequeñas economías abiertas, en particular para los países en desarrollo -dice la UNCTAD-, el tipo de cambio es el precio más importante existente y tiene una repercusión enorme en el nivel de precios y en la competitividad general. Combinar una cuenta de capital completamente abierta con una autonomía plena en la política monetaria y una estabilidad absoluta en el tipo de cambio -concluye- es imposible (...)”. En Chile no existe estabilidad cambiaria. En poco más de tres años la paridad se movió desde \$745,21 alcanzados en febrero 2003, a los \$517,33 de abril 2006, en dependencia de los vaivenes en el movimiento de divisas. La revaluación del peso ha contribuido al logro del objetivo central del instituto emisor, mantener bajas las tasas de inflación.

La visión del FMI es, obviamente, absolutamente opuesta a la de la UNCTAD. Con relación a Chile, su informe anual no escatimó elogios para la política seguida, que es plenamente coincidente con sus formulaciones centrales. El documento calificó como “ejemplar” la conducta macroeconómica gubernamental. En particular, felicitó a las autoridades por su control del gasto público, ahorrar los recursos adicionales generados por el alto precio del cobre y su no intervención en el mercado cambiario. En abierta oposición a la realidad, textualmente afirmó que el tipo de cambio dejado al “mercado” favorecería la “fortaleza de las exportaciones no tradicionales”, las cuales sufren, al contrario, el impacto negativo de la revaluación del peso. Con el mismo esquema, planteó “liberalizar” las inversiones de los fondos de pensiones, como demandan las administradoras de AFP, formulación recogida en el proyecto de reforma del sistema previsional.

En su informe de 2005, el FMI prodigó alabanzas similares, mostrando así la plena continuidad de la política económica seguida⁵. Por lo demás, mecanismos como el del presupuesto estructural han sido propuestos en más de una oportunidad por el FMI.

⁵ Véase, “Lagos: el presidente “progresista” de la Concertación”.

De Pinochet a Bachelet: los ejes culturales de la dominación en Chile desde 1973 al 2006

ALBERTO MAYOL MIRANDA*

1. INTRODUCCIÓN

Mientras se escribía este análisis, ha muerto Pinochet. Ello no sólo modifica el orden de los factores de este año 2006, sino también el producto. Lo curioso es que, si somos positivistas, diremos que políticamente el caballero estaba muerto, políticamente muerto. Por tanto, su muerte física sólo genera la coincidencia entre lo real y lo aparente o, para ser más preciso, entre lo político y lo biológico. Y, de ser así, su muerte no significa nada. Pero no es así. Ni somos positivistas ni podemos asumir ese argumento. Más aún, la política y la biología suelen demostrar escasas y hasta inversas correlaciones. La muerte física es otro evento político en la vida de Pinochet y en la historia de Chile. De algún modo, su muerte biológica es renacer político, aunque sea temporal y sin futuro. Por supuesto, todo esto es más mérito de la muerte y sus misterios sociales que de factores políticos contingentes. El carácter ritual que sigue a la muerte es una manifestación de las enormes ambivalencias emotivas que supone la muerte de un sujeto para el resto. Pero, he aquí el punto, la muerte de Pinochet es, para Chile, un evento de la máxima ritualidad, para seguidores y detractores. La ritualidad viene marcada porque hay una enorme cantidad de energía social que debe ser ordenada, ritualizada, controlada. El ritual ordena el mundo, es un acto que evita el caos. Por eso la muerte de Pinochet está cargada de ritos, obligatorios y elegidos, deseados o no deseados. ¿Y por qué Pinochet es tan importante? ¿Por qué tantas energías se despiertan con la sola pronunciación de su nombre? ¿Por qué su muerte remece una sociedad que suspende sus rutinas para mirar el rostro muerto de un ex dictador? Quizás porque Pinochet ha sido la figura

* Sociólogo, magíster en ciencia política, U. de Chile. Licenciado en Estética, U. Católica. Dr© en Teoría Sociológica, Universidad Complutense de Madrid.

consular en la alineación las fuerzas políticas de los últimos años. Su muerte implica un nuevo re-examen de nuestro orden político.

El presente artículo pretende comprender precisamente ese orden político, orden constituido desde el Golpe de Estado de 1973 y que tuvo una consolidación en forma democrática luego del triunfo del “No” (a Pinochet) en el plebiscito de 1988. La “Concertación de Partidos por la Democracia”, en sus orígenes mera “Concertación por el No”, es la coalición política fundamental que permite seguir la historia de Chile de las dos últimas décadas. En una mirada superficial las formas de la nueva sociedad parecen emerger de los restos de la vieja sociedad. Sin embargo, mejorando la visión, no queda claro si hay acaso nueva sociedad y vieja sociedad o si acaso los lentos ritmos de la historia palpitan constantes en una misma dirección desde hace años. Este problema es el objeto de este artículo, que encuentra en la muerte de Pinochet una oportunidad para ir desde la simbología -que encarna el ex dictador- al orden social y político. La trayectoria es reconstructiva, avanzando desde el síntoma a las explicaciones.

2. PINOCHET Y EL ESPÍRITU DE LA DICTADURA

La muerte de Pinochet ha renovado emociones ocultas, ha devuelto la mirada sobre las cuestiones más profundas de nuestra politicidad. Y eso de algún modo es positivo. Desapareció la importancia de las compras navideñas, al menos por unas horas. Se suspendió el nuevo orden de nuestras rutinas y apareció el interés por conocer detalles de algo sobre lo cual no hay detalles: Pinochet se murió como un viejo más. Pero todos nos quedamos frente a los televisores esperando detalles. Probablemente, más que detalles, todos esperaban que todo esto tome sentido, pues no sólo hay justicia pendiente, sino también significados que esperan sedimentarse, una sociedad que quiere elaborar un trauma y la historia de una enfermedad que se confundía con querellas y juicios.

Por algún motivo, en cierto punto de la historia las acciones políticas de Pinochet se desanclaron del significado histórico de Pinochet. Y, por otro lado, las acciones políticas de otros actores, se anclaron en Pinochet. En este sentido, la figura de Pinochet es inquietante. Para ser más claro, ejemplifiquemos la distancia entre la ‘obra’ de Pinochet y su significado histórico. La ‘obra’ de Pinochet no parece explicar el peso de su nombre. Pinochet no organizó el golpe, sino que se subió a última hora. Pinochet no estructuró el nuevo modelo económico, incluso parece que no le gustaba, pues no calzaba con su mentalidad autárquica y fascista. Pinochet, además, nunca fue un gran estadista y siempre fue más bien un tipo mediocre. Sin embargo, él representa el golpe, él representa el nuevo modelo económico, él es la carne de una real ‘reconstrucción nacional’. Porque en Chile no hubo sólo golpe de estado y un nuevo modelo económico. Hubo un proyecto de transformación articulado desde la Junta de Gobierno. Esto se aprecia en la “Declaración de Principios de la

Junta de Gobierno” de 1974. Me permitirá recordar con cierto detalle esta declaración. En ella se señala:

- la necesidad de una *reconstrucción nacional*, pues la crisis económica —se señala— es sólo un símbolo de algo más profundo: *el impropio cuestionamiento de valores superiores*. La reconstrucción nacional se inspira en la convicción de que la vía socialista es una falsa alternativa para países subdesarrollados y que es además una opción contradictoria con las raíces profundas de Chile. Como señala el texto: “la alternativa de una sociedad de inspiración marxista debe ser rechazada por Chile, dado su carácter totalitario y anulador de la persona humana, todo lo cual contradice nuestra tradición cristiana e hispánica. Además, la experiencia demuestra que el marxismo tampoco engendra bienestar, porque su carácter socialista y estatista no es apto para un adecuado desarrollo económico” (Declaración, 11 de marzo de 1974).
- La certeza de que la vía del diálogo y el entendimiento con el comunismo es una ruta equivocada e ingenua, que Chile ya ha experimentado y que no debe volver a repetir.
- El reconocimiento de una tradición patria de corte cristiano que debe ser reestablecida, pues su pérdida ha sido —al menos en parte— la causa de la crisis que se ha vivido.
- El establecimiento del derecho natural (cristiano) como fundamento superior al del derecho estatuido estatalmente.
- La restricción del Estado a funciones imposibles de cumplir por organizaciones intermedias (Defensa Nacional, Policía y Relaciones Exteriores) o a empresas de corte estratégico. Todo lo demás debe estar en manos de privados o de organizaciones apolíticas de corte intermedio.
- La oposición entre Estado y libertad como elemento central de la nueva doctrina.
- El fomento de una noción de Estado que ayude a promover la libre iniciativa económica de los individuos
- La importancia de la unidad nacional como el objetivo central y la consecuente negación de toda mirada que pretenda dividir la sociedad en clases sociales. Al respecto, se recurre a una fórmula de corte religioso, pues se menciona la importancia de la integración espiritual de la nación o “La *integración espiritual* del país será el cimiento que permitirá avanzar en progreso, justicia y paz, recuperando el lugar preponderante que los forjadores de nuestra República le dieron en su tiempo dentro del continente. Reivindicar y sembrar en el corazón de cada chileno el ejemplo de nuestra Historia Patria, con sus próceres, héroes, maestros y estadistas, debe transformarse en el acicate más poderoso para despertar el verdadero patriotismo, que es

amor entrañable a Chile y deseo de verlo nuevamente grande y unido” (Declaración, 11 de marzo de 1974).

- La existencia de un Sistema Nacional de Planificación que integre procesos para la obtención de objetivos comunes, vinculando el desarrollo con la seguridad nacional.
- Se reconoce la necesidad de un gobierno autoritario e impersonal. “Conforme a la inspiración portaliana que lo guía, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía. Despersonalizará el poder, evitando todo caudillismo ajeno a nuestra idiosincrasia” (Declaración, 11 de marzo de 1974).
- La necesidad de un cambio ético que ‘restaure la dignidad del trabajo’ y que promueva una ‘moral de mérito y esfuerzo personal’ que evite las asociaciones negativas del ‘éxito personal’, que se promueven con mentalidades mediocres
- La consagración de una visión amplia de la ‘seguridad nacional’, que incorpora todo lo público como objeto de políticas de seguridad. Esto es lo que permite a la Junta de Gobierno apelar a un plazo indefinido para su mandato.
 - o “Las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazo a su gestión de Gobierno, porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente al país, requiere de una acción profunda y prolongada. En definitiva, resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos. Pero más allá de eso, el actual Gobierno ha sido categórico para declarar que no pretende limitarse a ser un Gobierno de mera administración, que signifique un paréntesis entre dos Gobiernos partidistas similares o, en otras palabras, que no se trata de una “tregua” de reordenamiento para devolver el poder a los mismos políticos que tanta responsabilidad tuvieron por acción u omisión, en la virtual destrucción del país. El Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, aspira a iniciar una nueva etapa en el destino nacional (...). No obstante, aunque no fije plazo, la Junta de Gobierno entregará oportunamente el poder político a quienes el pueblo elija a través de un sufragio universal, libre, secreto e informado. Las Fuerzas Armadas y de Orden asumirán, entonces, el papel de participación específicamente institucional que la nueva Constitución les asigne, y que será el que debe corresponder a los encargados de velar por la Seguridad Nacional, en el amplio significado que dicho concepto tiene en la época actual”.
- Despolitización de las sociedades intermedias, evitando toda instrumentalización partidista.

- Promoción de un nacionalismo de corte unitarista, arraigado en la cultura cristiana, que afirma la diferencia de Chile con otras culturas.
 - o “En un mundo cada vez más interdependiente, el Gobierno de Chile plantea su carácter nacionalista en la seguridad de que nuestra Patria constituye un todo homogéneo, histórica, étnica y culturalmente, no obstante su disímil geografía. No afirmamos que Chile sea superior o inferior a otros pueblos. Sostenemos que es diferente, en cuanto tiene un nítido perfil que le es propio”.
- Vinculación del nacionalismo con la integración familiar, ubicando a la mujer en un rol espiritual superior, como persona llamada al sacrificio y la formación de una juventud nacionalista.
 - o “En la familia, la mujer se realza en toda la grandeza de su misión, que la convierte en la roca espiritual de la Patria. De ella sale también la juventud, que hoy más que nunca debe incorporar su generosidad e idealismo a la tarea de Chile. El coraje que mujeres y jóvenes demostraron en los últimos años, como baluartes del movimiento cívico que culminara con el pronunciamiento militar del 11 de Septiembre, debe ahora convertirse en fibra patriótica para afrontar el duro sacrificio que nos espera por delante, y en fuerza creadora para transformar en realidad una honda esperanza” (Declaración, 11 de marzo de 1974).

El proyecto descrito en general fue exitoso. Probablemente los grandes valores patrios no se conservan con toda la fuerza militar deseada por los autores de esta declaración. Pero la fragilidad de la noción de lo público, sometida a los embates de una privatización de la actividad económica, de una privatización del espíritu público en beneficio de una mirada donde la nación es la familia y ésta es la mujer, además de una anulación de los rasgos de politicidad de los grupos de personas reunidos en ‘organizaciones intermedias’ y de una sacralización del poder vinculando al Estado con la Nación y a ésta con una comunidad cristiana; la fragilidad de lo público, decía, evidentemente se consolidó y dejó paso a un vacío respecto al sentido y significado de ella misma. Ya no se trata de rechazar lo público, sino de no saberlo pensar.

De este proyecto, probablemente sólo la energía nacionalista y cristiana tenga una raíz pinochetista, cuando mucho. Pinochet no pensó el golpe. Pinochet no pensó el modelo económico. Su único aporte doctrinal estuvo en el lado franquista que tuvo el golpe, en la ideología nacionalista-militarista-religiosa. Pero aunque Pinochet no haya sido el creador del proyecto, de todos modos se transformó en el portador

del carisma de todo el proyecto, se transformó en el *espíritu* de la dictadura. Pinochet fue capaz de algo notable: convertir a todo Chile en un regimiento. No en vano le decían (y hay quienes le dicen) “mi general”. Pero algo pasó en el camino —y no sólo fue la vejez— que Pinochet pasó de ser “mi general” a ser “el Tata”. Eso se produjo en el trayecto hacia la democracia, trayecto en el que pasó a ser el abuelo patriarca de este Chile, pero ya no el padre. Y cuando el Tata hubo muerto, todo estuvo permitido. Pero sólo fue una mala reconstrucción del clásico deseo de asesinar al padre que posee todos los poderes. Pero este padre ya no tenía todos los poderes, era simplemente el Tata. Por eso fueron sólo algunos los que se alimentaron de esa ficción y quemaron un par de neumáticos en homenaje a la rebelión que nunca hicieron. Por supuesto, en medio de los rebeldes, el éxito del modelo de Pinochet logró verse reflejado demostrando su potencia: varios ‘manifestantes’, en vez de atentar contra la propiedad pública y privada, prefirieron más bien saquear tiendas con productos de alta demanda y simbología consumista, para así pasar una feliz navidad. La hipótesis del acto político es obligatoriamente reemplazada por la más compleja, pero burda, necesidad de romper el orden social para poder acceder al orden social. Símbolo de los tiempos.

3. LA CONCERTACIÓN: CONTRA EL NOMBRE DEL PADRE

a) El cemento de la Concertación

La Concertación ha cumplido ya 16 años y 9 meses de gobierno consecutivo. Con ello, ha superado los 16 años y 6 meses de Pinochet. No quiero comparar. Mala idea sería comparar gobiernos elegidos por el pueblo con un gobierno dictatorial. Pero no se trata de comparaciones, sino de conteos. La Concertación lleva muchos años en el poder y eso sencillamente supone examinarla detenidamente para conocer las grietas por las cuales llegará el día en que, más temprano o más tarde, se dividirá. No se trata de jugar a profecías. Se trata de asumir lo obvio: nada es eterno.

¿Cuál es el cemento que une a la Concertación? Lo que une es una religión, mejor dicho, el nombre del padre de este Chile actual. Es Pinochet. La Concertación encuentra su núcleo en la Concertación de Partidos por el No. Su religión es contra la figura de Pinochet, quien es su eje. Su eje simbólico central se refleja en la siguiente ecuación:

Pinochet = Asesinatos = Bajeza Moral Concertación = Lucha contra Pinochet = Altura Moral Pinochet = Mal / Concertación = Bien

En 1988 decimos que ‘sí’ o decimos que ‘no’. Y es un ‘sí’ o un ‘no’ a Pinochet. “Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz”, decían en la campaña ganadora, mientras un joven caminaba hacia la cámara, cruzando un puente, pasando de una era a otra. Ese joven se rebelaba al padre de este Chile. Tal vez no es casualidad que la mayor proporción de voto concertacionista por tramo de edad y sexo se encuentre en los hombres de entre 35 y 45 años, quienes en su momento vivieron la épica de la rebelión contra Pinochet. Pero por cada joven sin poder que se rebela contra el nombre del padre, habrá un atavismo: la freudiana construcción de una historia de tótemes y tabúes que ilustrarán (cuando hay éxito) el reemplazo del hijo por el padre, esa sutil venganza que es también una imitación.

Esta ecuación, la de ser el ‘anti-Pinochet’, en general ha sido beneficiosa para la Concertación. Cada vez que se está perdiendo una batalla, se saca el Pinochet debajo de la manga y se empata el asunto, aprovechando el peso incontrarrestable del dolor como razón en una cultura cristiana como la chilena. El dolor, dice Nietzsche, tiene el enorme mérito de convertirse en el cristianismo en una moneda de cambio. Se cambia por culpas, por redención y hasta por razones. El débil y doliente transforma el dolor en mérito en el marco valorativo propio del cristianismo. La Concertación opera bajo la influencia de este mismo mecanismo. Sus íconos del dolor son un crédito político y económico, son una forma de ‘empatar’ el mundo cuando es necesario hacerlo. No deseo con esto minimizar el problema del dolor, sino más bien denunciar una fórmula concertacionista que ha funcionado instrumentalizando tanto el dolor como su capacidad de intercambio.

La religión anti-Pinochet se es una relectura del mito cristiano. Expresa semejanzas importantes con la descripción freudiana del cristianismo, según la cual el hijo reemplaza al padre por pura identificación. Se odia y admira al padre dueño de todos los poderes (el placer y la violencia) y se le quiere asesinar. Pero al asesinarlo, se quiere también comer de su carne para poder ser como él, para ser el nuevo portador de todos los poderes. Para Freud, la llegada de Cristo-hijo frente a Dios-Padre permite ligar el deseo de venganza (reemplazar al padre) y la admiración (ser como el padre). Por eso Cristo es hijo de Dios, pero es Dios hecho carne a la vez. Cristo finalmente reemplaza a su padre y construye la religión del hijo, que modifica en parte la religión del Padre, pero que en definitiva es una continuación.

En la religión concertacionista, profundamente cristiana después de todo (aunque a ratos en las antípodas), el hijo reemplaza al padre por oposición, al menos al principio. La Concertación es la unión de todos los hijos contra el padre, como en el asesinato primitivo descrito por Freud. Se rebelan contra el padre del nuevo Chile, contra Pinochet. Se unen contra él y someten sus deseos personales en la búsqueda de eliminar al que tiene todo el poder. Pero luego de derrotarlo, vendrá el deseo de reemplazarlo, la búsqueda de la figura que concentre toda la autoridad que se extraña de ese padre poderoso.

El Dios Padre Todopoderoso del Chile concertacionista de los noventa es Pinochet. Pero ese Dios se desgasta y hasta desvanece desde The Clinic y el Banco Riggs. Por eso, lo que debemos observar es el fenómeno de la renovación de esta religión, el movimiento transvalorador esperable, que cambie los poderes y reproduzca más o menos las formas.

En la religión de Cristo, él trajo un mensaje de paz para relajar a la comunidad religiosa frente al temor a las venganzas de Dios Padre, a sus sanciones y molestias. Es un mensaje de renovación. En la construcción simbólica del Chile sin Pinochet veremos como es Lagos quien cumple el papel de reemplazar al padre, de renovar el mensaje de la Concertación en la necesidad de articular una nueva era. Además, el rol cristológico de Lagos era muy complejo, pues en el caso del cristianismo la figura del hijo de Dios es afirmativa del padre. En cambio, Lagos es representante de una religión basada en el estar en las antípodas, en ser opuestos al padre de esta nueva patria. Por eso su mensaje de renovación debía ser de reemplazo total del padre. Ya se había construido la religión de 'lo que no somos' (Concertación por el No), pero no se había construido la religión de 'lo que somos'.

Por supuesto, tampoco era todo tan mecánico y simple. Porque en medio del mensaje de renovación había que lograr convencer a la comunidad de que todo lo que continuaba siendo igual o muy parecido a la época de Pinochet, era en realidad obra de los hijos.

b) Auge y ocaso de Pinochet post-Pinochet: crónica de su muerte en vida.

Los gobiernos de la Concertación están marcados por Pinochet. Aylwin y su 'justicia en la medida de lo posible' como eslogan moral, con su culposa mirada del libremercado, con sus indicadores país no muy óptimos, resulta invisible en todos estos aspectos, que son en rigor los que le pertenecen, su doctrina. Su única visibilidad es ser el baluarte moral de 'no ser' Pinochet, de ser el primero en 'no ser' Pinochet. Es decir, 'no ser Pinochet' pasa a ser un mérito. Por su parte, Frei se encuentra con un Pinochet ya cada vez más mal visto, ya cada vez más en retirada, ya cada vez más incómodo para la derecha y cada vez mejor para la Concertación. Es el mejor momento de unidad y fraternidad de la comunidad concertacionista, por una razón simple: Pinochet parece ser poderoso, pero todos saben que ya no lo es tanto. Al aparentar ser poderoso, consumarse como su opuesto tiene algún mérito heroico. Se tienen todos los beneficios de tener a Pinochet como figura viva e intensa. Pero al mismo tiempo no hay ningún costo importante en ello. En todo caso, Frei ya no tiene el mérito de no ser Pinochet, pues la gente se pone más exigente o quizás simplemente pedigüña. Frei tiene el mérito de ser Frei, de ser el hijo de su padre, de ser el hijo de un hombre que fue oposición de Pinochet y que fue un presidente de esos importantes, aunque sea difícil enterarse de la razón para ello. Más aún, Eduardo Frei junior nunca entendió lo que su hermana decía: la importancia de convencer a

todos de que Pinochet había matado a Frei padre. Ese habría sido su triunfo completo, pues se habría consumado como hijo del dolor y se podría haber construido una trinidad (Frei Padre, Frei Hijo y el Espíritu DC). Pero Eduardito lo comprendió tarde, muy tarde, como diez años después, cuando ya empieza a sonar raro que Pinochet tenga la culpa de todo lo que se nos ocurra. Y suena raro porque Pinochet no da para tanto, como bien insistió siempre Leigh.

Lo cierto es que mientras Eduardito (o Marita) gobernaba, Pinochet avanzaba hacia el retiro, tanto de sus roles militares como cívicos. Así y todo, su estatus de senador vitalicio lo mantenía encarnado en el sistema. Pero en Londres se acabó todo. Pinochet fue detenido y sometido a un régimen de vaciamiento de carisma, que en rigor fue un ayuno propio. Volvió a Chile humillado y ofendido y su último acto de huaso ladino fue pararse en el aeropuerto y caminar, demostrando que no estaba tan enfermo. Pero ya no estaban los tiempos para quedar de astuto. Sólo quedó de mentiroso y cobarde. El extirpador del cáncer marxista, el hombre que venció al marxismo internacional, de pronto era un hombre muerto apenas caminando.

El fin del gobierno de Frei estuvo marcado por la crisis asiática, lo que nos hace más occidentales por echarle la culpa a los orientales; por la agonía política de Pinochet, por la figura de Insulza como sostén institucional y por una elección presidencial que hizo pasar un buen susto al PRI, perdón, a la Concertación. Lavín y sus rasgos deslavados, sin personalidad y con una ideología nihilista políticamente (donde la política son puras cosas sin importancia), encarnaron el decadentismo exitoso en medio de una Concertación que no tenía objeto de existir dado que crecientemente Pinochet se apagaba y decirle que 'no', ser su antípoda, carecía de toda gracia, sobre todo porque la Concertación tuvo que decirle que sí en Londres y eso le quitaba todo su carisma. Finalmente Lagos gana, pero apenas y con una fuerte sensación de derrota se inicia un gobierno que dio tumbos unos buenos meses.

Pero de pronto Lagos encontró el filón. Ya no se podía ser el 'dedo' de Lagos, ya no se podía amenazar a Pinochet, no tenía sentido atacar al muerto. ¿Cuál era la solución? Renovar la religión opositora de la Concertación en una religión propia. Quitar el énfasis en la lucha contra el mal y proponer el énfasis en la lucha por el bien. Lagos, además, tuvo suerte. Luego de la crisis por corrupción en el MOP, donde él mismo podía verse envuelto; y luego de una oleada de casos de corrupción, que situaron a la Concertación en la zona del mal, Lagos finalmente salió sin daño. La ecuación inicial era complicada.

Caso MOP + Sobresueldos + CORFO = Concertación Corrupta

Pero aparecieron los milagros. Algunos creen en San Belisario, pero eso es ser muy mal pensado. Una denuncia que se dirige hacia Jovino Novoa fundamentalmente, por actos de pedofilia, sume a la Alianza en crisis moral.

J. Novoa + UDI = Pedofilia = Abuso sexual = Abuso del poder
 Alianza = Dinero
 Dinero + Abuso sexual + Políticos + Alianza + UDI = Poder corrupto moralmente
 UDI + Pedofilia + Fantasma de Pinochet = El Mal

Nuevamente la Concertación respiró. Además, Lavín se empeñaba en demostrar que todos sus logros como alcalde de Las Condes habían sido pura casualidad, mientras hacía una gestión pésima en Santiago y demostraba que se puede vender algo vital, como el agua, para comprar cosas irrelevantes, lo que de todos modos es un signo de los tiempos. Con todo esto, la ecuación concertacionista volvió a articularse, lo que se sumó al impresionante aumento en el precio del cobre. Lagos, ya empujado por el precio del cobre y un presupuesto más holgado, fue imparable y rompió la barrera del 70% de aprobación. Más aún, la Alianza se empeñaba en despreocuparse de la legitimidad como rendimiento político relevante. No les importaba que les dijeran que su poder era el del dinero, ni captaron la matriz de abuso que esconde la denuncia de pedofilia convertida en verosímil y en una crisis moral.

Lagos, por su lado, seguía en estado de gracia y de ahí en adelante le apuntó a casi todo. Después de mucho pensarlo le dijo 'no' a Estados Unidos en Irak y con ello le dijo 'no' a otro malvado (Bush) y el carisma comenzó a volver. Además, lo que revela nuestra irrelevancia, Estados Unidos casi ni se desquitó con nosotros y nos firmó el Tratado de Libre Comercio. Bueno, o tal vez sí se desquitó. Luego apareció Lagos contra Bolivia y Perú, volviéndose a las raíces portalianas, golpeando la mesa al 'cholo traidor' y al 'auquérido metamorfoseado'. Y de pronto todo se despejó. Lagos había intuido o comprendido que Chile estaba sin Pinochet y que o se revivía a Pinochet o se le reemplazaba. Y claro, porque la estructura semántica que acompañaba a la Concertación con Pinochet le resultaba muy beneficiosa.

Estructura de la Concertación con Pinochet

Concertación / Pinochet
 Democracia / Dictadura
 Bien / Mal
 Dolor / Agresión
 Estatura Moral / Bajeza Moral
 Manos limpias / Manos sucias

“Gana la gente”, de Aylwin era un mensaje orientado a democratizar el discurso. Pinochet rondaba como un fantasma en ese eslogan. Era el que impedía que ganara la gente. Pero cuando ya se llega al “Crecer con Igualdad” de Lagos, Pinochet se había perdido en los senderos de la caída. Y “Crecer con Igualdad” no era una promesa, era sólo un mensaje: no voten por los ricos. De hecho, durante Lagos crecimos con más desigualdad (los textos de los años anteriores de esta revista lo revelan). Pero el ‘Crecer con Igualdad’ existía sobre todo para construir la tesis de la dictadura perfecta, que apareció por entonces y que era una brillante argumentación con fines políticos.

Alianza = Ricos = Poderes Económicos
 Gobierno de Alianza = Poder Político + Poder Económico = Dictadura Perfecta

La lucha de clases y su resentimiento tomaron forma electoral. Esto fue demostrado en nuestro artículo del año pasado en esta misma revista, mostrando el peso de la lucha de clases como factor estructurante de conductas políticas y electorales¹.

Pero de algún modo la tesis de la dictadura perfecta seguía siendo un intento por revincular a la Alianza con Pinochet, mediante la palabra dictadura. El mensaje es que hay formas de ser dictadura siendo electo. Y de otro modo también se dice que todo gobierno de quienes participaron en la dictadura será gobierno dictatorial. Por eso, en la lógica concertacionista, bastaba que los rivales de la Concertación ganaran una elección, para que estuviéramos en presencia de una dictadura. Con ello querían decir simplemente que

derecha + poder = dictadura

La llamaron la dictadura perfecta, no sólo por lo explícito que decían (la conjunción de dinero y poder), sino además por lo implícito (sería legítima). Obviamente el uso del término ‘dictadura’ en un asunto como éste no es políticamente óptimo, pues desnaturaliza el sentido socialmente instalado de un gobierno dictatorial como gobierno violento. La tesis de que se podía estar en dictadura en medio de elecciones y sin violencia como eje es una tesis extraña y políticamente inconveniente para la Concertación.

¹ Ver MAYOL, Alberto (2006): “Parménides y Heráclito en el Chile 2005: crónica de las trizaduras y persistencias de los grandes relatos” en *Revista Análisis de Año 2005*, pgs. 99 a 126. Departamento de Sociología, Universidad de Chile.

Pero al mismo tiempo que aparecía la tesis de la dictadura perfecta, Pinochet seguía desvaneciéndose y todas las tesis que incluían a Pinochet se debilitaban. La estructura discursiva de la Concertación sin Pinochet se enredó. Hubo varias alternativas que no fueron necesariamente exitosas. La siguiente es una que no prosperó, aunque se insistió bastante en ella.

<p style="text-align: center;"> Concertación / Alianza Democracia / Dictadura Electa Bien / Mal Gobierno del Pueblo / Gobierno de Ricos Estatura Moral / Bajeza Moral </p>
--

Esta estructura gozaba de un defecto, que de algún modo se produjo entre la ciudadanía. Hubo quienes articularon la siguiente ecuación:

<p style="text-align: center;"> Derecha = Ricos Gobierno de derecha = Gobierno de ricos Ricos no necesitan robar Gobierno de ricos = Gobierno no corrupto </p>

En rigor, este sofisticado (y probablemente falaz) discurso legitimaba algo más pedestre. Se trataba de la incorporación de la ciudadanía a un discurso más cínico sobre la política y mucho más orientado a resultados individuales, sobre todo económicos.

<p style="text-align: center;"> Derecha = Riqueza = Saben hacer riqueza Gobierno de derecha = Chile crece = Yo gano más = Yo consumo más = Soy mejor </p>
--

En el Chile del arribismo esta estructura tomó mucho sentido y probablemente fue una de las energías fundamentales de Lavín en 1999 y de Piñera en 2006. Todo esto en medio de un escenario donde la ecuación sobre la pureza moral se había destruido por lado y lado.

SI

Alianza = Pinochet = Asesinatos = Dictadura

Alianza = Poderosos = Ávidos de más poder

Alianza = Ávidos de poder + Asesinos + Dictadores = Bajeza Moral = Manos sucias (crímenes)

SI

Concertación = Corruptos

Concertación = Apatitados = Ávidos de poder

Concertación = Bajeza Moral = Manos sucias (dinero)

ENTONCES

Concertación = Manos sucias (corrupción)

Alianza = Manos sucias (DDHH)

Manos Concertación = Manos Alianza

En medio de este empate, los movimientos de cada sector eran en el margen. Se trataba de ganar la pequeña batalla contingente instalando el pecado del otro como el esencial de la moral cívica. Y en medio de este empate, la orientación nihilista de Lavín al orientarse a la mera 'cosa' tuvo sentido. Pues en medio de la nada, las cosas son algo. Lagos proponía un discurso republicano carente de todo interés en medio de una fuerte indolencia por la moralidad política. No sólo Chile, sino que el mundo entero parecía moverse al ritmo de la indolencia y parecía que se habían acabado los sucesos importantes. La historia perdía densidad y sólo las Torres Gemelas nos sacarían de ese sopor. Pero eso todavía no ocurría y Lagos tenía que enfrentarse al imperio de las cosas. Para colmo, Lagos representaba una mirada secular en medio de un país que prefiere pensarse cristiano, en lo que Lavín le sacaba grandes ventajas. En este punto, ya arrepentido, durante la campaña Lagos dijo, en un absurdo total, que él era mejor cristiano que muchos cristianos aun cuando no creyese en Dios. Muy en su estilo, en vez de lograr decir que él era cristiano, más bien terminó retando a la gente por no serlo suficientemente.

Pero Lagos terminó siendo capaz de demostrar en qué sentido era Cristo, a pesar de no ser cristiano. Descubrió que el nombre del padre del Chile de los años noventa era el de Pinochet y que ese nombre estaba quedando vacante. Decidió tomar ese lugar, tomar ese nombre. Reemplazar el autoritarismo militar de Pinochet por un autoritarismo civil. Intentó articular la siguiente estructura:

Pinochet / Lagos
 Agresor / Defensor
 Militar / Civil
 Autoritario / Autoridad
 Fuerza Injusta / Fuerza Justa
 Castigo / Justicia
 Pasado / Presente
 Padre castigador / Padre Pacificador
 Espada / Paz

Esta estructura es la manifestación intelectual de que el ‘dedo de Lagos’ es la expresión del ritual transformador, el gesto del desafío al padre, de un hijo dispuesto a reemplazarlo.

Lagos se da cuenta de que es necesario construir esta oposición. Se da cuenta de la importancia del dolor, ese capital cristiano, en la vida política de este país. Y, como si fuera cristiano, transmutó el dolor en valor de cambio, en moneda canjeable por verdades, sentido y valiosos votos. La apoteosis de esta nueva mirada se revela en la mesa de diálogo, donde recurre a una mirada profundamente religiosa en el sentido más estricto del término. Si vemos algunas citas de su discurso final en la mesa de diálogo, apreciaremos este giro espiritual:

“Este *trascendente compromiso* sólo fue posible porque en un acto de coraje y generosidad, representantes de los abogados de los derechos humanos, de instituciones morales, de las víctimas y de las Fuerzas Armadas y de Orden dieron el paso de *sentarse juntos* y hacer frente a la verdad que había que buscar”.

“Nadie habría querido un *dolor semejante*. Pero es preciso no olvidar que *el dolor también hermana a los seres humanos*”.

“*Espero que el dolor de los hechos* que hemos conocido se nos transforme en *un motivo de fraternidad* y nunca más en una razón para el enfrentamiento”.

“Avanzamos como país hacia la *reconciliación* sin clausurar la memoria y sin renunciar tampoco a nuestros sueños. Sabiendo lo que nos ha ocurrido y teniendo la mirada adelante, en la construcción del porvenir”

El código espiritual y moral, el modo de cambio del dolor por fraternidad e integración, la búsqueda religiosa del ‘volver a unir’ (*relegare*) todo lo que estaba separado por el odio y la incomprensión; todo ello nos habla del tono religioso y fuertemente cristiano del discurso de Lagos, quien va abandonando el tono seco de la mera promesa, o el tono leguleyo de la República y se revincula a la energía que había dado fuerza a Pinochet: la autoridad, el sacrificio, el dolor. A Lagos sólo le faltaba arrebatarse el nacionalismo a Pinochet. Pero era cuestión de tiempo. Ya tendría ocasión.

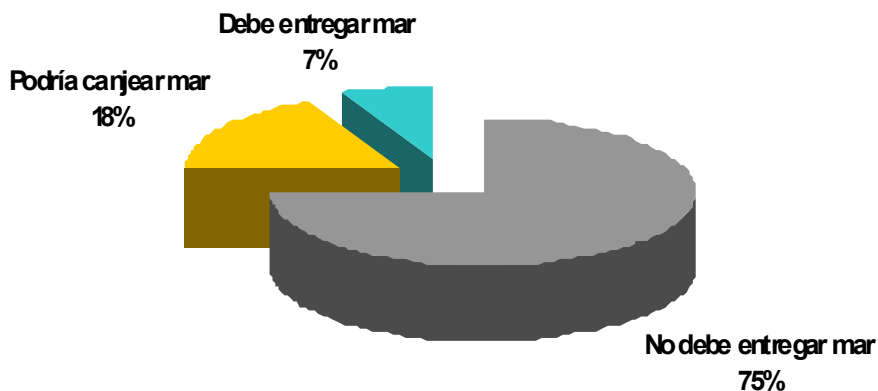
Con la desaparición simbólica de Pinochet con el caso Riggs, que desgastó a Pinochet más que los derechos humanos (lo que es un tema por sí solo), todo el lado negativo de la estructura queda vacío y sólo queda situado Lagos (en el positivo). De este modo la consolidación de Lagos es la llegada de Cristo, el reemplazo del nombre del Padre que pasa a ser innombrable (Pinochet). Lagos llega con un estilo

autoritario de corte cívico, un presidencialismo portaliano en su mayor dimensión, esto es, casi dictatorial. Lagos llega y hace palidecer de envidia autoritaria al director de El Mercurio, como cuando le manda la carta cansado de que publique noticias que manchen a la familia del presidente. Lagos, además, va y le cambia la firma a la Constitución Política de 1980, la que en general había sido considerada una Constitución poco democrática por la misma Concertación. Pero él considera que esa Carta era impura casi sólo por su origen, por su firma, por lo que el hecho de ser refirmada por él la dota de una nueva sacralidad. Su firma es mágica, transmuta la dictadura en democracia.

Finalmente, el desafío de Lagos a Bolivia, con su tono autoritario, golpeando la mesa, llena de orgullo a todos los nacionalistas y muestran a Lagos como el presidente que todos quieren tener. “El mejor presidente de la historia” dicen algunos entrevistados en focus groups del año 2005. “Balmaceda, Aguirre Cerda y Lagos, los mejores”, dice otro. O incluso sus detractores dicen: “me cargan los tipos de izquierda, pero debo reconocer que Lagos como presidente me encanta” dice una pinochetista en el mismo año, mientras otra añade: “es que tiene autoridad, me encantó cómo se le impuso al boliviano ese”.

La importancia del tono autoritario es evidente. Pero es más importante el vínculo de ese tono con un nacionalismo fuertemente arraigado, donde todo lo externo es catalogado en los cánones de la otredad y donde cuesta imaginarse que el extranjero aporte algo a este Chile profundo. Los datos al respecto son evidentes. Para comenzar, nuestra tolerancia a la posibilidad de entregar mar a Bolivia es bastante baja. Una proporción de 3/4 de los encuestados en el estudio Expert 2005 no se encuentra disponible para aprobar la posibilidad de otorgar a Bolivia una salida al mar.

Gráfico 1:
Disposición a la entrega de mar a Bolivia
Fuente: Expert, noviembre 2005.

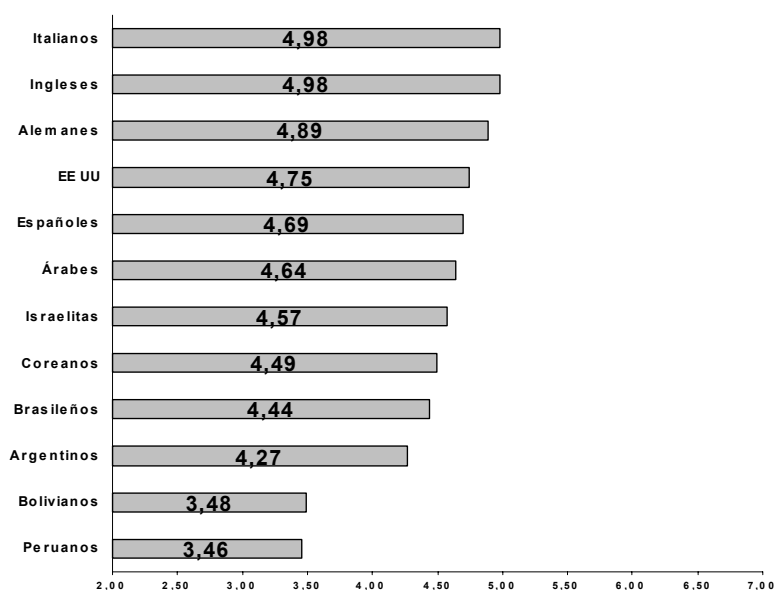


Pero nuestro nacionalismo no sólo se aprecia en la persistencia de rencores históricos por guerras del siglo XIX. También se aprecia en la mala evaluación en general de los extranjeros que viven en Chile. Ellos en general no son considerados un aporte, como se refleja en las notas que obtienen en la encuesta Expert 2006, donde se solicitó a los encuestados evaluar el aporte a Chile de inmigrante de diversas nacionalidades.

Gráfico 2:

Promedios de notas del nivel de aporte a la sociedad que juzgan los chilenos respecto a distintos extranjeros²

Fuente: Expert, abril 2006



Como vemos, si bien los bolivianos y peruanos están considerablemente más abajo que el resto, los promedios de notas en general no son altos. Los chilenos, en definitiva, evalúan mal o medianamente mal a los extranjeros en su calidad de migrantes, añadiéndose además que los tres últimos son los vecinos y los cuatro últimos son del subcontinente. De cualquier modo, ningún grupo de inmigrantes supera la calificación de 5 como aporte al país por parte de los chilenos.

² La pregunta que se realizó en la encuesta fue la siguiente: “En el mundo de hoy mucha gente se cambia de país para vivir. En Chile ha llegado mucha gente de otros países en los últimos años. Hay quienes consideran que esos inmigrantes son un problema y hay quienes los consideran un aporte a la sociedad. Le nombraré países desde donde vienen esos emigrantes y usted me dirá si han sido o son un aporte o un problema para Chile”. Para hacer más sencilla esta pregunta, se utilizó una escala de juicio que es una nota de 1 a 7, donde 7 es un gran aporte al país y un 1 es un gran problema para el país.

Todo esto refuerza la importancia de los gestos nacionalistas de Lagos. Incluso su rechazo a Bush es finalmente leído como un acto de soberanía y particularidad nacional. El “pobre pero honrado” de Condorito se transforma en “chico pero digno” para referir a este país que se siente importante por mostrar más convicciones que temor. Lagos encuentra ahí una nueva conquista y continúa en su labor de intentar ser el hombre que porte el carisma de la nueva era.

Pero el acto de reemplazo de Lagos sobre Pinochet no es casual. Ni siquiera es resultado de la simple voluntad y deseo del mismo Lagos con su egomanía a cuestas. Es también una condición estructural. Lagos es el primer presidente de la Concertación que debe vivir sin Pinochet. Por supuesto, Pinochet ha muerto recientemente, pero políticamente Lagos recibe a Pinochet muerto o, mejor dicho, agonizando. Pinochet muere políticamente cuando se transforma en un sujeto *objeto de derecho*, es decir, cuando vuelve al estatus de un ciudadano al cual los tribunales pueden juzgar, cuando no está más allá de la ley. Eso ocurre en Inglaterra y Pinochet evita el juicio allá, lo que redundaría en otro error más de su estrategia, pues de haber sido juzgado en Londres, sus rasgos heroicos (o de martirologio) podrían haberse enfatizado. Pero prefiere luchar por volver a Chile debilitado y recibirá nuevos procesamientos que, ahora sí, aceptarán los tribunales chilenos. Pinochet deja de ser un dictador, un líder, un político, un carismático más allá de la ley, pasando a convertirse en un acusado. Por lo demás, su comportamiento es en general patético, huyendo de los juicios, carente del orgullo y la impronta que todo buen dictador ha de tener.

Pero la muerte política de Pinochet no se produce sólo por ser juzgado. Se consume con su conversión en dictador latinoamericano a todo nivel. El orgullo chileno de tener un dictador que puede haber sido cruel y asesino, pero serio y respetuoso por no haber robado, además de institucionalista, de pronto se fisuró irremediablemente. Las cuentas del Riggs con Pinochet usando varios nombres distintos fueron suficientes para dejar una herida narcisista en el Pinochetismo y en todo Chile: habíamos tenido un dictador latinoamericano en estado puro, asesino y ladrón. Por eso, el ser ladrón fue lo peor de lo peor para los pinochetistas y para todo el país, porque consumaba un hecho molesto: que habíamos tenido una dictadura como la de los otros países latinoamericanos. Esto hizo que los 17 millones de dólares que se le han acreditado a Pinochet fuesen más importantes que los 3000 muertos o los 17 años de dictadura. Esa contabilidad es curiosa, pues la verdad es que la cantidad de dinero que se le ha encontrado a Pinochet no es ninguna maravilla. Incluso es poca plata. Es cruel decirlo en Chile con el nivel de ingreso que tenemos, pero hay que decirlo. Y, aun siendo poca, el escándalo ha sido enorme y eso destruyó su vida política más que ser dictador, que matar gente, que exiliar, torturar o que cualquiera de los actos de toda la gama de atrocidades o estupideces que ostenta el gobierno militar.

Si observamos lo que dicen los propios pinochetistas en el año 2004, en plena muerte política de Pinochet por las cuentas en el Riggs, veremos que hay una ambivalencia entre intentar legitimar la riqueza del general o virar hacia una crítica o al menos hacia la sospecha. El intento por legitimar lo ocurrido con Pinochet viene por el lado de que “él era distinto porque fue presidente con el pronunciamiento y tenía que defenderse porque el día de mañana lo echaban del país y no lo iban a recibir en ninguna parte”. Ese discurso, ostensiblemente eufemístico, legitima toda extracción de dinero como ‘protección’ frente a venganzas futuras. Sus cuentas de ahorro eran razonables y eran justa protección por los costos de su obra sacrificial, que sería incomprendida en el futuro. Pero esta defensa no fructifica, pues otro hablante de la misma entrevista grupal (todos pinochetistas) señala: “yo lo único que espero de este asunto es que Pinochet trate de justificar lo que más pueda esas platas”. La solicitud revela un estado psicológico de defensa, donde sólo se quiere una buena explicación para poder creerle al propietario de un afecto. Pero otra hablante, también pinochetista –como hemos señalado-, agrega: “a mí me da una rabia, me decepciona, quiero creer que no lo hizo, pero no lo sé”. Otra defensa emerge en este punto: “yo creo que esas platas son las que salieron cuando salió el golpe, los anillos y esas cosas”, “había muchos empresarios que lo apoyaban demasiado. Yo creo que gran parte de esa plata sale de ahí tratando de ser lo más objetivo”. El problema es que el exceso de versiones y posibilidades no aporta a resolver el asunto por parte del grupo. De hecho, un enorme cuestionamiento aparece en contra de la hipótesis de la ayuda a Pinochet por empresarios que lo vieron como un salvador:

“pero volvemos a lo que hablábamos al principio. Habiendo tanta pobreza, por qué esa gente en vez de ayudar tanto al Pinocho no creó más empleos, no sé (...). Por qué no se dedicó a la pobreza”.

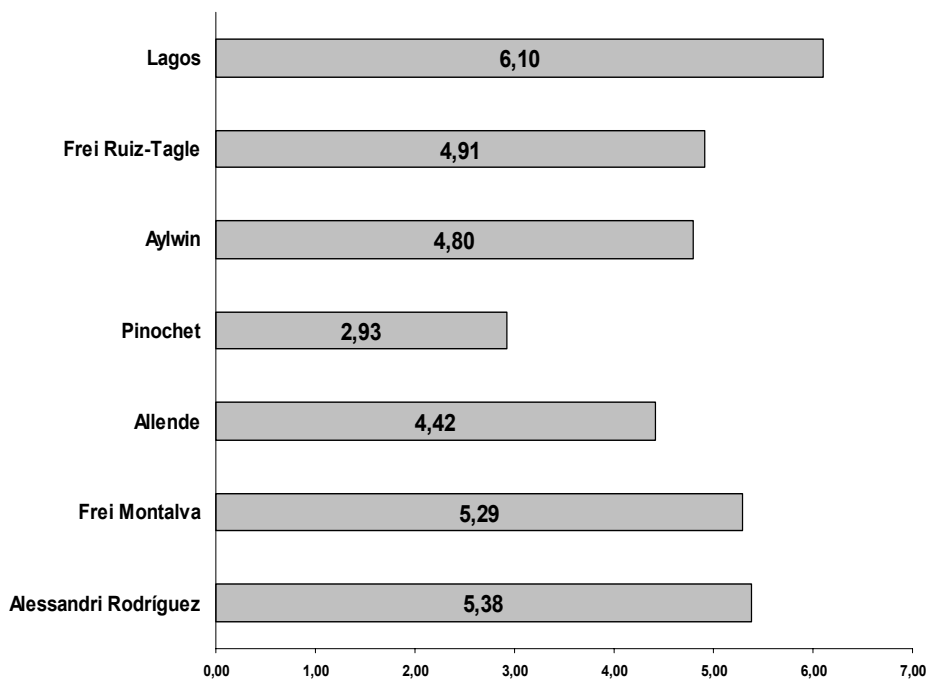
Este cuestionamiento evalúa la lógica sacrificial de los otros hablantes. Para todos Pinochet hizo un acto salvífico y frente a ese acto muchos lo apoyaron económicamente. Pero incluso eso, dice este hablante, no corresponde al acto sacrificial. Los empresarios y millonarios debieron apoyar el proyecto, debieron ayudar al país. No se trataba de ayudar a Pinochet, como pagándole un servicio. Esto demuestra que el dinero mancha a Pinochet irremediablemente pues cuestiona la tesis sacrificial, que es la única que dignifica sus actos y su gobierno.

Y ante este golpe frontal contra la credibilidad de Pinochet, malamente se ejecuta una defensa –la última- que no prospera: “él no sabía lo que había”. La respuesta es simple: “No, si a Pinochet le pasaban esa plata y la depositaba”.

Este dolor de pinochetistas, acreditando el hecho de que el acto sacrificial y desinteresado del golpe no era tal, se constituyó en la marca más dura que consolidó

la muerte política de Pinochet. Esa muerte llegó a plasmarse en el hecho de que en el año 2006, en una encuesta del mes de abril, al evaluarse los gobiernos de los últimos presidentes (retrocediendo hasta Frei Montalva), Pinochet fue el único que bajó de promedio 4,0 y se distanció enormemente de Allende, separándose las trayectorias de ambas figuras y acreditándose su pérdida de carisma.

Gráfico 3:
Evaluaciones a la forma en que ejercieron el cargo
los últimos 7 presidentes
Fuente: Expert, abril 2006.



Estos datos ilustran la evidente muerte política de Pinochet al momento de realización del estudio. Allende, su némesis tradicional, le saca casi dos puntos y es Pinochet el único que queda bajo la línea divisoria del 4, que en Chile marca claramente

una línea de división por nuestra tradición de calificaciones con escala 1 a 7, donde el 4 es el inicio de la zona de aprobación.

Pero hay un Pinochet que siempre vivirá políticamente en Chile. Es el mismo Pinochet que resucitó en su funeral, el Pinochet de la doctrina autoritaria de la lucha contra el caos. Eso mismo se apreció en el estudio cualitativo del 2005, donde de pronto aparece la reivindicación del rol autoritario de Pinochet.

“yo soy de la juventud sufrida de ese tiempo porque si queríamos salir era de toque a toque. Ahora el toque te lo dan los delincuentes”

“yo no podía gritar mis ideales o ir a una fiesta, es cierto, pero si no hubiera sido así la cosa no estaría organizada”

“yo creo que nos hace falta otro gobierno militar, por la delincuencia”.

En esta visión la violencia es organizadora, implantadora del orden y la seguridad. De hecho, señalan: “es cosa de ver cómo tratan a los profesores”, a lo que se responde: “en un gobierno militar eso no pasa”. Esta mirada autoritaria queda refrendada no sólo en gente de derecha, sino además en concertacionistas. En una entrevista a un ex sindicalista socialista, quien perdió dos hijos en dictadura, emerge la misma matriz que asocia la democracia con debilidad:

“Yo pienso que la delincuencia es como un desquite del pueblo (...) en relación a los años que pasó de la dictadura, del hambre que pasó, las miserias que pasaron en tiempos de Pinochet, entonces ahora como que se quieren desahogar, entonces desgraciadamente en democracia es más permisible todo, entonces eso hace que el pueblo cometa errores”.

En otra entrevista, un hablante ex comunista replica esta misma base autoritaria para mostrar como la ausencia de agresividad es un error.

“por eso no te hablo de Allende como un gran presidente. Allende no fue un mal presidente... ¿sabes cuál fue el error de Allende? Mano dura no la tuvo nunca, demasiado conciliador con esto, con lo otro. ¿Conclusión? Al final hizo bien suicidándose, hombre, valiente yo lo admiro”.

En este universo simbólico, el de la mano dura, es donde las formas de Lagos se ajustaron bien a la cultura política de nuestro país. Tanto Pinochet como Lagos interpretan a su modo esta visión de mundo, donde Chile necesita autoridad por su inmadurez y ausencia de capacidad para organizarse desde la horizontalidad. Sólo el mando, las órdenes y en definitiva la violencia son fuentes de orden social. Este

Chile profundo es una fuente de conservadorismo clásico, de búsqueda de regulaciones de todo tipo. Un Chile difícil de interpretar, pues no es el Chile del libremercado, no es el Chile de la modernización cultural, no es el Chile reconstructor de democracia; sino más bien, es un Chile que reproduce un orden tradicional a partir de una serie de interpretaciones que le permiten pensar la realidad de esa manera, mientras el país se mueve en otras direcciones. Hay una fractura sociopolítica que se rellena de mitos cristianos y de historias de épica militar. Es un Chile culturalmente colonial, una especie de residuo permanente. Frente a la fractura sociopolítica que se produce entre un proceso de democratización sobre bases autoritarias, que se suma a la fractura que supone un modelo económico carente de legitimidad; la sociedad reacciona poniendo sentido sobre esas fracturas, haciendo ruta en el acantilado, entablando puentes. Pero ese sentido construido, esos puentes, son mitos unificadores basados en el dolor y la violencia, donde deambula el fantasma de la libertad y el pánico al caos por carencia de dominación. De este modo, las suturas de estas fracturas están hechas de historias con la forma colonial (militarismo y religión) como fundamento y sentido último. La política queda, así, reducida a rito legitimador, pues no hay rol alguno que cumplir en el proceso de evolución social, que operará con el automatismo de los tiempos (el mercado) y que luego será recodificado en las formas propias de las suturas de sentido existentes en este Chile profundo, esas suturas hechas de cristianismo (o cultura del dolor como virtud y unión) y deseo de violencia pacificadora (o militarismo).

4. PINOCHET Y EL ESPÍRITU DE LA DEMOCRACIA

La fuerza reactiva de la reconquista democrática en Chile está, en definitiva, marcada por la huida y el apego al estandarte moral de esta democracia: Pinochet. Por estandarte moral no se debe llegar a pensar en una descripción llena de elogios. Se trata simplemente de que el origen moral de esta democracia está en la dictadura y que su figura consular es Pinochet. De este modo, el ex dictador es 'espíritu' de la dictadura, pero es también 'espíritu' de la democracia, ya sea como eje mediante el cual se mueven las conciencias rebeldes que quieren borrar al padre de esta democracia post-dictadura, o sea como punto de origen de un conjunto de continuidades que hoy se detectan en todas direcciones.

El intento de Lagos fue en gran medida exitoso, pero no parece tener carácter de largo plazo. Lagos reemplazó al Padre durante un tiempo razonable, encarnó la figura espiritual que el chileno desea como núcleo de su nación y sus instituciones. Pero si acaso Pinochet se dirige a la extinción como figura mesiánica, probablemente Lagos perderá también sus poderes. Ser la antítesis de la figura central presentaba para Lagos una oportunidad de oro. Pero la figura central (Pinochet) se va esfumando y con Lagos fuera de La Moneda, su capacidad de persistir como opuesto se hace débil.

Muchos huelen la necesidad de ser el opuesto perfecto de Pinochet. Y el opuesto perfecto es ser 'exactamente distinto', es decir, parecerse en muchas cosas y diferenciarse radicalmente en otras. Para empezar, ser el opuesto perfecto en esta cultura sería ser víctima de violaciones a los derechos humanos. Pero ojalá tener un dolor que supere al de casi todo el resto. No es el caso de Lagos. En eso Bachelet lleva ventaja, ese era el espíritu de Gladys Marín y ha sido lo que desesperadamente los Frei trataron de armar para reconquistar el díscolo pueblo que les ha dado la espalda. Pero para no ser Pinochet se requiere ser en parte él. Tal y como a Carrera se le aparece un opuesto perfecto en O'Higgins (por haber semejanzas y diferencias), Pinochet necesita un opuesto de futuro. No se trata de ir a rendir honores al opuesto en el pasado, que es Allende, aun cuando muchos lo hayan hecho el día de la muerte de Pinochet. Se trata de la búsqueda de una figura que reemplace esa dualidad Allende/Pinochet, básicamente por el lado de Pinochet, que se ha transformado en el principio activo de todas las tensiones de nuestra ritualidad política. Es lo que hizo Portales en su momento, reemplazando las discusiones entre liderazgos militares, reemplazando los asuntos de la oligarquía, por una nueva estructuración de la dominación, por una nueva violencia presidencialista, enormemente formal e institucionalista.

Para terminar este punto, es necesario volver al núcleo. Hay dos elementos permanentes en las ecuaciones de la moral política chilena: el dolor y la violencia. No siempre están unidos, pero sin duda pueden estarlo. Sin embargo, toda la historia de Chile es recorrida por un atávico vínculo con la violencia creadora. No es tan raro. Ya lo decía Marx: la violencia es la partera de la historia. Pero en Chile es una violencia institucionalizada en las milicias, que avanzan sobre la esfera pública y la cubren de lado a lado. Probablemente el mayor golpe a lo público no provenga solamente de la privatización económica, hoy tan comentada. La reducción de lo público ha sido fundamentalmente reducción violenta, sometimiento permanente de lo público al juicio militar, mirada vigilante. De hecho, la privatización económica es hija de esta violencia militarmente institucionalizada. Las ecuaciones de violencia son añoradas. Son los mismos ciudadanos quienes apelan a ellas. La violencia es la carta ganadora para mantener el orden, para conservar a Chile, su unidad y su sentido. La ecuación de la dominación en Chile es fundamentalmente una ecuación de violencia.

Pero por otro lado, la ecuación de la legitimidad es la ecuación del dolor. Sólo el dolor sacrificial transmuta actos individuales en sociales. Es el dolor el que construye méritos políticos. Es el dolor lo que el pueblo encarna, es el dolor el que conquista las causas políticas. La legitimidad tiene la forma del dolor. Es el dolor la energía integrativa. Y más aún, es el dolor la energía femenina por excelencia en medio de esta cultura cristiana donde la mujer es centro de gestión privado del dolor, mientras el macho es centro público de gestión de violencia.

Esta característica central de la violencia y el dolor ponen problemas a la construcción de espacios públicos. El dolor es un 'activo político' que puede ser de grupos, pero que llega hasta los individuos. Debemos esperar siempre que el sujeto se pronuncie sobre su sufrimiento para saber el valor de las ideas, el valor del colectivo, el valor del proyecto, el valor de la sociedad. O son los dolientes los que se transforman en propietarios de lo público o son los violentistas organizados queriendo reconstruir la historia. Esas dos ecuaciones parecen ser un atavismo, donde la paz social es un punto intermedio entre la violencia organizadora y el dolor legitimante. Pues bien, veremos cómo sigue apareciendo en el Chile de Bachelet esta lógica de nuestra historia.

5. BACHELET: EL LADO NEGADO DE LA TRINIDAD

En la cultura cristiana la trinidad es formada por el padre, el hijo y el espíritu santo. El elemento negado es la madre, reemplazada por el principio vivificante que procreó al hijo de Dios. La consumación del carácter patriarcal, donde la madre es envase, receptáculo, transporte, alimento y/o apoyo, se plasma con total evidencia en esta cultura. Los avatares de este Chile totémico naciente en Pinochet y renovado en Lagos encuentran en Bachelet una disrupción, un ruido o quizás otra forma de reencuentro.

Al llegar al 2006, nos encontramos con Michelle Bachelet como nueva presidenta de Chile. Fue ella la primera mujer en acceder a tal honor. Fue ella la que se enfrentó a las condicionantes objetivas que complican a una mujer a la hora de aceptar dicho cargo, desde las más pedestres hasta las más sofisticadas. Pero esas condicionantes eran mucho mayores que lo pensado. Muchos pensaron que el éxito de Bachelet era resultado de un cambio cultural. Sin embargo, no era así. Bachelet se impuso por razones distintas. De algún modo era la liberación de la violencia y la autoridad como motor de nuestra política. Bachelet apeló al otro lado de esta base tradicional: el dolor. Es la energía vital del cristianismo el sitio donde Bachelet quedó puesta. Y es la energía básica de nuestra legitimidad. No es frecuente en nuestra cultura política que la energía legitimadora del dolor se transforme en la energía gobernante, que suele ser la violencia autoritaria. Pero así ha sido. Se ha buscado gobierno en el dolor.

Este tema ya se analizó, sin mucho detalle, en las páginas de esta revista, en su edición del año anterior. Mostramos cómo los estudios cualitativos revelan a Bachelet como el símbolo del dolor, del padecimiento, del sufrimiento. Vimos cómo su ecuación era simple y clara: ella es doctora (sabe del dolor), ella fue detenida y torturada (ha vivido el dolor), su padre murió viendo el dolor de otros (su vida está rodeada de dolor). En medio de esta ecuación, interviene un elemento central de nuestra cultura: ser del pueblo implica *ser* el dolor. Todo buen cristiano encarna su dolor en la cruz. Y eso se acredita en la pobreza cotidiana. Ser parte del pueblo, ser

pobre, es la continuidad del dolor, su permanencia. Por eso, porque Bachelet sabe del dolor, ella es como el pueblo. Esta es la ecuación que vimos el año pasado:

SI	Bachelet = Doctora (sabe del dolor) + Torturadora (vivió el dolor)
SI	Pueblo = Dolor como tortura
ENTONCES	Bachelet = Es como el pueblo = Es como uno
ENTONCES	Bachelet = Comprende el dolor del pueblo

Un elemento central que destacamos el pasado año es el que citamos a continuación:

“Pero además ella es el perdón, es ser ministra de defensa y dirigir la parada militar mirando los mismos uniformes que la torturaron y la dejaron sin padre. He aquí una sólida articulación con el mundo cristiano, pues como dice Nietzsche, el cristiano concede ventajas a todo sufrimiento, el cristiano siente que nada conserva mejor su paz que el dolor y que nada es más sutil que la venganza cubierta de perdón”³.

De este modo, en términos de cultura política la novedad de Bachelet no es ni ha sido la transformación de género que podría suponer. De hecho, Bachelet no emergió desde un cambio cultural que hace ‘iguales’ a hombres y mujeres. Para los electores chilenos un hombre es algo muy distinto a una mujer y se les somete a condiciones distintas en la relación con lo público y el poder. Esto lo medimos el 2005 cuando vimos en una encuesta que el rol que se le asigna a la primera dama y el rol que se le asigna a un hipotético ‘marido de presidenta’ (o ‘primer damo’, como se le llama socialmente, lo que revela las significaciones instaladas), quedan marcados por la necesidad de diferenciación⁴. Bachelet no es entonces la revolución del género. Lo que sí parece ser es un movimiento en la historia en dirección a un eje subsidiario de la vida política. Hemos dicho que la violencia organizadora y la energía legitimadora del dolor son dos ejes centrales de la vida política chilena, dos ejes en los que Pinochet operó con maestría. Pero sin duda ha sido siempre la violencia organizadora el

³ Ver MAYOL, Alberto (2006): “Parménides y Heráclito en el Chile 2005: crónica de las trizaduras y persistencias de los grandes relatos”, pág. 125, en *Revista Análisis de Año 2005*. Departamento de Sociología, Universidad de Chile.

⁴ Véase Informe IP 1, págs. 9 y 10, en www.informecip.cl. En dicho documento, entre otras cosas, se destaca que mientras sólo un 9% de los encuestados considera que el rol de primera dama no debería existir, en cambio un 38,7% cree que el marido de la presidenta no debiera cumplir ningún rol en la actividad pública en consideración a su carácter de marido.

núcleo de la dominación, el eje que subyace a todo gobierno. Por supuesto, los gobiernos menos militarizados pueden apelar a señalar su escaso vínculo con la violencia. Pero para efectos históricos no es relevante, ya que hablamos de una matriz de dominación que se traduce en gobiernos, no en un eje de los gobiernos. En este sentido, muchos presidentes y sus gobiernos son desviaciones del eje o ejercen con este 'problema' en la mira. Y, de este modo, analíticamente el eje de la violencia organizadora sigue siendo preponderante. Sin embargo, decíamos, Bachelet encuentra en la energía legitimadora de la cultura cristiana del dolor la base de su llegada al gobierno. La legitimación, que siendo muy importante es siempre un elemento subsidiario de la creación, una justificación, una operación de disminución del roce; toma la forma del poder. La matriz fundamental, esto es, tanto el espíritu de la dictadura como el de la democracia, estaban en la cuestión de la violencia creadora y organizadora. Pero con la candidatura de Bachelet, con su sorprendente irrupción en las encuestas, se produjo un pequeño movimiento hacia la contracara. Fue leído como un movimiento hacia la mujer, lo que en parte es cierto. Es el movimiento a esa fuerza femenina a la que apeló el mismo Pinochet, la constructora de la patria, la creadora de la familia, el sostén moral de la nación. Ese sostén moral es cristianismo puro, con la mujer como núcleo de la gestión del dolor, con la mujer como eje del perdón, como búsqueda del reencuentro de los hermanos, como representante del principio universal de la 'madre', punto de encuentro de tiranos y oprimidos. Por esto, es la mujer la representante simbólica de este movimiento hacia el dolor. Pero eso no es feminismo. No nos engañemos.

En definitiva, algo debe haber pasado en este camino. Tal vez la fractura por la violencia organizadora de Pinochet era tal, que sólo un movimiento hacia la energía del perdón y del hermanamiento del dolor parecía razonable, al menos como intento colectivo de reconstrucción del tejido social. El éxito de Lagos fue quizás la esperanza de que por el lado del autoritarismo democrático se pudiera llegar a la resolución. De hecho, Lagos quiso convencernos de que ya se habían sanado las heridas y que la transición se había cerrado, pero en la realidad la herida mostró presencia. Tal vez por eso el giro a Bachelet.

El movimiento hacia esta fuerza legitimadora y el momentáneo abandono de la tradición de la violencia organizadora es la gran novedad de la campaña de Bachelet y de su inicio de gobierno. Como la legitimidad está en todos, entonces cualquiera puede ser presidente. Y entonces todos los oprimidos se compraron su banda presidencial en la calle y cumplieron el rito de ser presidentes para cuando la presidenta asumió.

Pero a poco andar del gobierno, se notó que la fuerza legitimadora del perdón y del dolor carecía bastante de experiencia en los avatares de la dominación. O, en otro sentido, que una sociedad acostumbrada a la violencia organizadora, parecía considerar curioso un 'gobierno ciudadano'. A esto se sumaba que ser gobierno es

siempre disponer de la violencia, administrarla con el juicio propio de la jefatura del Estado. Por esto, era evidente que la tensión tendría que aparecer.

La llegada de Bachelet al gobierno fue un fenómeno en tanto le subyacía la esperanza de la libertad. Esto confirma su capacidad de representar la ausencia de violencia organizadora. Se reactivaron las voces, pero las voces se hicieron demandas, las demandas se transformaron en discusiones, las discusiones en paros, marchas y huelgas. Y de pronto Bachelet, a poco andar, se encontró con “El Fantasma de la Libertad”, para decirlo con Buñuel. Muchos la miraron y le dijeron que no sabía gobernar, se reactivó la tesis de que no daba al ancho y apareció el temor a que la violencia volviera, pero ahora en forma desorganizada.

El ícono de este fenómeno se marcó en la Revolución Pingüina, esto es, el movimiento de los estudiantes secundarios que criticaron los costos de la PSU, del pase escolar, la educación pública y todo lo demás. Al principio hubo simpatía y admiración por jóvenes jugados por sus ideas. Incluso hubo sorpresa porque tenían ideas aun cuando provenían de colegios públicos. Se constituyó una enorme comisión donde discutirían con toda la fauna de nuestra educación, asumiendo que se pondrían de acuerdo desde el rector de la Universidad Católica hasta el estudiante pobre y revolucionario. Pero no hubo encuentro. La mega comisión de más de 70 personas no logró encontrar acuerdos más allá del diagnóstico. No es que haya sido un fracaso, porque en el gobierno ciudadano ‘dialogar’ siempre es un triunfo. Pero parece que ni siquiera se dialogó tanto.

Las demandas estudiantiles marcaron el hito que más o menos representa la convicción de que en pedir no hay engaño y, sobre todo, de que es necesario pedir hasta que duela. Surgieron más demandas, huelgas, paros y muchos tipos se acordaron de sus derechos. Hasta la gente que se quedaba en Argentina por culpa del cierre del paso Los Libertadores apelaba a que la presidenta debía ayudar a todos los chilenos y que debía enviarles un avión a buscarlos. La tesis de fondo era que todo dolor, toda frustración, es política. Y había otra tesis, no tan de fondo pero harto importante: se asumió que la presidenta, la madre doliente, estaba llena de dinero por un cobre que no paraba de subir y por un país con excedentes más que suficientes. Al punto que se propuso un incremento de sobre un 10% para el gasto público.

De este modo, a los tres o cuatro meses el fantasma de la libertad ya recorría Chile. Se necesitaban nuevos líderes, se necesitaban enérgicos sujetos que devolvieran el orden, que reconstituyeran las rutinas productivas, que pacificaran el Arauco indómito. Por eso, no se encontró nada mejor que desatar la carrera presidencial a tres meses de haber asumido Bachelet. Lo sorprendente no es tanto que haya un par de locos activos, sino todos los locos pasivos que observamos como verosímil ese acto y nos pusimos a discutir sobre Insulza, Lagos, Longueira, Piñera y hasta de Eyzaguirre y otros más. Aun cuando es posible que haya sido un simple deseo por volver a la violencia organizadora.

En ese panorama de pronto la presidenta dijo que en realidad había un malentendido. Que nunca se había hablado de gobierno ciudadano, que eso no existía, que el gobierno es gobierno y todo lo demás. Todo se gatilló por el poder de las encuestas: Adimark dijo que la presidenta había caído 10 puntos en junio. Razón suficiente para cambiar el discurso. Mientras el 11 de marzo, en el cambio de mando, dijo que “éste será el gobierno de los ciudadanos”, ya el 9 de julio dijo en El Mercurio que ella en realidad no ‘usaba’ esa palabra (gobierno ciudadano) y que sólo quería decir “con, para y por los ciudadanos, pero no gobierno ciudadano”. Y fue así como el fantasma de la libertad comenzó a ser combatido, volviendo a Luis XIV y su “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Tampoco hay que hacerse ilusiones: nuestra tradición no es de despotismo ilustrado, como el de Luis XIV, sino que es sólo despotismo.

Por eso, para terminar con el fantasma de la libertad, apareció Belisario. Un par de operativos de seguridad para demostrar a los delincuentes que no sería perdonados, un par de frases bruscas y de pronto todo era muy claro: había vuelto la violencia organizadora. Tres o cuatro meses duró el dolor como energía de gobierno. La violencia volvió y la presidenta se encargaría de retomar la sólida tradición de un gobierno que vuelve a alinearse con las fuerzas que estén lo más lejos posible de los ciudadanos.

Quizás como el dolor y el perdón perdieron protagonismo, Bachelet no quiso funerales de Estado para Pinochet y no fue a su entierro. Ese acto cristiano de reencuentro tal vez lo habría hecho si hubiese tenido fe en el gobierno del dolor.

De todos modos, el espíritu del perdón sigue presente. En la Concertación hacen *mea culpa* de la corrupción y confiesan que se imaginaron que había que luchar contra la injusticia y la desigualdad. No soportaron ver tanta injusticia, ver que sus partidos no tienen financiamiento privado y los de derecha sí. Y decidieron que eso no debía seguir más. Había que luchar con las armas disponibles. Y vieron que esas armas estaban en el Estado, por lo que en un acto de redistribución sin precedentes, tomaron ese dinero y empataron la riqueza con gastos reservados y fondos concursables. Y aunque piden perdón, dicen que había razones superiores. Y se entiende. “Todo por el pueblo”.

Finalmente, un pequeño homenaje a un logro concertacionista que tiene ya muchos años. La Concertación descubrió que “lo importante no es ganar, sino empatar”. Su gestión del debate político se basa en el empate permanente. No es raro. En las culturas primitivas se valora de sobremanera el empate. Levi Strauss describe como tribus en el Amazonas jugaban algo muy parecido al fútbol, pero tenían el desafío de que el encuentro debía culminar en un empate, por lo que a veces el juego duraba muchas horas o incluso días. El mundo no puede estar sometido al imperio de la diferencia, a la injusticia insólita del éxito de uno y la derrota del otro. Eso es muy noble. Pero en nuestra vida política hemos inventado una teoría del empate algo distinta: son los pecados los que se igualan. Pero además, los pecados se descuentan

en proporción. La contabilidad de estos pecados es muy importante. Si bien la derecha lo intenta, no logra hacerlo bien. Los magos de esta contabilidad están en La Moneda. Un ejemplo para terminar:

Sobresueldos = Pinochet tiene cuentas en el Riggs Irregularidades en MOP = Novoa es pedófilo Hay mucha corrupción = Pinochet fue un ladrón Corrupción en Chiledeportes = Pinochet tiene oro Decadencia moral en Concertación = Alianza apoyó a un asesino (y ladrón y dictador)

En la gestión de este empate, la figura de Pinochet es consular. Pinochet permite vincular estos empates a la matriz de la violencia y a la matriz del dolor. Su uso de violencia excesiva, más allá de lo aceptable, marca el hecho de que siempre quedan debiendo los hijos de Pinochet. Y la presencia de dolor en la Concertación, permite siempre conquistar los corazones sensibles al mérito del sufrimiento. La Concertación vivirá mientras estos capitales para empatar sigan funcionando. De todos modos, es signo de debilidad el que estas convenciones morales se hayan hecho explícitas y se discutan abiertamente. La tesis del empate es algo que funciona muy bien en el silencio de los acuerdos sagrados de la moral política imperante.

Las relaciones laborales en el Chile actual: Tres estudios de caso

RODRIGO FIGUEROA VALENZUELA¹.

1. INTRODUCCIÓN

Las sociedades contemporáneas han experimentado una completa reorganización de su vida económica y de su vínculo con el trabajo. Las consecuencias de esta transformación han sido significativas y profundas. En efecto, se puede decir que los cambios en el mundo del trabajo han alterando completamente la institucionalidad laboral, la organización del trabajo, la acción colectiva de los trabajadores y la sociabilidad en los ambientes laborales. Estos hechos han implicado que en la actualidad los sistemas de relaciones laborales presenten novedosos modos de estructuración y que, en estricto rigor, ya no están definidos por principios como la estabilidad laboral o la idea del pleno empleo.

Quisiera abordar y definir los alcances de estos cambios en términos de evaluar la relación entre la producción de seguridad² y el contenido de las trayectorias laborales. Si aspiramos a evaluar esta relación existirían dos requisitos. En primer

¹ Licenciado en Sociología, Magíster en Economía del Trabajo y Relaciones Laborales, Profesor Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. rofiguer@uchile.cl; rofiguer@gmail.com; http://csociales.uchile.cl/paginas_academicos/figueroa/index.html.

² En el caso de este artículo me referiré a la seguridad desde una perspectiva sociológica en tanto se le puede asociar, como concepto, con las dimensiones que alcanza la vulnerabilidad social, económica y política en función de los mecanismos institucionales y simbólicos asociados a los procesos de modernización neoliberal. Lamentablemente, en los últimos años, la dimensión de seguridad ha sido reducida a una noción mediática que la vincula sólo a los problemas originados por la delincuencia. Este hecho ha implicado su desvalorización como indicador de bienestar social y económico. La recuperación del concepto de seguridad, para entender los procesos de crisis y amenazas a la reproducción de la sociedad, demanda ampliar su contenido y agrupar en él un conjunto de prácticas desarrolladas por los grupos sociales e individuos para reducir incertidumbres y riesgos al participar en sociedad. El uso de la noción de seguridad permitiría reconocer la importancia que tiene para el

lugar, redefinir elementos conceptuales y metodológicos ligados a los estudios cuyo objeto de atención ha sido la relación entre trabajo y sociedad. En este sentido, el cuestionamiento realizado al trabajo, respecto de su centralidad en las sociedades modernas, ha generado una demanda por revisar los modos de observación, especialmente, de disciplinas como la sociología y la antropología³. En segundo lugar, existe urgencia por caracterizar, precisar y describir las dinámicas institucionales y simbólicas involucradas en la actual estructuración de las relaciones laborales y que expresarían un hecho importante: *la corrosión del carácter*⁴. Las dinámicas societales asociadas a la globalización o la flexibilización han provocado significativos cambios en los modos en que se relacionan los actores laborales o en el vínculo entre las grandes empresas y los mercados internacionales. Son estos cambios los que han determinado nuevas formas de contratación, denominadas eufemísticamente formas flexibles, facilitado el despido, por ende el temor en las trayectorias laborales, e inhabilitado culturales laborales sustentadas en el pleno empleo

La actualidad material del trabajo parece indicar que éste ya no es condición suficiente para alcanzar mayor seguridad e integración en las sociedades

bienestar social las dotaciones de activos y recursos que poseen las personas. A su vez, cuando utilizo el concepto de seguridad lo hago en el entendido que se le puede relacionar con la pertinencia, que tiene para el análisis de lo social en las sociedades contemporáneas, las nociones de riesgo e incertidumbre. Como una forma de operacionalización este concepto ampliado de seguridad se puede relacionarlo con la codificación de las prácticas sociales asociadas a las trayectorias laborales. En efecto, y a modo de tesis, podemos pensar que en las últimas décadas del siglo XX, al interior de las trayectorias laborales, se han desplazado las curvas que dan cuenta de la exposición a riesgos sociales como el desempleo. Esta condición, estaría vinculada con la pérdida de seguridad, subjetiva y material, de los diversos grupos sociales, una vez que se han expuestos a la reorganización de las instituciones laborales y de los procesos productivos implícitos en la modernización neoliberal; tal como ocurrió, y es lo que se intenta mostrar preliminarmente en este trabajo, con los grupos medios al interior de la sociedad chilena.

³ Existen diversos trabajos que dan cuenta de una relectura de la idea de trabajo en las ciencias sociales. A modo de referencia general se recomienda Dominique Medá, *Le travail: une valeur en voie de disparition*, Champs/Fammarion, París, 1999; En el caso específico de la sociología se recomienda un muy buen artículo de Claus Offe que tienen la particularidad de anticipar el debate que se ha dado con fuerza en la década de los noventa respecto de la pérdida de centralidad de la noción de trabajo. Claus Offe ¿es el trabajo una categoría sociológica clave? en Claus Offe, *La sociedad del trabajo: problemas estructurales y perspectivas de futuro*, Editorial Alianza, Madrid, 1992. Uno de los aspectos más llamativos de este trabajo es que fue publicado por primera vez el año 1982 y por ende es un antecedente de la importancia que tuvo para la sociología y la ciencia política alemana la desestructuración de los Estados del Bienestar y la crisis del corporativismo. Desde esta constatación se pudo generar una interpretación de la centralidad del trabajo – obviamente sus crisis - que iba más allá del acto de dimensionar el volumen del desempleo y colocaba la crisis del trabajo en el centro del cuestionamiento a un modelo societal - las sociedades del bienestar de post-guerra -.

⁴ Hago alusión a la metáfora utilizada por Richard Sennett, que indica como las transformaciones del mundo del trabajo han afectado la construcción de los proyectos vitales de las personas y la relación de estas con las normas sociales construidas en torno al trabajo asalariado. Es este proceso el que viene a de-construir el nosotros del mundo del trabajo que se formó en la modernidad organizada. Richard Sennett, *La Corrosión del Carácter*, Anagrama, Barcelona, 2000.

contemporáneas. Al contrario, las actuales experiencias laborales contienen altos grados de inseguridad, incertidumbre y malestar social, hechos que se expresarían en situaciones como el desempleo o la desprotección social. En este sentido, la información relativa al funcionamiento de los mercados del trabajo y el desarrollo de las relaciones laborales indicarían el fin de la relación entre la aspiración por la seguridad económica a través del trabajo asalariado y principios como la estabilidad laboral. En definitiva, el trabajo ha perdido su capacidad para otorgar fijación, significación y estabilidad a las personas ante las incertidumbres y riesgos que son implícitos a las sociedades contemporáneas. Dicho acontecimiento, determinaría una relación entre lo que podríamos denominar la emergencia de una nueva cuestión social y la insuficiencia de los principios de estructuración, dados por la sociedad neoliberal, para el mundo del trabajo

2. HACIA UNA SOCIOLOGÍA DE LOS MERCADOS DEL TRABAJO: RELECTURA METODOLÓGICA Y CONCEPTUAL PARA EL ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE TRABAJO Y SOCIEDAD.

Los estudios sobre el mundo del trabajo tuvieron como escenario una forma de capitalismo que se sustentó en la gran industria y en intereses obreros fuertemente organizados. Hoy, en cambio, el escenario del capitalismo es muy distinto y se sustenta en la ideología del emprendimiento y la especulación financiera. A partir de la globalización, de la expansión de los capitales financieros y de la reorganización productiva de las grandes empresas transnacionales, se han vehiculizado y determinado nuevas formas de generación/acumulación de riqueza y que, a su vez, han redefinido las experiencias de la pobreza y la precariedad. En este nuevo contexto, la figura del trabajador obrero-industrial, como actor social en los términos definidos por Touraine, es decir como productor de sociedad, ha perdido centralidad en cuanto a la relevancia societal de sus intereses económicos, sociales, políticos y culturales⁵. De hecho, este sujeto/actor, referente obligado para los estudios del trabajo, ha sido desplazado por otras subjetividades y materialidades obreras que son más heterogéneas, con identidades sociales menos estables y que emergen, principalmente, del sector servicio.

Aprender el nuevo escenario del mundo del trabajo resulta un importante desafío, sobretudo, porque las explicaciones más frecuentes, dominantes y hegemónicas, que aparentan un estatuto de mayor oficialidad y legitimidad, provienen de la economía. Más aún, las dificultades se acrecientan cuando la visión económica dominante sobre el mundo del trabajo, proviene de los “*productos*” analíticos y metodológicos del neoliberalismo. Según esta perspectiva, patologías sociales, como

⁵ Touraine Alain, Producción de Sociedad, UNAM-IFAL, México, 2000. (Primera edición 1973)

el desempleo o la precariedad, estarían asociadas a ciclos económicos o a normas e instituciones que entorpecen el ajuste espontáneo entre la oferta y la demanda de trabajo. Por esta razón, son escasas las ocasiones en donde el desempleo o la precariedad laboral se explican como fenómenos que responderían a las propias características de la modernización neoliberal, es decir, como consecuencia de los principios de estructuración, para la relación entre economía y sociedad, definidos por el Consenso de Washington⁶.

Desde una perspectiva sociológica, enfrentar la condición hegemónica del pensamiento neoliberal, sobre los problemas del mundo del trabajo, requiere de la revisión de los supuestos epistemológicos y metodológicos asociados a marcos disciplinares como la sociología del trabajo. En primer lugar, es necesario complementar sus objetos de estudio más desarrollados, es decir, el análisis del movimiento obrero y la organización del trabajo⁷. En este sentido, es necesario incorporar, como objeto de estudio, a los mercados del trabajo y entenderlos como una construcción social. De acuerdo a esto, la relación entre la oferta y la demanda de trabajo parecería entendida como una relación social determinada por específicos modos sociales, políticos, culturales y económicos, lo que a su vez definiría la adecuación funcional/social en los mercados del trabajo. A partir de esta relectura conceptual, sobre el funcionamiento de los mercados del trabajo, se iría más allá de una aproximación puramente economicista y su desempeño no estaría asociado sólo a variables económicas. Desde esta perspectiva, los mercados del trabajo deberían ser entendidos como realidades sociales e institucionales complejas, compuestas por conjuntos amplios y diversos de instituciones y fenómenos sociales, y que su estructuración transcurriría por heterogéneos escenarios sociales⁸. Se puede decir que al observar a las sociedades modernas, en sus distintas realidades, se pueden identificar diversas expresiones del desempleo, de los mercados del trabajo y de la organización de las relaciones laborales. En algunos países, como EEUU y Gran Bretaña, las relaciones laborales han sido flexibilizadas y las estructuras sociales enfatizan aspectos como la individualización no asistida. En otras sociedades, la organización de las relaciones laborales ha estado menos expuesta a una flexibilización radical tal como ha sido dispuesto por el *Consenso de Washington*.

El interés por conocer el cómo transcurre la construcción social de los mercados de trabajo implicaría sistematizar un conjunto diverso de experiencias, institucionales y simbólicas, asociadas a la estructuración de la relación entre la oferta y la demanda

⁶ Figueroa Rodrigo, "Desempleo y precariedad en la sociedad de mercado", RIL – PREDES, Santiago, 2002.

⁷ Michael Piore y Charles Sabel, *La segunda ruptura industrial*, Alianza editorial, Madrid, 1990.

⁸ Se puede decir que al observar a las sociedades modernas, en sus distintas realidades, se pueden identificar diversas expresiones del desempleo, de los mercados del trabajo y de la organización de las relaciones laborales. En algunos países, como EEUU y Gran Bretaña, las relaciones laborales han sido flexibilizadas y las estructuras sociales enfatizan aspectos como la individualización no asistida. En otras sociedades, la organización de las relaciones laborales ha estado menos expuesta a una flexibilización radical tal como ha sido dispuesto por el *Consenso de Washington*.

de trabajo. Con este paso, se complementarían la codificación normativa o economicista del funcionamiento de los mercados del trabajo, y se desarrollaría una visión sociológica que aspiraría a relacionarlos con el desarrollo de la integración en las actuales sociedades capitalistas y neoliberales. Estudios como los de Richard Sennett, Mark Granovetter o Enzo Mingione son antecedentes que indicarían la pertinencia de sociologizar la observación de los mercados de trabajo. La obra de Sennett, por ejemplo, realiza un interesante acercamiento al vínculo entre los recientes cambios normativos en el mundo del trabajo y la superación de principios de estructuración como el pleno empleo, hecho que ha afectado las percepciones de seguridad que poseen las personas al relacionarse con los mercados del trabajo. Según Sennett, este hecho se expresaría en la corrosión del carácter, es decir, en los cambios en el modo de vivir y asumir el trabajo toda vez que las trayectorias laborales se han vuelto más inestables e inseguras. En el caso de Granovetter⁹ su obra ha permitido dar un giro en la observación de los mercados del trabajo. En este caso, el sociólogo de Stanford, ha propuesto situar a las redes sociales como un factor sustantivo para entender los procesos de intercambio funcional/social entre capital y trabajo. En este sentido, la forma en que los individuos acceden a la información sobre la disponibilidad de puestos de trabajo estaría determinada por la naturaleza de sus redes sociales y por la debilidad o fortaleza de éstas. Utilizando sus lazos sociales los sujetos pueden vehicular sus activos, en este caso competencias y saberes laborales, a través de las estructuras de oportunidad que subyacen a los mercados de trabajo. De este modo, la calidad o fortaleza de las redes sociales serían determinantes para explicar el éxito o fracaso de las personas ante el desafío de insertarse en los mercados del trabajo y permanecer en ellos. Además, los antecedentes entregados por Granovetter, para avalar la centralidad de las redes sociales, han permitido reafirmar la tesis que relacionaría el funcionamiento de los mercados del trabajo con los específicos sustratos o factores sociorganizativos en donde éstos se desarrollan.

Siguiendo la ruta de observación antes indicada, emergen distintos niveles de análisis para construir una mirada más sociológica y determinar el cómo se construyen socialmente los mercados de trabajo. En esta dirección, resultaría determinante conocer las estructuras normativas de los mercados del trabajo, las conductas e intereses de los actores, sus percepciones simbólicas respecto del funcionamiento de los mercados del trabajo y la forma en que se desarrolla la integración funcional/social en el marco del intercambio entre capital y trabajo¹⁰. A su vez, la sistematización de los factores sociorganizativos presentes en los mercados del trabajo permitiría conocer la forma en que los actores laborales enfrentarían condiciones de riesgo e

⁹ Granovetter M. (1985) "Economic Action and Social Structure: The problem of embeddedness", en *American Journal of Sociology*, vol. 91 Number 3, Noviembre.

¹⁰ Graciela Bensusán (coordinadora), *Diseño Legal y desempeño real: instituciones laborales en América latina*, Miguel Angel Porrúa, México, 2006.

incertidumbre en los contextos económicos y sociales derivados de la globalización y la flexibilidad¹¹. La aprehensión de estos factores resulta ser un desafío para las ciencias sociales en general y la sociología en particular.

3. TRABAJO Y SOCIEDAD EN CHILE: ESTUDIOS DE CASOS

Como una forma de asumir el desafío anteriormente planteado presentaré algunos resultados de recientes investigaciones realizadas en el marco de la sociedad chilena. Estas investigaciones son observaciones acerca del funcionamiento de los actuales mercados de trabajo y de su impacto en el sistema de relaciones laborales, tanto en sus aspectos simbólicos como institucionales. En general, estas observaciones dan cuenta de los efectos generados por los procesos de ajuste estructural y que se encuentran cristalizados en la sociedad de mercado que es el Chile actual. En efecto, la forma en que se genera, organiza y reproduce el vínculo entre capital y trabajo se sustenta en los principios que encarnan la modernización neoliberal como son la tendencia a la individualización de las relaciones laborales, la mercantilización de los espacios laborales y la comprensión del trabajo como simple mercancía.

En las investigaciones a las cuales me refiero he abordado fenómenos institucionales, normativos y simbólicos del mundo del trabajo y he descrito el contenido de las actuales experiencias laborales. En primer lugar, he intentado identificar algunos contenidos de las experiencias laborales de los nuevos grupos medios, atendiendo a su transformación simbólica y material como consecuencia de la modernización neoliberal. En segundo lugar, mediante el análisis de un conjunto de entrevistas realizadas a pequeños empresarios del sector metalmeccánico, he intentado conocer la forma en que estos asumen y entienden la pertinencia de los derechos laborales en la relación laboral. El objetivo de sistematizar estas entrevistas ha sido mostrar la relación existente entre las percepciones que tienen los pequeños empresarios sobre las normas laborales, hecho definido por profundos sustratos sociorganizacionales, y la forma en que las utilizan. Por último, he querido dar a conocer una aproximación de la construcción de las relaciones laborales en el sector agroexportador chileno, con el objetivo de indicar el vínculo entre la forma global de la actual vida económica y la precarización de las relaciones laborales.

3.1 LOS TRABAJADORES ASALARIADOS MEDIOS: MANIFESTACIÓN DE LA INDIVIDUALIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES.

Una de las peculiaridades del mercado como mecanismo de coordinación social es la definición de las formas de la solidaridad social de un modo totalmente distinto

¹¹ Enzo Mingione, *Las sociedades Fragmentadas*, MTSS, España, 1990.

al provisto por otros mecanismos como el Estado o la familia. En efecto, las formas de la solidaridad social, en tanto el mercado se constituye como el principal mecanismo de coordinación social, se sustentan en la relación entre las aspiraciones individuales y la espontaneidad del orden social. Es un principio derivado de la utopía liberal del siglo XIX y de las primeras manifestaciones de la economía política clásica en donde el orden social fue entendido a partir del orden del mercado. Se puede decir, que la trascendencia de este principio tiene por lo menos dos siglos de historicidad en las sociedades modernas, evidenciándose en torno a él importantes construcciones institucionales y simbólicas que aspiraron a legitimarlo o a cuestionarlo, hecho coronado, esto último, con el desarrollo de los modernos Estados del Bienestar a mediados del siglo pasado¹².

El actual escenario societal se caracteriza por una vuelta a la utopía liberal del siglo XIX, tal como la definió Polanyi, y desde la cual se asume la posibilidad de pensar a las sociedades como sociedades de mercados. Siguiendo a Claus Offe, este proceso se puede caracterizar como una re-mercantilización de las sociedades capitalistas, hecho que ha significado el desarrollo de una importante des-regulación de las prácticas de intercambio económico. En estricto rigor, ha significado reducir la “rigidez” de los mercados y eliminar los mecanismos de protección generados por el Estado de Bienestar. El objetivo de estos cambios ha sido abordar, en base al incremento de flexibilidad, la demanda por adaptarse a las variaciones de los mercados y a la producción de incertidumbre económica en una economía global. Este proceso, ha provocado el desmantelamiento de aquella arquitectura normativa y simbólica del trabajo que tenía como supuesto la protección del empleo y su tratamiento como un aspecto no mercantil. En este sentido, la transformación antes aludida ha implicado la re-mercantilización de la relación de intercambio entre capital y trabajo, generando, entre otras cosas, la fragmentación de las identidades laborales, una mayor inestabilidad laboral y ha dificultado el ejercicio de los derechos laborales.

La modernización neoliberal en Chile, que es una expresión concreta de esta vuelta a la utopía liberal de aspirar a una sociedad de mercado, ha afectado a la totalidad de sectores sociales en cuanto a su relación con el mundo del trabajo. En el

¹² Como una reacción a lo que Polanyi denominó el fracaso de la utopía liberal del siglo XIX, específicamente, en lo que dice relación con el establecimiento de una sociedad de mercado, los actores sociales del siglo XX, mediante los Estados del bienestar, impulsaron la construcción de formas de solidaridad y sociabilidad en el mundo del trabajo que no fueran resultado del acto de intercambio económico basado sólo en los intereses individuales. Por esta razón, se organizó la vida económica de acuerdo al principio de subordinación de los intereses individuales a los intereses colectivos, los que a su vez estaban encarnados en la voluntad sociopolítica del Estado. Uno de los resultados más determinante de este proceso fue la des-mercantilización de las sociedades capitalistas, hecho que significó la construcción de una seguridad económica amparada en el pleno empleo y en una red de protección social y política en función de la ocupación de un lugar en los mercados del trabajo. Ver Karl Polanyi, *La gran transformación*, FCE, México, 1992; Claus Offe, *La sociedad del Trabajo*, Alianza editorial, Madrid, 1992; Claus Offe, *Modernity and State*, MIT, Cambridge-Massachusetts, 1991.

caso de los grupos medios, la destrucción del empleo público y la industria nacional implicó la reorganización de sus espacios laborales lo que determinó una importante pérdida en sus niveles de protección y bienestar. Muchos de los elementos contenidos en las relaciones laborales del sector público y la industria nacional daban cuenta de la estructuración de los mercados del trabajo en base a la estabilidad laboral y la evolución positiva de los ingresos en función de la antigüedad. En la actualidad, las trayectorias laborales de los grupos medios están determinadas por aspectos totalmente distintos como, por ejemplo, la rotación laboral y la construcción de sus ingresos en función del desempeño. Estos aspectos han implicado cambios en las percepciones simbólicas de los grupos medios en función de cómo relacionarse con los mercados de trabajo, en la forma en que construyen la sociabilidad en sus ambientes laborales y en su relación con mecanismos de representación de intereses como los sindicatos.

Con el objetivo de reconocer las características de la nueva relación entre los grupos medios y el trabajo analizaré la información generada por la encuesta sobre percepciones y representaciones simbólicas de la clase media realizada por el Programa de Estudios Desarrollo y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile¹³. En dicha encuesta, elaboré un módulo correspondiente a la temática de la relación entre trabajo y grupos medios, teniendo como foco de interés la observación de sus percepciones sobre la relación entre compañeros de trabajo, los modos de sociabilidad en los ambientes laborales, los grados en que se manifiesta la confianza o la solidaridad¹⁴, la forma de acceder a los mercados del trabajo y la disposición a desarrollar la acción colectiva. La caracterización de estos elementos ha permitido establecer un primer acercamiento al proceso de individualización de las relaciones laborales y la menor disposición a la acción colectiva entre los grupos medios.

Las respuestas que dieron los trabajadores de grupos medios permitieron definir que sus ambientes laborales presentan rasgos muy diferentes a los existentes en décadas pasadas. En la actualidad, las experiencias laborales de los grupos medios transcurren en pequeños y medianos talleres, en el sector de servicios, principalmente megatiendas y oficina de servicios, y en el desarrollo de actividades ligadas a las consultarías

¹³ La investigación a la que aludo fue impulsada desde el Programa de Estudios Desarrollo y Sociedad e implicó la aplicación de una encuesta que buscó identificar aspectos de la integración social en las nuevas capas medias. Ver Programa de Estudios Desarrollo y Sociedad, PREDES, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. www.predes.uchile.cl

¹⁴ En los estudios sobre sociabilidad resulta central, para evaluar el contenido de las relaciones sociales que se establecen entre los miembros de una sociedad, el examen de los grados de confianza existentes en los espacios de interacción social, tal como puede ser el caso del trabajo. Sobre la confianza, como elemento del sustrato sociológico, en donde están incrustadas las relaciones sociales, se pueden construir medidas de la reciprocidad y de la fortaleza existente en la ligazón de los individuos. A partir de esto se pueden estimar los grados de cohesión o fragmentación social, siendo esto una expresión de la integración social, tanto en términos institucionales como simbólicos.

o la definición de proyectos - aquello que en los Estados Unidos se conoce como profesiones liberales -. Un segundo elemento que se pudo constatar en las trayectorias laborales de estos grupos es la alta presencia de contratos de trabajo flexibles, remuneraciones basadas en el desempeño y el esfuerzo personal y una fuerte competencia entre compañeros de trabajo.

Otro de los aspectos desprendido de la encuesta es la presencia de la desconfianza como denominador común de la relación entre los compañeros de trabajo. Al preguntarles a los trabajadores encuestados si tendrían confianza en los compañeros de trabajo para realizar acciones como reclamos salariales o pedir mejoras en las condiciones de trabajo, la desconfianza ante éstos fue un denominador común. Tal como lo muestra la tabla N° 1, un 76,6 % de los entrevistados “no confiaría en nadie” o en “unos pocos compañeros” para realizar reclamos salariales. En lo referido a la acción colectiva un 69,8% de los encuestados señaló que confiaría en “unos pocos” o en “ningún compañero” al momento de plantear la creación de un sindicato. Las respuestas de los trabajadores encuestados indican que la confianza no sería un activo social significativo para construir sus vínculos con compañeros de trabajo y, por lo tanto, la sociabilidad en sus ambientes laborales tendería hacia su mercantilización e individualización¹⁵. Además, resulta evidente que en el grupo de trabajadores encuestados no se han desarrollados sustratos sociológicos, como la confianza, para impulsar la acción colectiva y la capacidad de coordinar intereses en función de un interés común.

Tabla 1
¿En quién confiaría frente a las siguientes situaciones que pudieran ocurrir en su lugar de trabajo?

	Confiaría en todos su compañeros	Confiaría en varios de sus compañeros	Confiaría en algunos de sus compañeros	No confiaría en ninguno de sus compañeros	No sabe /no responde
Reclamos salariales	15.0	7.2	43.9	32.9	1.0
Para resolver problemas personales	2.8	4.0	50.9	41.7	0.6
para crear un sindicato	19.2	8.4	29.3	40.5	2.6
Para hacer peticiones al empleador	17.8	10	34.7	35.9	1.6
Para acudir a la inspección del trabajo	11.2	5.4	34.9	46.1	2.4

Fuente: Encuesta sobre integración social, PREDES, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago, 2003

¹⁵ En el marco de la investigación este aspecto resultó ser llamativo ya que los entrevistados señalaron tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo.

A partir de la información anterior podría decirse, a modo de hipótesis, que el carácter que presentarían los vínculos sociales entre los asalariados medios del gran Santiago imposibilita cualquier pretensión de reponer la importancia de la acción colectiva para la estructuración de las relaciones laborales. En este sentido, el posible desarrollo de la acción colectiva entre los trabajadores medios estaría limitado por la centralidad de los intereses individuales en las relaciones de co-presencia en los ambientes laborales. ¿En que redundaría la pérdida de lo colectivo como expresión de la construcción de lazos sociales entre los trabajadores pertenecientes a sectores medios? A través de la encuesta se intentó establecer el grado de participación y compromiso que los trabajadores encuestados tendrían frente a la necesidad de organizarse ante demandas o conflictos laborales. La constatación más importante que surge al observar la tabla N° 2 es la baja disposición para la acción colectiva que presentarían los trabajadores encuestados. En efecto, un 68,0 por ciento de los encuestados respondió que ante la necesidad de defender el empleo se organizan rara vez o nunca, en tanto que, un 32,0 por ciento señaló que lo hacen siempre o varias veces. En la misma dirección, un 64,5 por ciento de los encuestados respondió que no se organiza ante la necesidad de demandar mejoras salariales.

Las respuestas de los trabajadores encuestados, acerca de su disposición a la acción colectiva y la forma en que se relacionan con sus compañeros de trabajo, permiten indicar que éstos han estado altamente expuestos a modos de estructuración de las relaciones laborales en donde se ha exacerbado su individualización. Este hecho, habría alentado la descomposición de las tradicionales formas de sociabilidad en el trabajo de los grupos medios y que eran importantes para la generación de protección y seguridad en las trayectorias laborales. A pesar de esto, la actual realidad de las trayectorias laborales en los grupos medios, indicaría que aún no se han desarrollado los sustitutos funcionales y sociales para estos mecanismos de protección y seguridad, o bien, han sido insuficientes, precarios, discriminatorios, abusivos y parciales, tal como ocurre con el sistema de previsión social, el acceso a la salud vía Isapres y el ejercicio de los derechos laborales. Es quizás, sobre este hecho, en

donde se sustenta el malestar social y la sensación de incertidumbre e inseguridad que recurrentemente señalan los trabajadores de los grupos medios.

En otra dirección, la baja disposición a la acción colectiva de los trabajadores encuestados nos conduce a preguntarnos por la evaluación que puedan tener sobre los mecanismos de participación y representación de intereses en el mundo del trabajo. El siguiente gráfico, da cuenta de las respuestas que se dieron a propósito de las razones que tendrían para no participar en organizaciones colectivas al interior del mundo del trabajo. En este caso, el 34% de los encuestados indicó que las organizaciones colectivas no sirven a sus propósitos y que no representan los verdaderos intereses de los trabajadores. Parece, entonces, que instituciones como el sindicato o la negociación colectiva, que han sido determinantes en la institucionalización de la acción colectiva de los trabajadores en las sociedades modernas, estarían cuestionadas y no serían determinantes para la estructuración de las relaciones laborales en trabajadores de grupos medios.

Gráfico 1



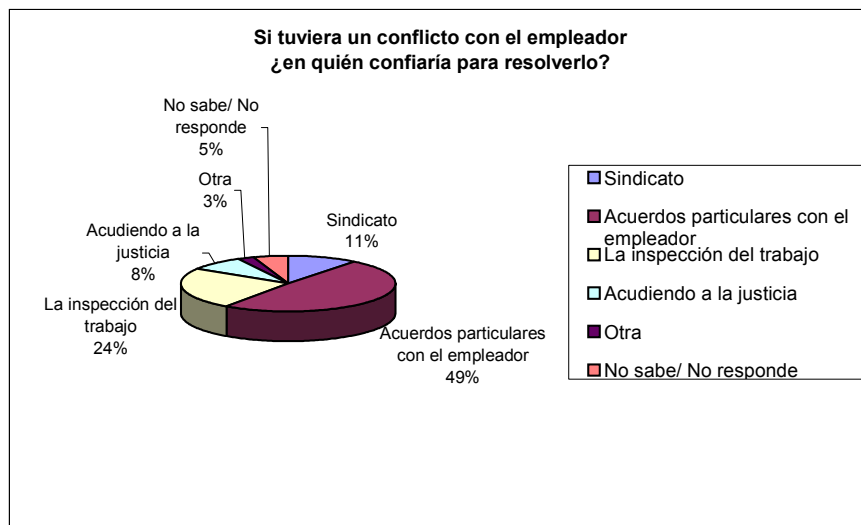
Fuente:

Encuesta sobre integración social, PREDES, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago, 2003.

Las características que he indicado sobre las relaciones laborales de los trabajadores encuestados llevan a preguntarnos respecto de sus modos de resolución para los conflictos laborales. En el siguiente gráfico, se observa que el 49,1 por ciento de los encuestados señaló que resolvería sus conflictos mediante acuerdos particulares con el empleador. En el mismo gráfico, se tiene que el 11,0 por ciento de los encuestados acudiría a un sindicato y un 24,0 por ciento a las inspecciones del trabajo. Estas tendencias en las respuestas permiten reafirmar la tesis respecto de la fuerte individualización de las relaciones laborales y la importancia que han adquirido las

formas individuales de resolución de conflictos en el actual sistema de relaciones laborales. Es decir, ante la necesidad de resolver un conflicto con sus empleadores, los trabajadores tenderían a valorar sus capacidades personales, y no las institucionales de carácter moderno y burocrático, como el sindicato, para resolver sus problemas con el empleador.

Gráfico 2



Fuente:

Encuesta sobre integración social, PREDES, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago, 2003

Lo dicho hasta aquí permite delinear aspectos de las actuales formas de construcción de las relaciones laborales en trabajadores de sectores medios y de su relación con los mercados del trabajo. A partir de la información entregada por la encuesta, se puede decir, que tanto la forma que ha adoptado el actual estilo de desarrollo como la cristalización de su arquitectura normativa para el mundo del trabajo, han legitimado la tendencia a la individualización de las relaciones laborales. Las inquietudes que surgen de este escenario son trascendentes para evaluar la continuidad del modelo de desarrollo y la pertinencia social y económica de la normativa laboral vigente, ya que es necesario saber, de acuerdo a las características que tienen los distintos grupos sociales, como en el caso de las clases medias, si es posible la construcción de más seguridad para sus experiencias laborales.

3.2 MERCADO DEL TRABAJO, PEQUEÑA EMPRESA E INSTITUCIONALIDAD LABORAL

Una de las dimensiones que más incide en la construcción social de los mercados del trabajo y en las relaciones laborales es la forma en que se nos presentan las unidades productivas, ya sea por su tamaño o por los modos de participar en los mercados relativos a sus productos. Estos factores determinan que las unidades productivas sean realidades multiformes en lo funcional y en lo simbólico, hecho que tendría un impacto directo en la estructuración de las relaciones laborales y en el desempeño de los mercados del trabajo. En estricto rigor, la forma en que se construyen las relaciones laborales varía de acuerdo a las características de las unidades productivas y dicha condición puede visibilizarse en la definición de los salarios, los modos de contratación y en los procesos de negociación entre capital y trabajo.

Durante el año 2003 desarrollé una serie de entrevistas a pequeños empresarios del sector metalmeccánico de la ciudad de Santiago y cuyo objetivo era establecer su relación con la normativa laboral y la incidencia de este aspecto en la racionalización de los procesos productivos y en la reducción de incertidumbres y riesgos económicos¹⁶. Como consecuencia del análisis de las entrevistas emergieron aspectos que ayudan a comprender la actual relación entre las estructuras normativas de las relaciones laborales, el desarrollo de los mercados del trabajo, la nueva estructuración de la vida económica de carácter neoliberal y los problemas que tienen los trabajadores respecto de su seguridad económica. De partida, una parte de los pequeños empresarios entrevistados presentó un importante desconocimiento de la normativa laboral, una mínima valorización del trabajador como sujeto portador de derechos y en ellos prima una visión en donde los trabajadores son reconocidos sólo como sujetos con deberes.

A partir del análisis de las entrevistas se establecieron posibles explicaciones para dar cuenta de la especificidad que tiene el uso de las normas y reglas laborales en la pequeña empresa. Por ejemplo, el desconocimiento de la normativa laboral ocurriría principalmente como consecuencia de una representación simbólica de la relación laboral en la cual ésta se entiende como una relación familiar. En este sentido, al interior de la pequeña empresa, la relación entre empleador y trabajador, sería construida bajo rótulos distintos a los dados por la moderna concepción del vínculo entre capital y trabajo. En este caso, serían más importantes aspectos como la fidelidad absoluta del trabajador hacia el empleador y la centralidad del empleador representado simbólicamente en la figura del padre. Bajo estas condiciones las relaciones laborales en la pequeña empresa son sostenidas por representaciones simbólicas que legitiman

¹⁶ Rodrigo Figueroa y Andrés Montero, *Derechos laborales y pequeña empresa*, Santiago, 2003. Informe de resultados entrevistas a pequeños empresarios del sector metalmeccánico del Gran Santiago, solicitado por la Dirección del Trabajo. Ver también Pablo Baltera et al. Cuadernos de Trabajo N° 24, Dirección del Trabajo.

la reducción de los trabajadores a meros sujetos que sólo son portadores de deberes frente al empleador. Este aspecto, entre otros, determinaría la debilidad de las instituciones laborales en la pequeña empresa y la relación de los pequeños empresarios con el incumplimiento de la normativa laboral.

Otro aspecto relevante, que surge a partir de afirmaciones de pequeños empresarios entrevistados, es la constatación, de que en ocasiones el incumplimiento de la norma laboral sería compartido por trabajadores y empleadores. Dicha situación, correspondería a una estrategia para enfrentar las incertidumbres económicas propias a los precarios contextos en donde se desarrollan las pequeñas empresas. En efecto, de acuerdo a los relatos sistematizados, en ocasiones suelen tomarse decisiones en torno a privilegiar la continuidad de la unidad productiva antes que el cumplimiento de la normativa laboral, entendiendo que para satisfacer los requerimientos de la demanda, que es intermitente y variable, deben violentarse normas laborales, como las referidas a duración de la jornada de trabajo, a los días de descanso laboral o a la definición de los ingresos por horas extras. Muchas veces, este aspecto que he citado, se toma como una expresión de la rigidez de la normativa laboral y se invisibiliza el problema estructural que presenta la pequeña empresa en el modelo de desarrollo neoliberal. En efecto, más que una consecuencia de la rigidez de la normativa laboral, lo que evidencia el incumplimiento compartido de la normativa laboral es el carácter que tiene la relación entre la pequeña empresa y las grandes empresas, en donde los términos de intercambio desfavorecen a la primera en tanto son abusivos, discriminadores y basados en la asimetría de los poderes de negociación¹⁷. Por otra parte, el incumplimiento compartido de la norma laboral expresaría la debilidad de la pequeña empresa en cuanto a la generación de riqueza - ver tabla N° 3 -. La marginalidad económica de la pequeña empresa y su debilidad ante las grandes empresas impactan directamente en la organización de las relaciones laborales y en la construcción de los mercados del trabajo, estableciendo los parámetros de la relación entre empleador y trabajador y definiendo la actual segmentación social de los mercados el trabajo.

Quiero entregar algunos detalles del uso de la normativa laboral en los pequeños empresarios entrevistados y así visibilizar de mejor forma las particularidades y problemas anteriormente indicados. Para esto, he distinguido distintos grupos de pequeños empresarios en función de su relación con la normativa laboral. Los grupos que he definido dan cuenta de importantes matices entre los pequeños empresarios respecto del uso de la norma laboral. En este sentido, se pueden distinguir pequeños

¹⁷ La violación de la normativa laboral también ocurre como consecuencia de la inestabilidad que presenta la demanda asociada a las pequeñas empresas. En rubros como el matalmecánico este hecho implica que en determinados períodos haya ausencia total de trabajo y, en otros, la necesidad de realizar, durante varias semanas, jornadas de trabajo de más de 12 o 14 horas. Adaptarse a esta inestabilidad es el desafío permanente de la pequeña empresa.

empresarios a los cuales les resulta odiosa la institucionalidad laboral y otros que valoran la legislación laboral en tanto es un piso mínimo para generar competitividad en igualdad de condiciones. La caracterización de los pequeños empresarios también ha permitido hallar semejanzas y reconocen, con matices por cierto, que la normativa laboral no es adecuada a las diversas realidades de la pequeña empresa. Los pequeños empresarios señalan que es difícil sostener sus actividades siguiendo una normativa laboral que está hecha en función de las características y realidades de las grandes empresas. Las similitudes y diferencias existentes en los relatos de los pequeños empresarios indican que la pequeña empresa es una realidad sociolaboral compleja y su desarrollo incide directamente en el desempeño de los mercados del trabajo.

Tabla 3
Realidad económica de la pequeña empresa

Año	micro		Pequeña		Mediana		Grande	
	% total n° empresas	% ventas	% total n° empresas	% ventas anuales	% total n° empresas	% ventas anuales	% total n° empresas	% ventas anuales
1999	80.9	4.2	15.9	12.0	2.1	10.7	0.97	73.1
2000	84.0	3.4	13.1	10.5	1.99	10.3	0.9	75.8
2001	84.2	3.1	12.9	9.5	1.98	9.3	0.91	78.1
2002	83.8	2.9	13.2	10	2.05	8.9	0.96	79.1
2003	81.8							

a) Grupo 1: La normativa laboral como obstáculo para el desarrollo de la pequeña empresa. Este primer grupo de pequeños empresarios les fue el hecho de no otorgarle ningún valor relevante a la normativa laboral entendiéndola como un obstáculo para el éxito de la actividad emprendedora. Entre estos pequeños empresarios se califica a la normativa laboral como un mecanismo de protección sólo para los intereses de los trabajadores y, por tanto, sinónimo de conflicto y negación del libre ejercicio para crear y desarrollar empresas. Los aspectos de la normativa laboral que más cuestionan son la indemnización por despido y las restricciones a la jornada de trabajo, normas que sólo hacen que las empresas se vean “acogotadas” y se dirijan a la quiebra¹⁸. En este universo de pequeños empresarios las empresas tiene un carácter

Fuente: La situación de la micro y pequeña empresa en el país. Sercotec, 2005

¹⁸ A pesar del aumento de los contratos de trabajo flexibles en las pequeñas empresas sigue existiendo un grupos de trabajadores que presentan una fuerte ligazón con sus empleadores. Esto último, se puede explicar por la naturaleza de las relaciones laborales en estas unidades productivas, como en el caso específico del sector metalmeccánico, en donde es un plus el desarrollo de un saber laboral específico y único como el de maestro tornero. En estas unidades productivas, la relación entre antigüedad y puesto de trabajo sigue siendo un importante activo y lo que prima, desde el punto de vista de los requisitos que define el empleador, es la experiencia de los trabajadores.

familiar y en ellas prima la relación laboral mediada por normas o reglas que son propias de una estructura de relaciones de parentesco. Como consecuencia de este último aspecto las relaciones laborales son construidas en función de la total dependencia, social y simbólica, del trabajador respecto del empleador.

En este grupo, llama la atención la percepción que tienen respecto de la relación entre la calidad de los trabajadores y la normativa laboral. En general, las calificaciones que tienen estos pequeños empresarios acerca de sus trabajadores son negativas, en tanto abundan afirmaciones como “sacan la vuelta”, “son flojos” y no tienen “actitud para el trabajo” -. En este sentido, el esfuerzo a destajo es el único mecanismo para asegurar el éxito económico -. Frente a ello, los pequeños empresarios de este grupo reclaman por la imposibilidad que genera la normativa laboral para discriminar entre los buenos y malos trabajadores. Según éstos, el exceso de protección para con los trabajadores y el alto monto de las indemnizaciones impide seleccionarlos adecuadamente. En opinión de los pequeños empresarios normas como la “Ley Bustos” impide echar a los trabajadores que no tienen buenos rendimientos o presentan “malas costumbres” - se refieren textualmente a hábitos como el robo - . A partir de esta percepción sobre los trabajadores, los pequeños empresarios de este grupo explican el origen del conflicto laboral como consecuencia de la flojera, la desconfianza hacia el patrón y los malos hábitos de los trabajadores.

“La legislación tiene caminos muy diferentes a lo que, en la realidad, el trabajador necesita. Entonces yo mantengo un grupo humano muy pequeño, trato de tener buena comunicación y estar cerca de ellos. Con nuestra política, nuestra manera de ser, hemos logrado muy buenos resultados. La parte de la legislación laboral no me interesa la verdad” (empresario meatalmecánico 8).

b) Grupo 2: aceptación de la normativa laboral pero con apreciaciones sobre su contenido protector

En este segundo grupo, la percepción de la normativa laboral es más positiva y tiende a relacionarse con una visión más moderna de la actividad emprendedora, especialmente, en lo referido a los valores y al impacto en la organización funcional de los procesos de trabajo. Por ejemplo, este grupo de pequeños empresarios le otorga un mayor valor al cuidado del clima laboral y asumen que los resultados de la empresa tienen directa relación con el respeto a los derechos laborales. Además, este grupo relaciona el respeto a la normativa con la posibilidad de constituir un piso mínimo para generar competitividad en igualdad de condiciones. Al parecer, para estos empresarios, la eficiencia al momento de competir, en escenarios económicos definidos por la volatilidad de los mercados, tiene como condición el

cumplimiento de la normativa laboral. La preocupación por respetar la norma se explicaría porque su incumplimiento produciría distorsiones en los mercados a partir de las ventajas competitivas que obtendrían aquellos pequeños empresarios que no respetan los derechos de los trabajadores. La existencia de malos empresarios, que incumplen la normativa laboral, produce competencia desleal y altera el correcto uso de las reglas del juego en la vida económica. En definitiva, el cumplimiento de la normativa laboral sentaría las condiciones necesarias, aunque no suficientes, para una plataforma común desde donde se pueden desarrollar las actividades de emprendimiento. En definitiva, el cumplimiento de la normativa laboral se convierte en un activo económico y no en obstáculo.

La aceptación de la normativa laboral no implica que a ésta se le valore sólo de manera positiva. En este grupo se estima que sería importante adecuar la normativa laboral a las capacidades reales de cumplimiento de la misma. Al igual que en el grupo 1 se demanda mayor flexibilidad en aspectos como las indemnizaciones, el despido y en el cumplimiento de condiciones medioambientales relativas a los procesos productivos. Si bien esta opinión es similar a la del grupo 1 adquiere, en este caso, una connotación distinta, ya que no se pretende anular la normativa laboral, sino más bien, adecuarla a la realidad económica y productiva del sector.

“A ver yo creo que bajo mi punto de vista a la legislación laboral no le encuentro dificultades, o sea a lo mejor yo tengo una mentalidad más social, pero yo creo que los trabajadores hoy día eh... la legislación esta hecha de acorde a los tiempos que estamos viviendo” (empresario metalmecánico 12)

c) Grupo 3: Desconocimiento y falta de interés de la normativa laboral.

El tercer grupo de pequeños empresarios tiene una percepción de la normativa laboral que se basa en la menor importancia que le otorgan en la constitución de la relación laboral. Esto se explicaría porque la consideran innecesaria para regular las relaciones entre empleadores y trabajadores. En este sentido, afirman que la cantidad de reglas que regulen la relación entre empleador y trabajador debe ser mínima o definida en términos particulares. En este grupo, fue recurrente escuchar que la relación laboral se sustenta en aspectos como el esfuerzo, el conocimiento del empleador sobre el trabajador y la referencia al dinero como única aspiración del trabajador. Además, para este grupo la normativa laboral también es un elemento que distorsiona la relación laboral ya que desconoce la forma en que se construye la confianza entre empleador y trabajador. Por otra parte, consideran que la normativa laboral protege al trabajador ya que no castiga sus conductas negativas y sólo pone atención en el comportamiento del empleador. Para estos pequeños empresarios las

relaciones laborales se construyen en función de una ética que apela al sobre-esfuerzo y que consideran como fuente para el éxito económico. Por tal razón, el empleador de este grupo gasta una buena parte de su tiempo en identificar al trabajador malicioso y en apelar constantemente a la relación entre el sobreesfuerzo laboral y el éxito económico.

Quisiera ahondar en la percepción de estos pequeños empresarios acerca de lo innecesario que resultan las normas laborales. En estricto rigor, estos asimilan la relación laboral a una simple relación de parentesco, pero, a diferencia del grupo n° 1, esta percepción de la normativa laboral, también se explica porque el empleador es el único que conoce las cualidades y las necesidades de sus trabajadores, y que además es el único capaz de abordarlas y reunir las en función del proceso productivo. La manera en que se desarrolla esta relación conlleva a que algunas de las normas o reglas sean elaboradas en la realidad íntima del taller, lo cual no coincide necesariamente con la normativa legal. Por esta razón, podríamos hablar, en este caso, de modelos particulares y específicos que articulan los intereses de los trabajadores y los empleadores.

En términos generales, los pequeños empresarios de este grupo exigen, de parte de sus trabajadores, un gran compromiso con el trabajo y fundamentan esta exigencia en términos de lealtad. Esto último, es lo que genera una cultura organizacional basada en el paternalismo empresarial, extremadamente autoritario, y en la cual la relación laboral no requiere estar mediada por normas y reglas. En la perspectiva de este grupo, la relación laboral debe ser construida desde un carácter épico de la gesta del trabajo y, por ende, como expresión de la auto-explotación y entrega absoluta a los requerimientos de la actividad económica. Esta apelación al esfuerzo desmedido anula cualquier intento por defender el carácter ciudadano que debería ostentar el trabajador. En estricto rigor, lo anterior permite una cultura organizacional que suspende la práctica y presencia de los derechos laborales.

“La legislación laboral, entre comillas. Cada uno se preocupa de su interés personal. Por lo tanto, la legislación laboral tiene importancia para tomar determinaciones en casos puntuales, pero es independiente que cada uno tome sus propias decisiones; el trabajador y el empleador de manera independiente. Son matrimonios temporales. Es una sociedad en que el empleador pone el capital y el trabajador pone su empeño y juntos logran hacer algo. Pero la sociedad, como todo tipo de cosas tiene su final también (empresario metalmecánico 20)”

3.2.1 ¿QUÉ DERECHOS LABORALES PARA LA PEQUEÑA EMPRESA?

Los relatos sistematizados parecen indicar que en la pequeña empresa existirían diversas culturas organizacionales. Para explicar dicha características nos debemos remitir a la inestable relación entre la pequeña empresa y su entorno económico, a la forma en que interaccionan sus miembros al interior del taller y el valor que tiene para los pequeños empresarios la normativa laboral. En los tres grupos de pequeños empresarios encontramos distintas formas de entender la relación con los trabajadores y el uso de la normativa laboral. Las consecuencias de esta diversidad son la existencia de diferentes modos de estructuración de las relaciones laborales y una importante segmentación de los mercados de trabajo. En efecto, la aspiración de algunos pequeños empresarios entrevistados, de construir relaciones laborales sin la mediación de normas y en función de la libre movilidad de las fuerzas del mercado, representa una visión de cómo deben funcionar los mercados del trabajo. Esto es importante, en términos de la promoción de seguridad económica y trabajo decente, ya que las actuales relaciones laborales en la pequeña empresa trascurren con un escaso valor otorgado a la norma laboral, desprovistas de mecanismos de representación de intereses como el sindicato y con una débil presencia de la inspección del trabajo.

3.3 LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS DE TEMPORADA: PRECARIEDAD Y VENTAJAS COMPETITIVAS EN MERCADOS INTERNACIONALES

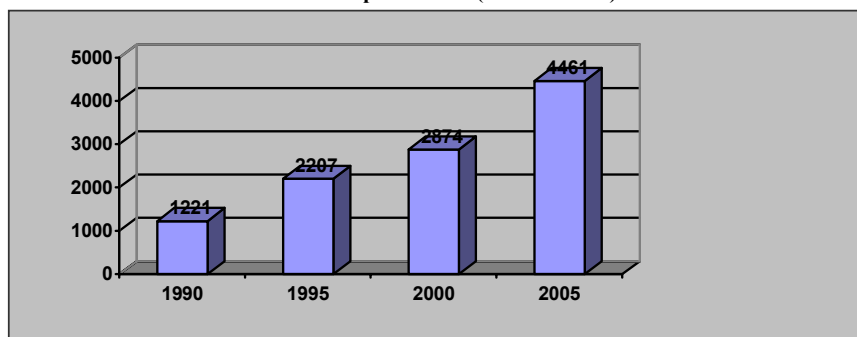
En las últimas décadas, el sector agroexportador chileno ha destacado por dos hechos: sus éxitos económicos y las permanentes denuncias sobre una tendencia a la precarización laboral. Al relacionar estas dos últimas cuestiones, llama la atención el vínculo, que aparentemente existiría, entre el éxito económico, en el marco del comercio internacional, y la mala calidad de los empleos en el sector agroexportador. Es decir, existiría una relación entre la precarización de las condiciones laborales en el sector y las ventajas competitivas que las empresas agropexportadoras obtendrían en los mercados internacionales¹⁹.

A partir de entrevistas realizadas a dirigentes y trabajadores agrícolas de temporada he intentado identificar aquellos aspectos que permiten la precarización de las

¹⁹ Esto constituiría dumping social concepto que liga la configuración de posiciones ventajosas en los mercados internacionales con realidades laborales, medioambientales y sociales precarias. Desde esta perspectiva, las ventajas competitivas, que pudieran obtener, principalmente, países en desarrollo, estarían asociadas a factores como la ausencia de contrato de trabajo, dificultades de los trabajadores para ejercer la acción colectiva o las precarias condiciones laborales desde el punto de vista de la higiene y seguridad ocupacional.

relaciones laborales en el sector agroexportador²⁰. Para ordenar la información aportada por los relatos y las fuentes secundarias disponibles, siempre limitadas y de baja calidad, he establecido cuatro niveles de análisis: a) la relación contractual, b) las condiciones de trabajo, c) el acceso a la protección y previsión social y d) la presencia del Estado en las relaciones laborales - fiscalización e información sobre la realidad de los trabajadores de temporada -.

Gráfico 3
Evolución de exportaciones (MMS dólares)



Fuente: DIRECON

3.3.1 LA RELACIÓN CONTRACTUAL:

En lo que se refiere a este punto, los testimonios entregados por trabajadores y dirigentes entrevistados ratifican la estructuración de relaciones laborales en función de contratos de trabajo de carácter temporal. A su vez, las entrevistas también han permitido establecer las prácticas que viabilizan el incumplimiento laboral en materia de contratación de trabajadores. En este sentido, se denuncia la existencia de presiones para firmar contratos en blanco, que nunca llegan a formalizarse, y que el mayor número de trabajadores, sin contrato de trabajo, son provistos por enganchadores y contratistas. Junto a lo anterior, se señala que es una práctica común la formalización de contratos de trabajo cuya duración no es superior a los 3 meses. Incluso, en ocasiones, la duración de los contratos de trabajo es menor a 30 días. Además, se dice que aun siguen perviviendo prácticas como la no escrituración de los contratos de trabajos, lo cual genera problemas para el acceso de los trabajadores agrícola de

²⁰ Entrevistas realizadas a 8 dirigentes de trabajadores agrícolas de temporada y 20 trabajadores agrícolas entre Enero y Diciembre del 2005. Las regiones en las cuales se realizaron las entrevistas fueron IV, V, VII región.

temporada a los sistemas de protección social y seguridad social. Por último, la falta de escrituración de contratos de trabajo y las formas en que éstos se realizan, impiden el correcto ejercicio de los derechos laborales y determina altos índices de desprotección entre los trabajadores, exponiéndose a las decisiones arbitrarias de los empleadores, especialmente, en aspectos como la extensión arbitraria de las jornadas de trabajo y las irregularidades en la definición de los salarios.

Abora se contrata por semana, 15 días, mes, hasta dos meses en todas la empresas, bodega y en el campo. En el año pueden tener hasta 5 o 6 contratos, incluso hay empresas que están dado contratos por faenas o sea al final dentro de 3 0 6 meses uno tiene un alto así de contratos.....Lo hacen por faena y esta no dura más de una semana, de ahí lo cambian a otra cosa, le hacen otro contrato al fin y al cabo el trabajador termina siendo como si recién estuviera entrando, ni le reconocen nunca la fecha que ingreso al predio, sino es por faena entonces que ha pasado, con esto ha habido muchos problemas para cobrar la cesantía, esto lo llevan a cabo empresas y los contratistas. (Dirigente V región)El problema en las empresas es cuando despiden a la gente no le dan sus carta de aviso como corresponde y la ley lo exige. Le hincan que el trabajo terminó y en la tarde los despiden.....lo otro no respetan las horas extras, muchas veces hacen trabajar horas de más y no se las pagan (Dirigente de la V región).

Algunas Características de los trabajadores de temporada del valles de Copiapó según sus tipos de contrato y procedencia.

- Centralidad de la contratación temporal de los trabajadores y trabajadoras del sector agroexportador. De acuerdo al estudio en el valle de Copiapó un 83% de los trabajadores tenían contratos temporales.
- Alta presencia de trabajadores migrantes en el valle de Copiapó. Un 50% los trabajadores proviene de la Cuarta Región de preferencia de la ciudad de Ovalle (movilidad histórica de los temporeros del Limarí). En promedio el 60% de los trabajadores contratados en el valle de Copiapó por las empresas entrevistadas en el marco de la investigación son migrantes.

Fuente: Empleo y condiciones de trabajo en la producción de Uva de exportación en el valle de Copiapó, CEDEM-Dirección del Trabajo, 2006, Documento de Trabajo 23.

* Esta investigación es un de los pocos trabajos en donde se entregan estadísticas laborales con la realidad propiamente tal del sector agroexportador. En general, otras fuentes de información, no distinguen entre trabajadores rurales y trabajadores agrícolas de temporada en el sector agroexportador.

3.3.2 LAS CONDICIONES DE TRABAJO:

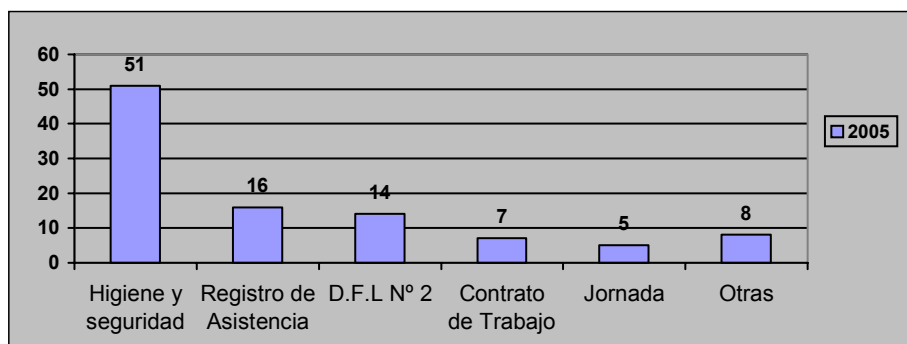
Las condiciones de trabajo es uno de los aspectos más críticos en el ámbito del trabajo agrícola de temporada. En el sector, son recurrentes ambientes laborales que no presentan las condiciones mínimas en lo referido a servicios higiénicos, infraestructura para la alimentación o en aspectos como el transporte al interior de los predios. Los dirigentes entrevistados indican que es común que los predios no cuenten con servicios higiénicos tanto en calidad como en número. Además, señalan que los trabajadores aportados por empresas contratistas o enganchadores no tienen el mismo nivel de seguridad laboral que los trabajadores contratados directamente por las empresas. En cuanto a problemas en la infraestructura para alimentación son los pequeños y medianos predios agrícolas en donde se presentan mayores irregularidades y los trabajadores deben consumir sus alimentos en el mismo terreno.

Otro de los elementos negativos es la exposición de los trabajadores agrícola de temporada a sufrir accidentes por el contacto con productos químicos. En este caso, los dirigentes sindicales reclaman por la poca seguridad que tienen los trabajadores aportados por contratistas y enganchadores quienes no proveen de los necesarios implementos de seguridad laboral. Además, en el caso de que se produzca un accidente, los contratistas trasladan a sus trabajadores a hospitales públicos y ocasiones, estos trabajadores, son atendidos como indigentes, lo que se explica por la falta de escrituración de los contratos de trabajo. Como una forma de complementar la información entregada por los dirigentes y trabajadores, respecto de las condiciones de trabajo, se puede citar la información entregada por la Dirección del Trabajo en lo referido a fiscalización 2004-2005. En esta información, se observa, que durante el período aludido, del total de multas aplicadas a los empleadores en el sector agrícola de temporada, el 51% lo fueron por falta a la normativa laboral en higiene y seguridad. Esta cifra, reafirma los problemas que presenta el sector en cuanto a calidad del trabajo y las condiciones en que laboran los trabajadores agrícolas de temporada.

*“El problema más grande que está quedando es el del plaguicida están afectando mucho a los trabajadores. En este comuna está muriendo mucha gente de cáncer”..... “hay poblaciones entre las viñas y todo ese plaguicida de se desparrama en el aire, contamina todo, el aire y el agua”..... “los trabajadores están trabajando en los predios y están aplicando plaguicidas”
(Dirigente V región).*

*“Un accidente es por falta de seguridad, las empresas no le dan lo medio para estar seguros – a los trabajadores – son muy pocas las empresas que tienen materiales para que los trabajadores fumiguen y puedan usarlos y no tener riesgos”,
(dirigente de la V región).*

Gráfico 4
Estructura de multas aplicadas por la dirección del trabajo en el sector hortofrutícola 2004-2005



Fuente: Dirección del Trabajo, Estadísticas de Fiscalización 2005

3.3.3 PROTECCIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA SALUD

La ausencia del contrato de trabajo o la temporalidad de los mismos condiciona una importante experiencia de vulnerabilidad social entre los trabajadores agrícolas de temporada. Cada año, una parte importante y significativa de estos trabajadores, especialmente las mujeres, quedan al margen del los sistemas de salud y previsión social. El uso masivo de los contratos temporales incide en la temporalidad de la cotización que hacen los trabajadores al sistema provisional y en caso de no existir contratos su exclusión del mismo. En los últimos años, se han impulsado reformas para facilitar la integración de los trabajadores agrícolas de temporada a la salud pública y se ha dispuesto la entrega de tarjetas de afiliación para trabajadores agrícolas de temporada que acrediten cuatro meses de trabajo (contrato de trabajo). El número

de trabajadores de temporada agrícola inscritos en este régimen especial no alcanza a ser los 60.000, cifra menor, frente a los 400.000 trabajadores del sector. No cabe duda, que la existencia de trabajadores que no poseen contratos de trabajo o la escrituración de los mismos es por menos de 3 meses e, incluso, menor a 30 días, atenta contra calidad del empleo.

“Mire el problema es que los trabajadores los despiden sin tener AFP, pagadas sus imposiciones al día salud todo al día....para despedir a un trabajador ellos tienen que tener sus imposiciones pagadas, no sólo declaradas, ellos no las declaran, sólo despiden a los trabajadores y hasta luego” (Dirigente V Región).

3.3.4 EL ROL DEL ESTADO: LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN

El rol del Estado en materia laboral fue ampliamente transformado una vez que el proceso de modernización neoliberal determinó su reducción y una mayor presencia del mercado como mecanismo de coordinación social. Teniendo en cuenta este hecho me aproximaré a la acción inspectiva de la Dirección del Trabajo en el sector agrícola exportador. Un primer aspecto a resaltar son los avances y debilidades institucionales de la Dirección del Trabajo en el ámbito de la fiscalización en el sector agroexportador. En lo que se refiere a las debilidades estas se refieren a problemas de cobertura que se explica, principalmente, por las dimensiones territoriales de algunas zonas agrícolas y su nula relación con los recursos dispuestos para la fiscalización. En cuanto a los avances, se advierten logros en la coordinación de la acción inspectiva con otras entidades públicas y la instalación de mesas de trabajo a nivel comunal para abordar los problemas laborales en el sector. Sin embargo, atenta contra este último hecho, la no existencia de un marco normativo/institucional que ampare el dialogo social y le dé mayor peso a las decisiones adoptadas mediante esta práctica²¹.

Desde la perspectiva de los dirigentes, se señala que la acción de fiscalización sigue siendo débil frente a los empleadores. A su vez, los dirigentes sindicales y trabajadores indican que resulta fácil engañar a los fiscalizadores cuando acuden a predios o packings. En este caso, una práctica común, entre empleadores y enganchadores, es esconder a los trabajadores para que no sean entrevistados por los inspectores del trabajo e invisibilizar así el incumplimiento de la normativa laboral. Además, también se denuncia la falta de atención en las oficinas provinciales de la Inspección del Trabajo ya que a los dirigentes se les niega el acceso a información,

²¹ Existe también un esfuerzo por difundir la legislación laboral en el sector agrícola de temporada y la definición de normas que han promovido la sindicalización de estos trabajadores.

especialmente, aquella que tienen relación con el comportamiento de empresas, enganchadores o contratistas. Por último, existe molestia en los dirigentes por la falta de coordinación de las entidades estatales involucradas en la fiscalización de los ambientes laborales. En este caso, los trabajadores señalan, como ejemplo, la falta de coordinación que tienen Inspección del Trabajo y el Ministerio de Salud en materia de seguridad e higiene en los ambientes laborales.

“La inspección del trabajo no tiene tanto personal para fiscalizar, aquí ya son más de 60 viñas y no tienen personal suficiente ni la locomoción suficiente como para recorrer todos esos predios, ese es el problema de la inspección del trabajo, falta de dinero, falta de medios, para poder hacer su trabajo, llegar a los predios-...ellos en estos momentos están pobres igual que nosotros de pobres.

(Dirigente V región.)

Evolución de multas en el sector agrícola

2000			
	Número de empleadores fiscalizados	Multas aplicadas	Tasa de aplicabilidad de multas (Multas/Numero de Empleadores fiscalizados)
<i>Agricultura</i>	8.975	4.059	45.2
<i>Comercio</i>	10.272	8.092	78.7
<i>Construcción</i>	13.947	7.891	56.6
<i>Comercio</i>	27.656	14.981	54.2
1995			
	Número de empleadores fiscalizados	Multas aplicadas	Tasa de aplicabilidad de multas (Multas/Numero de Empleadores fiscalizados)
<i>Agricultura</i>	8.359	3.238	38.7
<i>Comercio</i>	10.028	6.582	65.6
<i>Construcción*</i>	4.787	4.963	103.7
<i>Comercio</i>	22.620	10.037	44.4

Fuente: Dirección del Trabajo. *Es factible que haya ocurrido un número mayor de multas que de empleadores fiscalizados en tanto un empleador pudo haber sido multado por más de un concepto. Las cifras actualizadas no son posibles de obtener por errores en la configuración de las bases de datos en la DT.

Tipos de trabajadores al interior de una unidad productiva del sector agroexportador de la provincia del Limari y el contenido de su relación laboral

▲

Este esquema da cuenta de la estructuración de las relaciones laborales en predios de la cuarta región orientados al sector agroexportador. Llama la atención el hecho que en una misma unidad productiva existan diferentes tipos de trabajadores y que además poseen distintos grados de ciudadanía laboral. Esta característica es, quizás, la mayor particularidad de este sector económico y se puede decir que en ella se sustenta, parte, del éxito económico del sector. Aquí, la flexibilidad laboral, es entendida como la construcción de relaciones laborales en donde existen trabajadores con distintos grados de ciudadanía laboral y expresiones de vulnerabilidad social. En general en estas unidades al momento pick de la cosecha llegan a trabajar alrededor de 600 trabajadores en 750 hectáreas.

Fuente: Entrevistas realizadas a dirigentes sindicales y trabajadores agrícolas de temporada de la provincia del Limari y observación de terreno. Enero 2005.

4. ¿CÓMO ABORDAR UNA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL?

A través de este texto, he querido llamar la atención sobre la necesidad de replantear la comprensión que tenemos de la relación entre trabajo y sociedad. Para ello, he tomado como objeto de estudio la indagación de los factores simbólicos e institucionales que estarían incidiendo en la actual construcción social de los mercados de trabajo. Estos elementos, los encontramos en las nuevas formas de sociabilidad que existen en los ambientes laborales de los trabajadores de sectores medios, en las percepciones sobre el valor y uso de la normativa laboral en la pequeña empresa, y en la precariedad laboral del sector agroexportador.

Los antecedentes aportados por dirigentes sindicales y trabajadores del sector agrícola exportador, pequeños empresarios metalmecánicos y trabajadores de sectores medios, me permiten tener certeza sobre la tendencia hacia la individualización y mercantilización de las relaciones laborales, condicionando la organización y desempeño de los mercados del trabajo. Estas tendencias resultarían ser complementarias a la aspiración, de quienes defienden el alcance del modelo de desarrollo neoliberal, de construir relaciones laborales a partir de la eliminación de sus cuerpos institucionales como el sindicato o el Estado. Sin embargo, son evidentes los problemas que genera de esta forma de comprensión de las relaciones laborales y los mercados del trabajo. En general, el actual marco en donde se construyen socialmente los mercados del trabajo ha determinado un significativo aumento de inseguridades y riesgos para las trayectorias laborales. La inestabilidad en el empleo, producto de los cambios institucionales en materia de normas laborales, y la legitimidad de estructuras simbólicas que alientan la individualización de las relaciones laborales, generan dificultades materiales y subjetivas a los trabajadores, hecho que se manifiesta en una mayor percepción de desprotección e inseguridad ante las vicisitudes de los entornos económicos y los mercados del trabajo. Aún más, las tendencias hacia la individualización y la mercantilización de las relaciones laborales han condicionado los procesos de movilidad social y las expresiones del bienestar social y económico en el Chile actual.

Finalmente, deseo expresar mi certeza respecto de la reorganización de la relación entre trabajo y sociedad, cuyo aspecto más problemático resulta ser la imposibilidad que tienen las personas de producir seguridad a través del trabajo asalariado. En los actuales escenarios y ambientes de trabajo, llenos de desconfianza, incertidumbre y precariedad, se ha cristalizado un carácter distinto del “nosotros”, el que se expresa en el vivir la experiencia laboral como un desafío basado en la necesidad de adaptarse, de manera individual, sin recursos y medios de apoyo, a los cambios en los mercados del trabajo. Sin duda, que esto corresponde a lo definido por el pensamiento hegemónico, que nos indica que la adaptabilidad a los mercados debe ser resuelta en términos de la centralidad que tienen la responsabilidad individual y la individualización

no asistida. Sin embargo, el permanente fracaso de esta afirmación ideológica condiciona la forma que adquiere la falta de cohesión social y determina las nuevas formas de producción de la desigualdad. Los elementos aquí expuestos sobre las relaciones laborales del Chile actual definen la necesidad de impulsar un debate acerca de cómo generar un escenario del trabajo completamente distinto al existente, teniendo en cuenta la permanente pérdida en la calidad del empleo - ver gráfico 5 - . Creo que esto es posible, desde la sociología, en tanto se puedan recuperar conceptualmente y metodológicamente los estudios del trabajo y entender que estamos frente a una nueva cuestión social, en donde la contradicción central es aquella entre seguros e inseguros²².

²² Entenderemos por cuestión social la emergencia de patologías sociales tales como el desempleo y la precariedad y cuyo fundamento es posible encontrarlo en los nuevos modos de constitución del capitalismo, los cuales han quebrantado las formas de la estabilidad y seguridad económica que fueron propias del capitalismo industrial. En el caso de las sociedades latinoamericanas se ha definitivamente borrado cualquier resabio del estado desarrollista y de la posibilidad de subordinar lo económico a lo político. Sin embargo, y en oposición a la cuestión social de comienzos de siglo, la actual expresión del fenómeno difiere en su amplitud y en los rasgos de la descomposición de las formas de protección social. Diría que es más amplia porque se extiende entre los grupos en situación de pobreza y los nuevos grupos medios.

BIBLIOGRAFÍA

Campero Guillermo. “Las relaciones laborales en los noventa: cambios estructurales e impacto sobre los actores sociales”. En: Montero Cecilia, et.al. Trabajo y empresa entre dos siglos. Nueva Sociedad, FES, Santiago.

Código del Trabajo (2002). Dirección del Trabajo, Gobierno de Chile.

De la Garza, Enrique (1999). “La Flexibilidad del Trabajo en América Latina”. En: Enrique de la Garza (comp.) Tratado latinoamericano de sociología del trabajo. FCE, México, 1999.

Espinoza Vicente (2001). Redes sociales laborales y capital social: Elementos teóricos y metodológicos para el estudio comparativo de las redes de movilidad ocupacional. Mimeo.

Figueroa Rodrigo, *Desempleo y precariedad en la sociedad de mercado*, RIL-PREDES, Santiago, 2002.

Figueroa Rodrigo y Andrés Montero (2003). “Los derechos laborales en la pequeña empresa”. Inédito, Mimeo, Santiago.

Figueroa Rodrigo (2003). Integración, clases medias y trabajo. Inédito, PREDES, Santiago.

Figueroa Rodrigo y Avendaño Octavio (2003). Intereses públicos e intereses privados. Anuario del Año 2003, Departamento de Sociología, Universidad de Chile.

Henríquez, Helia (1999). “Las relaciones laborales en Chile: ¿Un sistema colectivo o un amplio espacio de dispersión? En: Drake Paul y Jaksic Iván. El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa. LOM, Santiago.

Henríquez Helia y Verónica Uribe-Echeverría (2003). Trayectorias laborales: la certeza de la incertidumbre. Cuadernos de Investigación N° 18, Dirección del Trabajo, Santiago.

Lechner Norbert (1997). Tres formas de coordinación social. En: Revista de la CEPAL, N° 61.

Martínez, Arturo y Javier León (2001). La estratificación social chilena hacia fines del siglo XX. Series de la CEPAL. Santiago.

Montero, Cecilia (1997). La revolución empresarial chilena. DOLMEN-CIEPLAN, Santiago.

Ortega, Eugenio (1999). “Sociedad, Política y Mercado en un mundo globalizado”. En: Aedo Cristián, et al. Desafíos para Chile en el siglo XXI: Reformas Pendientes y Desarrollo Económico. UAH-Konrad Adenauer Stiftung, Santiago.

Polanyi, Karl (1992). La Gran Transformación. Fondo de Cultura Económica, México. (1ra edición 1942)

Sennett Richard (2000). La corrosión del carácter. Anagrama, Barcelona.

Sercotec SERCOTEC (2003) “La situación de la micro y pequeña empresa en Chile, Santiago, Gobierno de Chile.

Wagner, Peter (1997). La Sociología de la modernidad. Herder, Madrid.